

CEFERINO REATO

LOS 70

LA DÉCADA QUE SIEMPRE VUELVE

TODA LA VERDAD SOBRE PERÓN, LA GUERRILLA, LA DICTADURA,
LOS DESAPARECIDOS Y LAS OTRAS VÍCTIMAS

SUDAMERICANA



CEFERINO REATO

LOS 70. LA DÉCADA QUE SIEMPRE VUELVE

*Toda la verdad sobre Perón, la guerrilla,
la dictadura, los desaparecidos
y las otras víctimas*

SUDAMERICANA

SÍGUENOS EN
megustaleer



@Ebooks



@megustaleerarg



@megustaleerarg

| Penguin
Random House
Grupo Editorial |

OceanofPDF.com

Introducción

AÑOS VIVOS

Lo correcto políticamente evita el peligro del descalabro, pero nos inunda de gris. Si todo está marcado por el cálculo, cualquier idea de iluminación es ilusoria.

Héctor Schmucler, semiólogo e intelectual argentino, mayo de 2005.

La Historia no se hace con un objetivo político (o si no, es una mala Historia), sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión.

Tzvetan Todorov, semiólogo, filósofo e historiador búlgaro francés, 7 de diciembre de 2010.

Unos y otros, revolucionarios y futuros represores, se parecían en algo: todos salían a la calle con la arruga puesta.

El personaje de la novela *Antes del diluvio*, de Mario Paoletti, sobre la convulsión social y política antes del golpe de Estado.

¿Por qué a los argentinos nos interesan tanto los 70? ¿Cuál es el atractivo de aquellos años de pasiones enfrentadas que despertaron sueños colectivos que aún hoy siguen provocando admiración y entusiasmo, pero que terminaron consumidos en la sangre, el fracaso y la frustración?

Hay muchas respuestas posibles; en parte, dependen del lado en el que cada uno se ubica en aquella época, ya sea por recuerdos propios o ajenos. Es historia, pero es historia viva porque sigue involucrándonos en el presente, como reflejo y aparente origen de las grietas que hoy nos atraviesan, aunque las divisiones fratricidas vienen desde hace mucho más tiempo, al menos desde nuestras luchas civiles, apenas después de la Revolución de Mayo.

Tanta vivacidad nos enciende, nos seduce. Hay, además, una razón que parece una frivolidad pero no lo es tanto. Nuestra historia no es, ciertamente, una espiral de progreso, un encadenamiento de éxitos, y sin embargo no ha sido nunca una historia gris, de gente aburrida. Aun en ese marco, los 70 se recortan como la época más atractiva, un set por el que desfilan escenas que parecen surgidas de la imaginación de libretistas geniales.

En mi opinión, los 70 nos siguen atrayendo tanto porque fueron una época en la que casi todos los argentinos se sintieron involucrados — algunos más, otros menos— en tres proyectos de país bien definidos, tres patrias como se decía entonces y se recuerda ahora: la Patria Socialista, la Patria Peronista y la Patria Militar.

“Patria” es la palabra precisa para definir los ideales, la entrega sin cálculos, la garra militante con la que esos proyectos fueron encarados, siempre al límite, creyendo que el cielo podía ser tomado por asalto, en una secuencia inevitable de acciones sobre las que ya no había nada para

reflexionar porque la verdad había sido revelada y estaba al alcance de los elegidos.

A pesar de hallarse mortalmente enfrentadas, el 25 de mayo de 1973, dos esas tres patrias fueron vivadas en la Plaza de Mayo por centenares de miles de argentinos felices debido a la vuelta del peronismo al gobierno; terminaban casi dieciocho años de proscripción.

—¡Perón, Evita, la Patria Socialista! —cantaban los montoneros, los más barulleros y numerosos.

—¡Perón, Evita, la Patria Peronista! —replicaban las columnas de los sindicatos.

Los partidarios de la Patria Militar no cantaban nada, asistían en silencio a los insultos de la muchedumbre contra todo aquel que tuviera uniforme, pero “si uno verdaderamente tenía oído”, como decía el personaje de la novela de Mario Paoletti, podía detectar que a la par se gestaba otra ola social, la de los contrarrevolucionarios, opuestos tanto a los guerrilleros como a los peronistas “de Perón”.

La Patria Socialista murió antes de nacer y la Patria Peronista se hizo añicos en poco tiempo. La Patria Militar también fracasó: el sueño de los militares que dieron el golpe del 24 de marzo de 1976, encaramados por un consenso social que impresiona tanto que ahora conviene olvidarlo, era disciplinar a la sociedad como si fuera de plastilina; terminó desvaneciéndose no solo por los miles de detenidos-desaparecidos sino también por la crisis económica de principios de los 80 y por la guerra perdida por Malvinas frente a Gran Bretaña y sus aliados.

Habrán notado dos cosas, una que a algunos les provocará rechazo. La primera —la más inocente— es que no me involucro entre los que vivaron a alguna de esas patrias, pero es solo por una cuestión de edad. Agradezco el detalle y espero que contribuya a mi esfuerzo de abordar esta década tan

compleja a través de la precisión en los hechos y el despojo de intereses particulares o de grupo que se espera del periodismo, al menos del periodismo no militante. Aparte de la búsqueda de la objetividad como un propósito que, aunque inalcanzable, se supone guía nuestro trabajo.

Más polémico es el supuesto de que, para mí, no solo los guerrilleros — protagonistas estelares de la época— eran jóvenes idealistas. No: idealistas también eran los militares que, en nombre de conceptos como la Patria y Dios salieron a morir y a matar; como los jóvenes de la vereda de enfrente, aunque con otros sueños, animados por otras pasiones. Y los peronistas, ¿no estaban también impulsados por nobles ideales como la comunidad organizada, el pacto entre el capital y el trabajo, la justicia social y la felicidad del pueblo?

Todos eran idealistas pero eso no puede disimular ni justificar la tragedia a la que tantos de ellos contribuyeron de una manera tan activa. Tzvetan Todorov lo explicó bien en un artículo en el diario español *El País*: “No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos. Las causas nobles no disculpan los actos innobles”.

Salgamos un poco de nuestras pendencias para comprender que la confianza ciega, militante, acrítica en los ideales, resulta muy peligrosa: entre 1975 y 1979, los revolucionarios camboyanos liderados por Pol Pot forzaron a los habitantes de las ciudades a trasladarse al campo para que allí vivieran, trabajaran y se purificaran de los vicios individualistas y capitalistas que habían adquirido durante tanto tiempo. El sueño era un socialismo agrario inspirado en la prédica de Mao Tse-tung, pero pronto derivó en un millón y medio de muertos, el 25 por ciento de la población de Camboya; uno de cada tres hombres si hacemos el cálculo de las víctimas según el género.

Los 70 fueron una época de ideales grandiosos —vinculados nada menos que con la Liberación, la Revolución, Dios, la Patria— pero que, en sintonía con esa efervescencia, desembocaron en que “tanto los hombres de izquierda como de derecha eran capaces de acciones apocalípticas, que implicaban a veces el asesinato masivo”, como indicó el prestigioso periodista Jon Lee Anderson.

Quienes se refugian en los ideales para justificar los errores políticos y los crímenes apelan a una “ética de la convicción”, en la que, como indicó el sociólogo alemán Max Weber, quienes deciden qué hacer y cómo hacerlo se fijan solo en sus principios y objetivos pero no se sienten responsables de las consecuencias que impulsan sus acciones. Y eso ocurre a derecha y a izquierda, no solo con los protagonistas de la violencia del pasado reciente sino también con quienes hoy simpatizan y militan esas causas.

Para evitar eso, para fijar en la memoria todas las acciones que realmente derivaron de esos ideales, incluyo en *Los 70, la década que siempre vuelve* tres anexos: el primero, sobre cuántas fueron, de verdad, las víctimas de la dictadura según los registros confeccionados por el Estado durante el kirchnerismo; el segundo, acerca de las listas de desaparecidos que elaboró la dictadura de Jorge Rafael Videla, y el tercero, referido a otro tema tabú: el número de víctimas de los grupos guerrilleros, un registro que ningún gobierno de la democracia ha querido realizar, pero que incluyo porque ningún sector debería arrogarse el monopolio del sufrimiento.

En la práctica ese monopolio sí existe, y cómo. En mi opinión, es el resultado de la superioridad moral otorgada a los revolucionarios; a las guerrillas —tanto a las víctimas como a los sobrevivientes— pero también a sus familiares, y a sus simpatizantes y patrocinadores del presente. En primer lugar, por el salvajismo del terrorismo de Estado: durante siete años, la dictadura pisoteó los derechos humanos más elementales, cometió delitos

cuyo solo recuerdo aún nos estremece. Pero esa empatía natural con las víctimas fue mucho más allá y derivó en la defensa —o, al menos, la justificación— de la lucha armada en los 70 por parte de los organismos de derechos humanos y de vastos sectores de la coalición ahora gobernante, no solo del kirchnerismo.

Según esta visión, muy extendida también en el periodismo, los guerrilleros tal vez se hayan equivocado en los medios, en el uso de las armas —“era otro contexto histórico”, dicen— pero la lucha en sí era buena, los ideales eran nobles. En todo caso, deben ser imitados aunque con otros instrumentos, adaptados a estos nuevos tiempos.

Con relación a las víctimas de las guerrillas, uno podría esperar que quienes más sufrieron el terrorismo de Estado fueran los más sensibles frente al dolor de los otros. Pero no suele ser así: la lucha política —la grieta— puede más que la empatía.

Por ejemplo, al momento de escribir este libro, el secretario de Derechos Humanos era Horacio Pietragalla Corti, hijo de víctimas del terrorismo de Estado y él mismo nieta recuperado gracias a la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su papá fue secuestrado, asesinado y desaparecido en 1975 y su mamá murió en un tiroteo con una patrulla militar al año siguiente; ambos eran montoneros.

Horacio Pietragalla padre era “oficial primero” del Ejército Montonero, donde dirigía la Columna 26, que actuaba en el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa. Vivía en las afueras de Resistencia con su esposa, Liliana Corti, y alquilaban un local en la capital chaqueña, donde funcionaba un negocio de venta y distribución de máquinas de escribir y artículos de oficina. Pero era una pantalla, la base desde donde se organizó el copamiento del cuartel de Formosa el 5 de octubre de 1975. Luego del ataque, Pietragalla escapó a Córdoba, donde fue capturado y se convirtió, junto con Eduardo Jensen, en

la primera víctima del Comando Libertadores de América, un grupo paraestatal local muy activo hasta el golpe de Estado. Su cuerpo recién fue identificado en 2003.

¿Acompañará Pietragalla Corti el dolor y los pedidos de reivindicación de los parientes de las trece víctimas formoseñas —diez soldados, un sargento, un subteniente y un policía— del ataque en el que participaron sus padres en forma tan activa? Su concepción de los derechos humanos no parece incluirlos.

Los 70 son años que se resisten a dejarnos; justifica esa tozudez el hecho de que cumplen varias funciones. Una de ellas es que nos ofrecen respuesta a la pregunta que suele atormentarnos cada tanto, cuando nos descubrimos en el medio de una de esas crisis que se nos han vuelto tan habituales: ¿Por qué estamos así? Es el famoso dilema que se plantea Zavalita, el protagonista de *Conversación en La Catedral* —de Mario Vargas Llosa— ya en la primera página de la novela: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.

Investigando para *Doce noches*, encontré que Néstor Kirchner pensaba que la Argentina se jodió en la dictadura. Que la gran crisis de fines de 2001, que lo condujo desde Santa Cruz a la cima del poder, había sido incubada en aquellos años en que los militares y sus cómplices civiles impulsaron un modelo neoliberal que en esencia era el mismo que había sobrevivido hasta los estertores de aquel diciembre decisivo; el modelo colonial de siempre que ya no daba más, gastado por su lógica de codicia y explotación. De allí, la permanente invocación a los 70 y la promesa de que a partir de 2003 —en su gobierno— la victoria sería de los buenos.

Nuestros periódicos desencantos aseguran la vigencia de aquella década, que fue vertiginosa y larga. *Los 70, la década que siempre vuelve* comienza en 1970, con la fundación de Montoneros y el Ejército Revolucionario del

Pueblo (ERP), y dura hasta 1983, cuando los militares son corridos a los cuarteles. Recorre el camino que va desde el masivo vuelco de tantos jóvenes a la lucha armada y la irrupción victoriosa de los grupos guerrilleros hasta su derrota, también sonora, primero en el plano político y luego en las mazmorras de la dictadura. Pasa por los momentos de gloria de los revolucionarios, entre ellos el triunfo electoral del 11 de marzo de 1973; la disputa mortal entre el general Juan Domingo Perón y su “juventud maravillosa” de Montoneros, y el festival de violencia de izquierda y de derecha en 1975, un año crucial. También abarca la planificación del golpe de Estado más anunciado de la historia, que fue impulsado incluso por Montoneros y el ERP, y la respuesta que los contrarrevolucionarios venían preparando desde hacía tiempo: el plan sistemático para reprimir de manera ilegal a las guerrillas y disciplinar a toda la sociedad.

Esa larga noche terminó con el retorno a la democracia, que al principio parecía tan debilucha como siempre pero que pronto se reveló muy fortalecida por el consenso adquirido luego de tanta violencia política, de la derecha militar pero también de la izquierda guerrillera, como lo indican el triunfo del radical Raúl Alfonsín y su rápida decisión de enjuiciar a los comandantes de las primeras tres juntas militares y a los jefes de Montoneros y del ERP.

Y eso no tiene nada que ver con la teoría de los dos demonios sino con el simple hecho de constatar lo que efectivamente sucedió, lo cual no significa equiparar el terrorismo de Estado con la violencia de las guerrillas, a la que muchos también consideran terrorismo aunque por lo general pasan por alto un hecho fundamental, que los diferencia: los militares aplicaron el terror desde el aparato estatal, el garante teórico de la legalidad, y con una maldad que, por más que se la explique del derecho y del revés, resulta —en el fondo— muy difícil de comprender.

Ni la teoría de los dos demonios; ni el relato de ángeles por un lado y demonios por el otro; ni la idea de que aquí no ha pasado nada sino que solo hubo una guerra entre bandos, donde los militares desde el Estado mataron y de cualquier manera porque lo único que importaba era vencer a los otros; no me sirve ninguna de las tesis creadas para favorecer de antemano a los guerrilleros, los militares, los políticos, la sociedad o a quien sea. En lugar de teorías y relatos amañados, los hechos; todos los hechos y lo más preciso que logre describirlos y explicarlos.

Junto a aquella revalorización de la democracia apareció un novedoso apego social a los derechos humanos, la vida en primer lugar. Una reacción a la Disposición Final —detención o secuestro; cautiverio y torturas; asesinato, y desaparición del cuerpo—, el método cruel de la dictadura para eliminar a las “7000 u 8000 personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”, según admitió Videla en la serie de entrevistas que le hice unos años atrás.

Algunos de ustedes seguramente recordarán que los números de Videla volvieron a encender la polémica inacabable con los organismos de derechos humanos y los sectores más duros del kirchnerismo sobre los —según ellos— 30.000 desaparecidos que hubo entre 1976 y 1983, una muestra —para mí— de la tensión entre la historia, por un lado, y la memoria, por el otro, en este caso para reconstruir qué pasó, de verdad, en los 70.

Como en mis libros anteriores, sigo del lado de la historia en esa puja desigual con la memoria. Creo que es lo que corresponde para un periodista que se ocupa de la historia reciente: analizar y describir todos los hechos enfatizando en la intersubjetividad, “en la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad”, como explicó Todorov en la columna que cité como epígrafe de esta introducción.

“La cuestión que me preocupa —agregó Todorov— es la comprensión histórica. Pues una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso, puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política”.

Todorov, fallecido en 2017, acababa de volver de Buenos Aires cuando escribió aquel artículo; había venido invitado por el gobierno de Cristina Kirchner para visitar los espacios de la memoria pública sobre el horror de la dictadura, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada y el Parque de la Memoria, en la Costanera, ya que era un experto mundial en el tema.

Al contrario de lo que esperaba el oficialismo, Todorov no quedó contento con lo que vio, y detectó lúcidamente uno de nuestros problemas de hoy, de los 70, de siempre: la grieta, y cómo los monumentos más emblemáticos no ayudaban a cerrarla sino a perpetuarla, peligrosamente. “La Historia —sostuvo— nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria: la división de la humanidad en dos compartimentos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Si no conseguimos acceder a la Historia, ¿cómo podría verse coronado por el éxito el llamamiento al ‘¡Nunca más!’? Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la violencia, revestida de un vocabulario nuevo, adaptada a unas circunstancias inéditas”.

Son palabras con las que no podría estar más de acuerdo, en línea con mi posición en contra de un paradigma que ya no tiene la fortaleza de 2008, cuando publiqué *Operación Traviata*, pero que sigue vigente entre tantos historiadores y periodistas, en muchos casos por el corralito de confort que siempre proporciona el abordaje políticamente correcto de las cuestiones

dolorosas y de una cierta complejidad. Según ese paradigma, la historia argentina es una repetición constante de un partido que no termina nunca entre buenos y malos, en una cancha marcada por un puñado de contradicciones: el Estado versus el mercado; los pobres versus los ricos; la solidaridad versus el egoísmo; el progresismo nacional y popular versus la derecha conservadora y neoliberal; y así siguiendo.

¡Qué lindo, qué tranquilizador tener una respuesta tan simple, inmediata y funcional sobre todo lo que pasó en este bendito país, y también lo que seguirá ocurriendo porque la historia se repite, es siempre la misma! Pero ¡qué aburridos se han vuelto los libros, las películas y los relatos y discursos que genera este paradigma! Aparte de cuán inexactos y peligrosos son.

En este libro utilizo el material de mis títulos anteriores e incorporo reportajes y documentos nuevos con el objetivo de explicar de una manera sencilla qué pasó en los 70. Creo que faltaba un libro que abarcara toda esa década, que trascendiera los relatos fragmentados. Y que lo hiciera de una manera amena aunque introduciendo algunos conceptos que permitan comprender las razones de tantas pasiones, de tanta violencia. Para eso, recupero las dudas e inquietudes que encontré estos últimos años entre los asistentes a mis charlas, en especial a la clase que suelo dar en el Instituto de Cultura del Centro Universitario de Estudio (CUDES), en un curso organizado por Roberto Bosca, abogado, profesor y escritor experto en religión e historia.

El desafío es que *Los 70, la década que siempre vuelve* pueda interesar y servir a todos, en especial a quienes no saben o no entienden qué pasó en aquellos años que siguen tan vivos.

Capítulo 1

MATAR Y MORIR

*La vida no vale nada si no es para perecer porque otros
puedan tener lo que uno disfruta y ama.*

Pablo Milanés, cantautor, en “La vida no vale nada”, 1975.

*Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el
imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos
contra el gran enemigo del género humano: los Estados
Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos
sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése,
nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído
receptivo, y otra mano se tienda para empuñar nuestras
armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos
luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de
guerra y de victoria.*

Ernesto Che Guevara, 16 de abril de 1967.

*La liberación, como se comprueba históricamente, nace de
la sangre.*

Leonardo Boff, teólogo brasileño.

La década del 70 fue una orgía de sueños, ideales, sangre y muerte; una escalada de pasiones sin freno; de amor y entrega a la causa de los pobres y a la Revolución pero también de odio intransigente a los “enemigos del pueblo”, una categoría bastante amplia que incluía no solo a militares y policías sino también a la “oligarquía”, los funcionarios “corruptos”, los políticos “vendepatria”, los sindicalistas “burócratas” y la clase media “colonizada” y “entreguista”.

Entre los guerrilleros, uno de los que más me impactó fue Roberto Mayol, un santafesino de 21 años que cumplía con el servicio militar —era obligatorio y duraba un año— cuando Montoneros atacó el cuartel al que había sido trasladado, en los suburbios de la ciudad de Formosa, el 5 de octubre de 1975.

Es que Mayol tenía asegurada una vida buena y tranquila en la capital de la provincia de Santa Fe. Pero no: como tantos jóvenes de su época, primero se hizo peronista y, casi inmediatamente, abrazó la lucha armada, convencido de que la violencia sería la partera de una sociedad sin clases, de hombres y mujeres iguales, liberados de la oligarquía criolla y el imperialismo yanqui.

¿Qué pasó? ¿Qué se les cruzó por la cabeza a Mayol y a miles de chicos y chicas como él?

La última foto de Mayol fue publicada en mi libro *Operación Primicia* y lo muestra tendido en el pasto ralo del Regimiento de Infantería de Monte Número 29, los ojos y la boca bien abiertos, una cicatriz de sangre que le partía la cara, y el número 8 pintado de negro en su torso desnudo; estaba muerto luego de haberle abierto la puerta del cuartel a sus compañeros montoneros.

Lo habían acribillado sus compañeros soldados, jóvenes como él, que estaban de guardia aquel domingo a hora de la siesta. El combate duró treinta minutos y hubo veinticuatro muertos: doce guerrilleros y doce defensores del cuartel; diez soldados, un subteniente de 21 años y un sargento primero, de 31, padre de dos hijos.

Un traidor, “el soldado entregador” para los soldados y militares que impidieron la toma del regimiento; un héroe, un mártir para los guerrilleros y sus simpatizantes. Y una víctima del terrorismo de Estado en muchos otros ámbitos, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde estudiaba Derecho.

Allí, Mayol figura como uno de los veinticuatro “alumnos, profesores y egresados muertos, desaparecidos y perseguidos durante la última dictadura militar”, a pesar de que murió en combate y atacando un cuartel casi seis meses antes del golpe, durante el gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón, la viuda del General.

En 2006 fue recordado durante cuatro jornadas de homenaje, que comenzaron el lunes 28 de agosto con una conferencia a cargo de Ricardo Lorenzetti, santafesino, en aquel momento miembro y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia, titulada: “Los Derechos Humanos en la doctrina de la Corte Suprema”, y culminaron el jueves 31 con un acto “en homenaje a quienes fueron muertos, desaparecidos y perseguidos por el terrorismo de Estado”. Hablaron familiares, organizadores y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y se colocó una placa alusiva.

El recordatorio incluye una foto de Mayol en un acto y un párrafo escrito por el abogado Jorge Pedraza, que dice: “El compañero más querido y paradójicamente más olvidado. Su vida fue una completa entrega hacia los demás, especialmente los humildes. Se formó muy joven con los jesuitas, su

lectura de cabecera fue la revista *Cristianismo y Revolución* de García Elorrio y Casiana Ahumada. Era como un cura laico de la militancia, una personalidad atrapante. Fue orador del Ateneo de Derecho y muy pronto la universidad le quedó chica. Antes había fundado en Santa Fe el Movimiento de Acción Secundaria, que confluiría luego en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios). Su muerte —en un momento de extrema violencia política en el país— nos conmovió a todos sus compañeros y amigos. Fue un antes y un después”.

Pedraza, que estuvo siete años preso, fue compañero de estudios de Mayol en el histórico Colegio de la Inmaculada Concepción, “La Inmaculada”, donde se educa la elite santafesina, que está ubicado en el centro de Santa Fe, frente a la plaza 25 de Mayo.

“De Roberto Mayol —me dijo— tengo el mejor de los recuerdos. Fuimos compañeros durante toda la escuela secundaria. Sufrí mucho su desaparición. Cuando me enteré, no le encontré razón a esa decisión de tomar el cuartel para recuperar armas. Me pareció una locura, pero el país ya estaba inmerso en una espiral de violencia imparable. Yo también tenía un nivel de militancia, pero el de él era evidentemente más elevado y hacía un tiempo que le había perdido el rastro. El Colegio de la Inmaculada es de los jesuitas. Él había hecho la primaria también en un colegio religioso. Era muy inteligente, muy sensible. La última vez que lo vi fue en 1973, en el Movimiento Ateneísta, que fue el precursor de la Juventud Universitaria Peronista; él fue uno de los oradores. Lo recuerdo como un muy buen orador, un joven de muy buena imagen; un cura laico; un admirador de Camilo Torres, venía del progresismo católico”.

Mayol refleja la trayectoria típica de tantos jóvenes de buena posición social que, a partir de un compromiso católico, se fueron convenciendo de que la lucha armada era la única salida para terminar con “la violencia de

arriba” y liberar a “los explotados”, a los sectores populares que, por su lado, seguían teniendo una fe casi religiosa en Perón.

Cuando Mayol llegó al cuartel en Formosa, en mayo de 1975, se destacó rápidamente, recordó el entonces subteniente David Cabrera Rojo: “Mayol resaltaba enseguida porque era un rubio al lado de los otros soldados, que eran todos morochos, de cabellos duros. Muchos eran pobres: no estaban acostumbrados a más de una comida al día, y en el regimiento había aulas para enseñarles a leer y escribir”.

Mayol fue destinado a la Compañía de Tiradores “B” y se hizo notar como un soldado excelente: cargaba y descargaba las armas con presteza, asimilaba las instrucciones con docilidad e inteligencia y se mostraba muy interesado en la vida militar; tanto fue así que pronto fue considerado el mejor soldado de su unidad y lo ascendieron a Dragoneante.

Es que a los 21 años Mayol ya era un “cuadro” relevante de Montoneros en Santa Fe, en cuya estructura militar había alcanzado el grado de “oficial segundo” y donde había dirigido ataques contra la corresponsalía de la agencia Télam y el Club del Orden, fundado en 1853 por la elite provincial partidaria de la nueva Constitución y del vencedor de la batalla de Caseros, el general entrerriano Justo José de Urquiza.

A partir de la segunda mitad de los sesenta, los hijos de muchos padres de ideas conservadoras, liberales o radicales —en varios casos antiperonistas o “gorilas”— se hicieron peronistas, y con esa fe que suelen tener los conversos se volcaron a la lucha armada contra los sucesivos gobiernos militares. Y contra sus propios padres.

Eso ocurrió en todo el país y Mayol no fue la excepción: su papá era un prestigioso abogado que luego del golpe contra el presidente Juan Domingo Perón, en 1955, había sido titular de la Corte Suprema de Justicia de Santa

Fe; obviamente, integraba el aristocrático Club del Orden cuyo frente fue destruido por el bombazo de su hijo y sus jóvenes compañeros.

Mayol era el mejor informante que Montoneros podía tener en un cuartel y por eso la cúpula nacional, encabezada por Mario Eduardo Firmenich, decidió atacar un regimiento tan alejado y en un lugar donde no tenía mucha presencia, con todos los riesgos que eso implicaba porque había que trasladar a decenas de guerrilleros.

Tanto influyó la presencia de Mayol en el cuartel que el 5 de octubre de 1975 fue fijado como Día D porque se aproximaba la fecha en que el soldado montonero sería dado de baja. “Esto transformaba la operación en una fruta madura, que si no la arrancábamos hoy, mañana podía estar caída”, se lee en la evaluación secreta del ataque realizada por la Conducción Nacional de Montoneros.

Fue la operación más espectacular de la guerrilla en toda su historia porque incluyó el secuestro en pleno vuelo del avión más moderno de Aerolíneas Argentinas y su desvío a Formosa; la toma del Aeropuerto Internacional El Pucú; el despliegue de varios pelotones desde provincias vecinas para atacar al cuartel y la huida en una avioneta sanitaria y en el Boeing 737-200, que aterrizó en una pista clandestina en el interior de Santa Fe, cerca de Rafaela.

Todo eso ocurrió a 1200 kilómetros de Buenos Aires e involucró a más de un centenar de guerrilleros en forma directa.

Montoneros bautizó el ataque como Operación Primicia porque era el primero contra una instalación del Ejército y porque marcaba el debut del llamado Ejército Montonero, con sus uniformes azules, los grados militares y hasta un Código de Justicia Revolucionaria. La cúpula guerrillera tenía

buena información: sabía hasta la fecha del golpe de Estado del que tanto se hablaba, y pensaba enfrentarlo con su propio ejército.

Aunque la revista *Evita Montonera* de octubre de 1975 calificó el intento de copamiento en su tapa como una “victoria del Ejército Montonero”, sus columnas fueron rechazadas por los soldados y no pudieron humillar al Ejército copando el cuartel más alejado del país, como pretendían.

Los montoneros estaban convencidos de que los soldados de guardia se rendirían sin disparar una sola bala; al final, eran los más pobres entre los pobres; los que pasaban los domingos en el cuartel porque allí comían mejor que en sus casas o porque no tenían dinero para visitar a sus familias, que vivían en el interior de la provincia.

Los guerrilleros, en cambio, habían dejado la comodidad de sus vidas de clase media y clase media alta —incluso, de clase alta— para matar y morir a favor de ellos, los pobres, los desposeídos, los explotados por los terratenientes feudales y sus esbirros militares. ¿Cómo no se iban a rendir apenas vieran el ingreso de sus liberadores?

No resultó así. Según la evaluación de *Evita Montonera*, “esta resistencia suicida de los soldados tiene que ver en parte con el bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona y básicamente al terror mítico, inculcado por los superiores, a los ‘extremistas, drogadictos enfurecidos que asesinan sin compasión’”.

Aparece aquí el clásico argumento de la “conciencia falsa de la realidad”, utilizado por Karl Marx: los pobres adoptan la ideología de la clase que los domina. Un argumento muy discutido. En todo caso, queda en evidencia la dificultad de los guerrilleros para conocer e interpretar a los sectores que buscaban beneficiar.

Pero Mayol y los montoneros que participaron del ataque no estaban solos en esa manera de percibir la realidad. Había todo un clima de época amasado en los 60, que impugnaba al capitalismo y a Estados Unidos, suponía que el mundo avanzaba al socialismo y enfatizaba el impacto global de las guerras de liberación nacional en Asia y África, las enseñanzas de Mao Tse-tung y Ho Chi Minh y la onda expansiva de la Revolución Cubana y su icónico guerrillero, el argentino Ernesto *Che* Guevara.

Eso en el plano externo; dentro del país, ese clima se potenciaba con el descontento popular por el exilio del general Perón, fuera del país desde 1955. A partir de aquel año, se sucedieron gobiernos militares y civiles que nunca pudieron consolidarse, en buena medida porque carecían de legitimidad de origen debido a la proscripción de Perón y del peronismo.

Para colmo, esos gobiernos tampoco se mostraban exitosos en los planos económico y social, por lo menos para satisfacer las expectativas de los sectores populares, que seguían añorando los años felices del peronismo.

Claro que hasta mediados de los 60 ese descontento político se limitaba a los sectores populares y a lo sumo trascendía esporádicamente en actos de sabotaje conocidos en la liturgia peronista como La Resistencia. No pasaba de eso, no contagiaba a las clases medias.

Hubo sí algunas operaciones guerrilleras, tanto en el campo, en 1959, en Tucumán, como en la ciudad; la más importante tuvo lugar en 1963: el asalto al Policlínico Bancario, en la Capital Federal. Pero eran acciones aisladas, sin respaldo político ni social.

Todo se aceleró a partir del golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Illia y depositó en la Casa Rosada al general Juan Carlos Onganía, el 28 de junio de 1966.

Fue a partir de aquel momento cuando miles de jóvenes de la vasta clase media argentina se politizaron y se radicalizaron; irrumpieron diversos grupos guerrilleros hasta que en 1970 fueron fundados los dos más importantes: Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Había diferencias entre ambos: si los montoneros brotaban del catolicismo y se ubicaban dentro del heterogéneo movimiento peronista, los “erpianos” provenían del marxismo o del radicalismo, como una suerte de vástagos desencantados de la Unión Cívica Radical; “hijos descarriados”, los llamó el ex presidente Raúl Alfonsín.

Por ejemplo, el fundador y líder del PRT y del ERP era el contador santiagueño Mario Roberto Santucho; su padre, Francisco, había sido un caudillo radical en Santiago del Estero. “Roby” no se referenciaba en la Iglesia Católica ni en el peronismo sino en el Che Guevara.

Cuando Santucho murió, en 1976, en un enfrentamiento con una patrulla militar, fue reemplazado por Luis Mattini, cuyo verdadero nombre es Juan Arnol Kremer Balugano.

Mattini me dijo que Santucho era “el más cabal heredero del Che”, y que ellos siempre fueron más terminantes en sus opciones que los montoneros, “con una ética guevarista del revolucionario. También, claro, éramos más sectarios. No sentíamos ninguna reverencia por Perón ni por el peronismo; había, además, mucho gorilismo en el ERP; no era mi caso, pero muchos camaradas venían del antiperonismo; éramos más afines, en general, a la Unión Cívica Radical, y muchos venían de hogares radicales. Además del caso de Santucho, Enrique Gorriarán Merlo había sido radical en San Nicolás, lo mismo que Benito Urteaga. En las elecciones de 1973, Urteaga estaba convencido de que el radicalismo ganaría, Mauro Gómez opinaba lo

mismo, y Santucho, con menos seguridad, también se inclinaba a favor de los radicales”.

En cuanto al peronismo, Santucho seguía al pie de la letra a su admirado Che Guevara. “Trabaja con los grupos provenientes de la izquierda, con los escindidos recientemente del Partido Comunista, no hagas ningún acuerdo con grupos peronistas, aunque tengas contactos con ellos; por el momento, no podemos absorberlos. Es demasiado riesgoso, están demasiado infiltrados”, le recomendó el Che a Ciro Bustos en Bolivia en 1967, cuando lo envió a la Argentina a reclutar gente para nutrir su foco revolucionario, una aventura que lo llevaría rápidamente a la muerte.

En su libro *El Che quiere verte*, Bustos agrega: “El Che veía un peligro latente en la heterogeneidad del peronismo, que volvía inseguras todas las vinculaciones funcionales, además de los riesgos derivados de su nombre mezclado en ello”.

De todos modos, en 1970 montoneros y erpianos compartían la lucha común contra la dictadura militar y sus soportes civiles, y todo un contexto, en el que descollaba la figura desafiante del Che Guevara, que para la guerrilla peronista, más allá de sus críticas puntuales al peronismo, era una suerte de Cristo laico.

Si hay un lugar donde estos grupos guerrilleros aparecen bien caracterizados es en Córdoba; lo mismo sucede con los sectores contrarrevolucionarios ya que la gran ciudad del interior fue, casi al mismo tiempo, la capital de la Revolución y el laboratorio de la última dictadura.

Por esos motivos, porque fue la imagen más nítida y completa de la violencia política de los 70, escribí *¡Viva la sangre!*, que está ambientado en Córdoba.

Es que allí vivía y trabajaba el sujeto que debía hacer la revolución socialista: la clase obrera más moderna y dinámica del país, concentrada en la pujante industria automotriz. “¡Vamos a hacer de Córdoba la capital de la Patria Socialista!”, pregonaba el sindicalista Agustín Tosco, referente de los jóvenes revolucionarios.

Por lo pronto, los trabajadores organizados por tres grandes sindicatos que se manejaban con autonomía de la CGT nacional —mecánicos, colectiveros y Luz y Fuerza— habían protagonizado el Cordobazo, con la valiosa ayuda del estudiantado, que conmovió al país e hirió de muerte a la dictadura del general Onganía.

Fue una insurrección popular fenomenal, que superó a la policía, el 29 de mayo de 1969, para colmo Día del Ejército. Durante treinta y seis horas, hasta que los militares ocuparon las calles, la ciudad quedó en manos de trabajadores y estudiantes.

El Cordobazo resultó crucial para la fundación de Montoneros y del ERP ya que demostró que, en un país con un cierto desarrollo económico y social como la Argentina, el foco revolucionario que incendiaría al capitalismo provendría de la ciudad y no del campo, como había ocurrido en Cuba.

Tanto fue así que el debut de Montoneros ocurrió justo al año siguiente, cuando secuestró al general Pedro Eugenio Aramburu, ex jefe del Ejército y ex presidente del país luego del derrocamiento de Perón.

Aramburu fue muerto tres días después, el 1° de junio de 1970, en un operativo que volvió muy populares a Montoneros entre las bases peronistas y atrajo como un imán al resto de los grupos guerrilleros que se referenciaban en Perón o el peronismo.

Ahora, en estos tiempos, esa simpatía popular por un secuestro y el posterior fusilamiento luego de un “juicio revolucionario” resultaría

imposible: el hecho sería considerado como un asesinato liso y llano, agravado por la frialdad y el cálculo con que fue cometido; una gravísima violación a los derechos humanos de una persona indefensa, desarmada. Al menos, por la gran mayoría de los argentinos.

Tal vez sea difícil de comprender, pero en aquel momento ya había en el país un consenso social bastante extendido a favor de la violencia política. Para buena parte de la sociedad, una bomba, una emboscada o un secuestro pasaban a formar parte de la liturgia política. La muerte adquiría legitimidad; era aceptada, en general, como un recurso político, tal como sucede hoy con un acto, una solicitada, una propaganda o un discurso.

Es que no puede haber violencia política sin que un número importante de ciudadanos la acepte como un recurso más de la lucha por el poder.

Los grupos que se postulaban como la vanguardia armada de ese proletariado destinado a dirigir la historia mudaron sus cúpulas a esa ciudad, convencidos de que en nuestro país la batalla decisiva para la derrota del capitalismo se definiría en Córdoba.

La guerrilla peronista trasladó su cuartel general luego del retorno a la lucha armada, a la clandestinidad, el 6 de septiembre de 1974, dos meses después de la muerte del general Perón.

Según Firmenich, tomaron esa crucial decisión atentos al “golpismo militar recurrente en la historia argentina” y convencidos de que el gobierno de Isabel Perón no duraría noventa días: “De modo que, antes de esos tres meses, nosotros decidimos preservarnos pasando a la clandestinidad”.

Todo se hizo con tanto sigilo que ni la policía cordobesa ni el Tercer Cuerpo de Ejército pudieron descubrirlos. “Nunca supimos que la Conducción Nacional estaba en Córdoba; yo me enteré hace poco”, me dijo el comisario mayor retirado Carlos Yanicelli.

Por su lado, el buró político del PRT y el ERP permaneció en Córdoba desde fines de 1972, cuando Santucho regresó al país tras una fuga masiva de guerrilleros de la prisión de Rawson, hasta principios de 1974.

Mattini me contó que “Santucho volvió clandestino y reorganizó el buró político. Nos instalamos en Córdoba. Desde ahí, reorganizamos el PRT y el ERP, que eran lo mismo, hacia todo el país. Luego, nos vinimos para Buenos Aires dado que, si bien Dios estaba en todas partes, atendía en Buenos Aires. Habíamos crecido en todo el país: teníamos un fuerte desarrollo en Ford, en Pacheco; en Villa Constitución; en Zárate-Campana; en todo el cinturón industrial, y necesitábamos estar acá para atender todo eso”.

Pero Córdoba siguió siendo un bastión del PRT-ERP. El Partido tenía una fuerte presencia en las fábricas más modernas y el ERP apuntalaba esa política con acciones militares. Contaba con una unidad de combate emblemática: la compañía “Decididos de Córdoba”, cuyo jefe era Gorriarán Merlo. Su poder de fuego era notable: el 20 de agosto de 1975, al frente de más de doscientos militantes, Gorriarán Merlo encabezó un ataque simultáneo contra cuatro dependencias de la Policía de Córdoba: la Jefatura, ubicada en el edificio del Cabildo, frente a la plaza San Martín; el Departamento Informaciones (D-2); el Comando Radioeléctrico, y la Guardia de Infantería. Murieron cinco policías y un guerrillero, y hubo ocho policías y trece transeúntes heridos.

Córdoba es clave también porque revela las razones del rápido vuelco a la lucha armada de tantos jóvenes y muestra nítidamente las tres matrices que explican la formación de Montoneros: la Iglesia Católica, el

nacionalismo y el Ejército, en este caso a través del Liceo Militar General Paz.

Muchos de los cordobeses que fundaron Montoneros egresaron de ese Liceo y pertenecían a familias del patriciado local; todos eran católicos militantes: Montoneros nació en las sacristías y en los colegios, las universidades, las residencias estudiantiles, los campamentos juveniles y las misiones de ayuda social organizadas por la Iglesia.

Uno de aquellos jóvenes, Ignacio Vélez, contó que “participamos al comienzo Emilio Maza, el cura Alberto Fulgencio Rojas, Héctor Araujo y yo”. Todos se habían conocido en el Liceo Militar General Paz: Maza, Vélez y Araujo se hicieron amigos “cursando los últimos años del Liceo”, donde Rojas, que era el capellán, pertenecía a los sectores reformistas de la Iglesia.

Rojas y otros curas vivían en el Hogar Sacerdotal, en La Cañada y Rioja, un lugar muy transitado de la ciudad de Córdoba que se convirtió en la sede de reuniones con otros jóvenes que iban engrosando el núcleo original.

Un patio interno comunicaba al Hogar Sacerdotal con Cristo Obrero, una parroquia universitaria creada en 1965 por el nuevo arzobispo de Córdoba, Raúl Primatesta, que nombró allí a dos curas jóvenes y reformistas: José Oreste Gaido y Nelson Dellaferrera.

Gaido dejó los hábitos en 1969, se casó y tuvo cinco hijos, pero le quedó el apodo: “Cura”. Probablemente, el escritor Marcos Aguinis se haya inspirado en él para su novela *La cruz invertida*.

Varios sacerdotes ya estaban de acuerdo con el Concilio Vaticano II, que entre 1962 y 1965 renovó y adaptó la Iglesia al mundo contemporáneo, aunque luego desató una puja interna entre conservadores y progresistas sobre cómo había que interpretar y aplicar todos esos cambios.

Según Gaido, hubo “tres vertientes distintas que confluyeron en la lucha armada:

- El Hogar Sacerdotal, con jóvenes más mesiánicos, ortodoxos, que desembocan en Montoneros. Y con curas como Elvio Alberione, que sostenían que el compromiso político debía ser más bien institucional, en tanto cura. Yo estaba en contra de eso: creía que el compromiso debía ser individual, personal.
- En Cristo Obrero también se incubaba un compromiso político que desemboca en la vía armada, no democrática, para tomar el poder, pero no con una presencia eclesial, como la anterior, sino cristiana individual.
- Algo parecido se dio en la Universidad Católica Argentina, de los jesuitas, donde se vuelcan más al ERP; los más inteligentes para mí, los más lúcidos. A la UCA asistía lo más granado de la aristocracia cordobesa, y ahí surgió una vertiente que optó por la violencia, por la vía revolucionaria, con el argumento de que la violencia de arriba debía ser combatida con la violencia de abajo”.

En eso estaban cuando el general Onganía desplazó al presidente Illia con el aval de los sindicatos y el peronismo, y nombró como ministro del Interior al abogado y académico cordobés Enrique Martínez Paz, también feligrés de Cristo Obrero. Pero sobre todo se trataba de un conspicuo miembro del patriciado cordobés que devolvería el poder político local al núcleo conservador; por ejemplo, incidió en el nombramiento como gobernador de Miguel Ángel Ferrer Deheza, un abogado del City Bank y del Banco de Londres cuya prima, Elisa Martínez Deheza, era la esposa del ministro. A su vez, el flamante gobernador designó ministro de Gobierno a

su sobrino, Guillermo Becerra Ferrer, y ministro de Educación y Cultura a Mario Fernando Martínez Paz, hermano del poderoso ministro del Interior. El abogado constitucionalista Pedro Frías hijo, casado con una sobrina de Enrique Martínez Paz, se convirtió en el embajador argentino ante la Santa Sede.

Había tantos parientes entre los funcionarios de la llamada Revolución Argentina que el indomable humor cordobés creó una nueva fórmula para el juramento en esos cargos:

—¿Juráis por Dios, por la Patria y estos Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y los fines establecidos por el Estatuto de la Revolución?

—Sí, tío.

Los colaboradores cordobeses de Onganía, que provenían de los sectores más conservadores y nacionalistas del catolicismo, fueron decisivos en orientar rápidamente al nuevo gobierno hacia la universidad pública en el marco de una verdadera cruzada contra “la izquierda marxista y su influencia en la cultura”. Así, el decreto-ley 16.192 suprimió la autonomía universitaria, eliminó el gobierno tripartito (profesores, alumnos y graduados) y disolvió los centros de estudiantes. Los universitarios cordobeses, herederos directos de la histórica Reforma de 1918, no podían dejar de reaccionar contra esa afrenta: una serie de asambleas, actos y protestas fue reprimida ferozmente por el gobernador Ferrer Deheza.

Cristo Obrero fue uno de los centros de las protestas ya que los estudiantes católicos pidieron utilizar la iglesia a los curas Gaido y Dellaferrera para una huelga de hambre. “Le avisamos a Primatesta —sostuvo Gaido— y él nos dijo que sí; con algunas precauciones: nos preguntó si iban a tocar la guitarra, si habría chicos y chicas, pero nos dio la autorización. Claro que todo terminó en un despelote y en el asesinato de

Santiago Pampillón. Toda la masa universitaria iba a la parroquia, donde había cincuenta, sesenta huelguistas; llenaban los patios interiores de la parroquia y de allí comenzaban las manifestaciones; la policía reprimía y se producía el desbande. Ese mecanismo duró más de veinte días, hasta que Primatesta dijo que no sabía nada de la huelga de hambre, cerró la iglesia y a nosotros nos mandó a una parroquia periférica”.

Pampillón fue muerto por una bala policial el 7 de septiembre de 1966 frente a la Galería Cinerama, en medio de actos relámpago en distintas zonas del centro de la ciudad. Estudiaba Ingeniería y era delegado sindical en IKA. Cuando se enteraron, los universitarios tomaron un amplio sector del barrio Alberdi, que estaba poblado de pensiones estudiantiles, cortaron las calles y veredas y hostigaron a la policía durante toda la noche con piedras, palos y hasta bombas molotov. La CGT local dispuso un día de duelo en una muestra de la naciente alianza entre obreros y estudiantes.

La dictadura de Onganía y su correlato cordobés lograron exactamente lo contrario de lo que se habían propuesto. Por un lado, unificaron en las protestas a los universitarios de izquierda con los radicales y los católicos. Por otro, favorecieron la peronización de tantos estudiantes de los sectores medios y altos. En tercer lugar, convencieron a muchos jóvenes de que la lucha armada era la única salida para favorecer a las mayorías populares.

Cada sector juvenil lo vio desde el paradigma en el que se movía, pero todos se radicalizaron. Vélez contó que para su grupo “el golpe de Onganía significó que la oligarquía y el imperialismo habían jugado su última carta. La violencia desnuda había asumido el poder con expresiones groseramente provocadoras. Las fachadas pseudo democráticas como las de Frondizi, Guido o Illia no habían sido suficientes para domesticar al movimiento popular que encabezaba el peronismo. Éramos conscientes de que la oligarquía no se iba a suicidar; que había que derrotarla, que la violencia era

el único camino y que teníamos que comenzar ya, que no podíamos perder más tiempo”.

La formación católica los ayudó mucho en ese vuelco a la lucha armada: “Era —agregó Vélez— el mesianismo en todo su esplendor. La convicción profunda de que estábamos elegidos, de que nos tocaba cumplir la misión de Cristo: Estoy dispuesto a dejar todo, padre, madre, amigos, por tu nombre”. Tanto que él eligió “Mateo” como nombre de guerra, en homenaje a uno de los cuatro apóstoles y evangelistas.

En ese convencimiento influyó también la relación de los cordobeses con Juan García Elorrio, un ex seminarista porteño que en septiembre de 1966 fundó con su esposa, Casiana Ahumada, la revista *Cristianismo y Revolución*, todo un símbolo de la época porque se propuso conciliar la militancia cristiana con la lucha armada.

García Elorrio estaba muy vinculado a John William Cooke, un ex diputado peronista que, fascinado por la Revolución Cubana y el Che Guevara, se convirtió en uno de los principales intelectuales del llamado peronismo revolucionario. La redacción de *Cristianismo y Revolución* incluía a los periodistas Jorge Luis Bernetti, Emilio Jáuregui y Pepe Eliashev, con sus análisis de política internacional.

Pero la figura más inspiradora para García Elorrio y *Cristianismo y Revolución* fue Camilo Torres, un sociólogo y sacerdote colombiano que en 1965 colgó la sotana y se enroló en el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional; fue muerto por una patrulla al poco tiempo de haber llegado al monte en las sierras de Santander, el 15 de febrero de 1966.

Rápidamente, Camilo Torres ocupó el lugar más alto en el santoral de los católicos revolucionarios. Era el arquetipo del creyente que predicaba con el

ejemplo un principio sagrado, fundamental: No hay amor más grande que entregar la vida por los demás.

Tanto fue así que García Elorrio creó el Comando Camilo Torres, que desembocaría en la fundación de Montoneros. Al principio, los “camilos” se limitaron a la Capital Federal; lo integraban, entre otros, Fernando Abal Medina y su novia, Norma Arrostito; Carlos Ramus y Mario Firmenich, que vendían ejemplares de la revista en la universidad o en reuniones con jóvenes católicos.

Al poco tiempo, García Elorrio conoció a Maza, Vélez y al grupo de cordobeses que avanzaba por el mismo camino; nacieron los “camilos” mediterráneos, que se hicieron representantes de *Cristianismo y Revolución* en la ciudad de Córdoba, donde distribuían la revista kiosco por kiosco.

Es decir que García Elorrio fue el puente que permitió que se conocieran los jóvenes porteños y cordobeses que fundaron Montoneros.

Para todos ellos, Cuba era la prueba viviente de que la Revolución era posible aun en países donde no estaban dadas todas las condiciones económicas y sociales previstas por Marx. Y demostraba que la teoría del foco insurreccional del Che funcionaba: un grupo armado, ubicado en el lugar adecuado y dotado de la ideología correcta, podía acelerar la llegada al socialismo.

A mediados de 1967, García Elorrio, Maza, Abal Medina, Arrostito y Roberto Quieto integraron la delegación argentina que, presidida por Cooke, participó en La Habana de un encuentro de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, una criatura del gobierno cubano para expandir la revolución y apalancar las guerrillas en el continente.

Unos meses después, Maza, Abal Medina y Arrostito, entre otros, volvieron a Cuba, pero para entrenarse militarmente, coordinados por García Elorrio y Cooke. Ahí fue cuando Abal Medina y Maza rompieron

con García Elorrio: le reprochaban que no avanzara más rápidamente en la creación de un grupo guerrillero en la Argentina.

También los curas rebeldes se radicalizaron; fue en Córdoba donde nació el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, en los primeros días de marzo de 1968, con veintiún integrantes que representaban a trece diócesis.

El número creció vertiginosamente, influido además por la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 1968, cuando la Iglesia de la región asumió “la opción preferencial por los pobres”. Aquel año, en el segundo encuentro nacional, realizado también en Córdoba, en Colonia Caroya, los tercermundistas sumaban ya cerca de cien curas, de veintiséis diócesis, que llegaron a un par de “coincidencias básicas:

- Firme adhesión al proceso revolucionario (tanto en el Tercer Mundo como en Argentina) de cambio radical y urgente de sus estructuras.
- Formal rechazo del sistema capitalista vigente y de todo tipo de imperialismo económico, político y cultural para marchar en la búsqueda de un socialismo latinoamericano que promueva el advenimiento del Hombre Nuevo”.

Luego irían perfeccionando estos acuerdos. Por ejemplo, en 1972 afirmaron que, en el plano político, “se impone suplantar la mentira de la ‘democracia liberal’ por un proyecto de democracia verídica, que haga efectiva la participación de todos, tanto en el acceso como en el ejercicio y el control permanente del poder”.

En aquel momento, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez ya había publicado un libro destinado a ejercer una fuerte influencia entre los

Sacerdotes del Tercer Mundo y en el clero progresista de la región: *Hacia una Teología de la Liberación*.

Esta teología invitaba a los buenos cristianos a un compromiso integral con los oprimidos contra los opresores; una lucha difícil, dolorosa, regada de sangre y de muerte, como explicaba el teólogo brasileño Leonardo Boff: “La liberación, como se comprueba históricamente, nace de la sangre. Toda redención, como la de Cristo, se asienta en una alianza de sangre y de muerte”.

Esa tarea desembocaría inevitablemente en la aparición de un “hombre nuevo”, como el Che iluminaba desde otro ángulo. En su último texto antes de caer fusilado el 9 de octubre de 1967 en Bolivia, titulado *Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental*, también él sostuvo que el compromiso del buen revolucionario era integral: “No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte; acompañarlo a la muerte o a la victoria”.

El mesianismo católico, por un lado, y la utopía guevarista, por el otro, convirtieron la vida del buen cristiano y del buen revolucionario en algo relativo. La vida del otro también dejaba de tener un valor absoluto; pasaba a formar parte de un cálculo político y podía ser sacrificada si así lo exigían los ideales superiores de la liberación y la revolución.

Solo así, alimentados por ese combustible espiritual e ideológico, tantos jóvenes pudieron salir a matar y a morir.

Capítulo 2

EL PÉNDULO DEL GENERAL

—General, yo soy Mario Firmenich, oficial superior de Montoneros.

—Yo soy Roberto Perdía, oficial superior de Montoneros.

—Y yo, Roberto Quieto, también oficial superior de Montoneros.

—Bueno, encantado, yo soy Juan Domingo Perón, general del Ejército Argentino.

Primer encuentro entre Juan Perón y los jefes montoneros,
Roma, abril de 1973.

*Perón va a retornar a Argentina y va a volver al gobierno,
con Isabel como vicepresidenta; Perón se va a morir e
Isabel lo va a suceder, pero ella no entiende mucho de esto.*

*Yo, en cambio, voy a ser como el guitarrista malo de
Gardel: con la fuerza del título de “secretario privado de
Perón”, voy a ejercer el poder a través de Isabel.*

José López Rega a los jefes montoneros, Madrid, abril de 1973.

*El poder político brota de la boca de un fusil. Si
abandonáramos las armas, retrocederíamos en las
posiciones políticas.*

Mario Firmenich, 8 de septiembre de 1973.

En apenas seis meses de aquella década de vértigo, los montoneros tomaron el cielo por asalto y colocaron en la Casa Rosada a Héctor J. Cámpora, un odontólogo de San Andrés de Giles que venía del peronismo clásico y había sido puesto a dedo por Juan Perón como candidato a presidente porque el viejo general seguía prohibido.

A través de la Juventud Peronista, una de sus criaturas de superficie — legales—, Montoneros protagonizó la campaña electoral del 11 de marzo de 1973, que marcó el fin de la proscripción del peronismo aunque no de Perón.

Los sindicatos —el ala derecha del Movimiento— quedaron relegados a un rol marginal. Eran los tiempos en que el péndulo de Perón favorecía a los otros, a sus enemigos internos.

Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973. Seguramente, se habrá pellizcado varias veces antes de asomarse al histórico balcón de la Casa Rosada: sus votos eran de Perón y su campaña había sido orquestada por aquellos jóvenes que en la Plaza de Mayo agitaban los enormes carteles de Montoneros y la Juventud Peronista.

La Plaza era de ellos: hasta tuvieron que hacerse cargo de la seguridad en reemplazo de la policía, que había provocado una treintena de heridos al reprimir con balas y gases los cantos hostiles contra la banda de música de la Escuela de Mecánica de la Armada. No era un día para andar de uniforme y el desfile militar fue suspendido para festejo de la multitud.

—¡Se van, se van, y nunca volverán!

Ya por la mañana, en su primer discurso como presidente, en el Congreso y frente a todos los senadores y diputados, Cámpora reivindicó el papel de

la Juventud Peronista durante la dictadura que era pasado.

—Y en los momentos decisivos, una juventud maravillosa supo responder a la violencia con la violencia y oponerse, con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante. ¡Cómo no ha de pertenecer también a esa juventud este triunfo si lo dio todo —familia, amigos, hacienda, hasta la vida— por el ideal de una Patria Justicialista! Por eso, la sangre que fue derramada, los agravios que se hicieron a la carne y al espíritu, el escarnio del que fueron objeto los justos, no serán negociados.

La Plaza reventaba de gente a media tarde, cuando en el Salón Blanco el flamante presidente terminaba de tomar el juramento de rigor a los miembros de su gabinete y se aprestaba a salir al balcón de Perón.

—¡Qué lindo, qué lindo que va a ser, El Tío en el gobierno, Perón en el poder!

Y Héctor *El Tío* Cámpora comenzó a hablar.

—Compañeros y compañeras: debo decirles que hoy el país inicia una nueva era, que tendrá la característica de que el pueblo será quien va a gobernar. El pueblo argentino, inspirándose en el líder de la nacionalidad, el general Juan Perón, me dio este mandato. Este mandato yo se lo transfiero al pueblo, tal cual lo hubiera hecho el general Perón. Haremos la unidad nacional, conseguiremos la reconstrucción del país y tendremos en pocos años la Argentina liberada que todos queremos.

La consigna preferida de los jóvenes ensordeció a todos.

—¡Perón, Evita, la patria socialista!

De inmediato, replicaron los sindicatos, aunque disminuidos en el despliegue escenográfico.

—¡Perón, Evita, la patria peronista!

Pero el primer grito retumbó más fuerte, más auténtico; a tono con el clima de la época. Las columnas de los grupos juveniles eran mucho más numerosas y alegres que las de sus rivales internos, la oscura “burocracia sindical”. Dos de los invitados especiales, los más queridos por la multitud, los presidentes de Chile y de Cuba, Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, sonreían felices al lado de Cámpora, quien volvió a evocar al líder ausente.

—Compañeros: yo sé, y por qué no lo he de decir desde este lugar histórico, que ustedes hubieran preferido ver hoy, en este balcón y con esta banda presidencial, al general Perón.

El líder estaba a miles de kilómetros de distancia, en su casa de la calle Navalmanzano del barrio Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid. No había podido participar de las elecciones por decisión del general Alejandro Lanusse y tuvo que designar a un vicario, que resultó ser Cámpora para disgusto de los sindicalistas, que tenían otro candidato: Antonio Cafiero.

Preparaba el astuto caudillo su retorno definitivo al país. Y también al poder. Pero eso no había sido previsto por Cámpora ni por sus nuevos aliados, los montoneros.

En realidad, fue un malentendido mutuo: Perón creía que podría desarmar fácilmente a los montoneros, mientras los jóvenes que festejaban en la Plaza pensaban que al General no le quedaría otra que reconocerlos como la vanguardia política y armada del pueblo peronista en su marcha imparable hacia la revolución socialista.

Todo terminaría en una tragedia, que primero enfrentó a los peronistas entre sí y luego ensangrentó a toda la sociedad. Pero, al inicio de la relación, sometidos a otras urgencias, tanto Perón como los montoneros disimularon las diferencias cruciales que los separaban.

Por eso, apenas los montoneros irrumpieron en el escenario con el secuestro y el fusilamiento del general Pedro Aramburu, Perón los incorporó con entusiasmo a su complejo ajedrez de una “lucha integral” contra la dictadura, junto al partido peronista, la “rama femenina” de su fuerza política y los sindicatos.

Serían sus “formaciones especiales”, un grupo armado que debía contribuir a un objetivo común: forzar su retorno al país y al poder. Y luego, una vez lograda esa meta, deberían desarmarse y dedicarse solamente a la política.

Roberto Perdía, que fue el número dos de Montoneros, me dijo que era “una contradicción seria: Perón reivindicaba a la guerrilla como un instrumento, mientras que nosotros la colocábamos como una base para la construcción del poder popular. Nosotros aceptábamos esa situación provisoriamente, pero, evidentemente, nos imaginábamos en un lugar distinto”.

Para Perón no era nada nuevo. Él se concebía al frente de un movimiento “multifacético”, con la misión de “acumular la mayor cantidad de gente proclive o pensante hacia los objetivos que se persiguen. Ahora, dentro de eso hay distintas posiciones”.

De acuerdo al momento, con ductilidad y paciencia, el General ejercía una conducción pendular: a veces favorecía a la derecha y otras veces, a la izquierda, que convivían siempre en tensión. “Yo estoy para llevarlos a todos, buenos y malos. Porque si quiero llevar solo a los buenos, me voy a quedar con muy poquitos. Y en política con muy poquitos no se puede hacer mucho”, concluía.

En aquel momento, el flamante y osado grupo guerrillero le servía para poner en caja a los sindicalistas: algunos eran demasiado obedientes a los militares y otros resultaban aún más peligrosos porque empezaban a tener

mucho dinero —el general Juan Carlos Onganía les había dado el manejo de las obras sociales— y querían convertir al peronismo en una suerte de partido laborista, que ya no precisaría de Perón ni de sus directivas. Tampoco, de su regreso al país.

Solo confiaba en un sindicalista: José Ignacio Rucci, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) desde el 6 de julio de 1970. “Es el primer dirigente gremial que me es leal, creo”, dijo luego de conocerlo. Rucci se definía como “un peronista de Perón”; era metalúrgico pero no tenía poder en su gremio, el más importante, que se había convertido en el bastión del “peronismo sin Perón”.

Los montoneros también le eran útiles para que los militares terminaran comprendiendo que él —al final, un hombre de orden como ellos— era el único que podía disciplinar a esos jóvenes que se habían alzado en armas en su nombre pero que eran muy peligrosos porque hablaban de “socialismo nacional” y de “tomar el poder a través de una guerra revolucionaria total, nacional y prolongada”. Si todavía tenían dudas, ahí estaban los ejemplos de Cuba, Argelia y otros países del Tercer Mundo.

Fue el militar más lúcido, el general Lanusse, quien decidió la vuelta a los cuarteles cuando la llamada Revolución Argentina agonizaba. Lanusse reemplazó a Onganía y a su fugaz sucesor, el general Roberto Levingston, y convocó a elecciones aunque con una cláusula destinada a impedir la candidatura de Perón.

Uno de los aciertos más notables de Montoneros fue integrarse al proceso electoral de Lanusse, a tono con la voluntad de Perón. No era que abandonaba definitivamente “la guerra de guerrillas urbana y rural”; se trataba de una tregua mientras seguían acumulando fuerzas y recursos para el choque decisivo con el “Ejército gorila”, antiperonista, al que seguían considerando el “sostén armado de la oligarquía aliada al imperialismo”.

Los montoneros se convirtieron así en la primera guerrilla del continente en participar de elecciones. El grito “Perón o Muerte” de los años de la resistencia a la dictadura dejó paso al “Luche y Vuelve”, que interpretaba con garra y frescura al histórico “Perón Vuelve”, que seguía siendo el máximo sueño de los sectores populares.

El cambio les permitió un crecimiento espectacular, algo que necesitaban ya que, como aparato militar, habían sufrido duros golpes y sumaban apenas unos veinte “cuadros” —jefes, en el colorido lenguaje de la época— en libertad; los otros estaban en la cárcel o habían sido muertos.

En pocos meses, la decisión de participar en las elecciones exigiendo el retorno de Perón convirtió a Montoneros en un imán irresistible para la juventud de los sectores medios y altos, que se habían radicalizado, como sucedía también en otros países, al tiempo que ampliaba su llegada a la masa peronista.

Las otras organizaciones armadas que se identificaban con el peronismo se sumaron al torbellino montonero. Primero fueron los Descamisados, de origen católico; casi en simultáneo se agregó un sector de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP); luego vendrían las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), un grupo bien estructurado, de origen marxista, muy influenciado por el Che Guevara, que, a partir de un cuestionario formulado por escrito por el poeta y periodista Francisco *Paco* Urondo a su líder, Carlos Olmedo, fue realizando un giro progresivo hacia el peronismo.

Todas estas organizaciones u “orgas” —como se las llamaba— se habían formado entre 1967 y 1970, aproximadamente. Algunos dirigentes se integraron a Montoneros por convicción y otros por oportunismo: entendían que los “montos” les garantizaban el sustento popular para la revolución socialista que pregonaban.

En esa escalada, Montoneros fue legitimado por frecuentes mensajes de Perón. Por ejemplo, en una carta del 23 de febrero de 1971, les dedicó una calificación que haría historia: “Tenemos una juventud maravillosa. Yo tengo una fe absoluta en nuestros muchachos, que han aprendido a morir por sus ideales y, cuando una juventud ha aprendido y ha alcanzado esto, ya sabe todo lo que una juventud esclarecida debe saber”.

Toda esa frenética expansión ocurrió en poco más de un año, entre mediados de 1972 y fines de 1973. La mayoría de los dirigentes o “cuadros” de las diferentes “orgas” no se conocían, por lo cual, para las citas en lugares públicos, los de las FAR, la “F”, llevaban una revista de historietas *Fantasía*; los de *Descamisados*, la “D”, una *D’Artagnan*, y los de Montoneros, la “M”, una *Misterix*.

Era una organización político-militar; un cuerpo potente formado por un esqueleto armado, disimulado y potenciado por un conjunto de agrupaciones de superficie, que actuaban en distintos ámbitos, desde la política hasta los barrios populares pasando por los gremios, los estudiantes, los profesionales y la prensa.

La Conducción Nacional —CN o “Carolina Natalia” en la jerga interna— era el principal organismo ejecutivo, con ocho miembros, aunque en 1974 se los redujo a los tres de la cúpula para una mayor eficacia. ¿Su misión? Poner en práctica las líneas de acción decididas por el Consejo Nacional, formado por dieciséis “oficiales superiores”: los ocho de la CN y los jefes de las ocho regionales.

Es que Montoneros fue abarcando todo el país, al que dividieron en esas ocho regionales: Buenos Aires; Rosario, Santa Fe y Paraná; Nordeste; Noroeste; Cuyo; Córdoba; Patagonia, y La Plata y Mar del Plata. Cada una de ellas estaba encabezada por un oficial superior, que era el rango máximo

en la jerarquía de la “orga” porque todavía no habían creado el cargo de comandante.

La estructura era, ciertamente, militar: en la base estaban los adherentes o simpatizantes de la causa; luego, venían los aspirantes o milicianos (suboficiales), que pasaban a revistar en la Unidad Básica de Aspirantes (UBA); después, cuando estaban bien adoctrinados y ya habían participado en acciones armadas, entraban en la jerarquía de oficiales formando una Unidad Básica de Combate (UBC): oficial raso, oficial segundo, oficial primero, oficial mayor y oficial superior.

El ex oficial superior Perdía calculó que hacia noviembre-diciembre de 1975, Montoneros contaba con “unos 2300 oficiales; unos 12 mil miembros si sumaban a los aspirantes, y unas 120 mil personas agregando a la gente más o menos organizada que adhería a nuestra propuesta”.

No resultaron fáciles esas fusiones: muchos miembros de Descamisados y de las FAR mantenían su desconfianza por el carácter aluvional, tumultuoso, inorgánico de los montoneros, que, según ellos, facilitaba la infiltración por parte de los servicios de seguridad. Los “montos” y los “descas”, por su lado, recelaban de la arrogancia que atribuían a “los rubios de las FAR” y les molestaba el lenguaje marxista que utilizaban los “faroles”.

Más allá de esos recelos, que se mantenían en el sótano de la arena pública, los montoneros pasaron a ser los jóvenes que trajeron a Perón, que regresó el 17 de noviembre de 1972. El General se instaló en el chalet de tres plantas que le habían comprado en la calle Gaspar Campos 1065, en Vicente López, a una decena de cuadras de la residencia presidencial de Olivos.

Perón estuvo casi un mes allí, antes de regresar a Madrid. En ese lapso, siguió dándoles aire a los jóvenes revolucionarios. Algunos montoneros

fueron incorporados a la custodia del General, quien hasta invitó al chalet a Carlos Hobert —un jefe guerrillero no muy conocido pero bastante influyente— y a otros dos “oficiales superiores”.

—Bueno, ahora habrá que dejar los “fierros” [las armas] —le comentó uno de los invitados.

—No, al revés: ahora es cuando más los necesitamos. Cuando en una batalla el enemigo está en retroceso hay que aumentar la capacidad de fuego —contestó Perón.

Los montoneros siguieron su avance triunfal y se convirtieron en los bastoneros de la campaña electoral relegando al aparato sindical y a los frágiles políticos peronistas. No necesitaban el dinero de los gremios: con sus secuestros y asaltos a bancos y empresas, Montoneros contaba con recursos propios, suficientes para bancar tanto a sus militantes como a “buena parte de la campaña” de Cámpora, según reveló Perdía.

Ya vimos que Cámpora no era el candidato de los sindicalistas, que sufrieron dos duros golpes más con las designaciones de Oscar Bidegain para la gobernación de Buenos Aires y José Gelbard como futuro ministro de Economía, otro extraño al nido sindical, que postulaba a Cafiero o a Alfredo Gómez Morales.

Perón había decidido encarar la campaña apoyado en el ala izquierda de su Movimiento, y así lo dejó claro en un reportaje con el diario peronista *Mayoría* el 11 de enero de 1973: “O la juventud toma esto en sus manos y lo arregla, aunque sea a patadas pero lo arregla, o no lo va a arreglar nadie. Los viejos no van a arreglar esto; los viejos no están en la evolución”.

Y agregó: “Nosotros no podemos desear otra cosa que elecciones porque ahí ganamos nosotros. Se lo he dicho a los muchachos y los muchachos se han parado porque estaban para más. Yo les dije: ‘Ganemos las elecciones

porque ahí somos fuertes nosotros. No llevemos esto a una cosa violenta porque ahí estamos dudosos’”.

En realidad, Perón y la cúpula de Montoneros no se conocían; se comunicaban por cartas que iban y venían entre Madrid y Buenos Aires, llevadas por personas de confianza. Todo marchaba muy bien, pero el idilio terminó cuando se vieron las caras por primera vez, en la primera semana de abril de 1973, luego del triunfo de Cámpora pero antes de su asunción.

Todavía eran sus “muchachos” cuando le pidieron la reunión para “plantearle nuestras opiniones acerca de las políticas desde las cuales abordar las responsabilidades del próximo gobierno”. Comenzaron a dejar de serlo luego de los cinco encuentros que mantuvo con ellos, dos en Roma y tres en Madrid, cuando el General se dio cuenta de que la guerrilla a la que tanto había impulsado con sus mensajes inflamados no iba a desarmarse en la democracia recuperada ni a obedecer mansamente su jefatura.

Todavía circulan entre los sobrevivientes de aquellos años de pasiones mal encaminadas anécdotas que reflejan que no hubo buena química en Roma, en el Hotel Excelsior, donde la Vía Veneto de *La dolce vita* hace una curva, calle de por medio con la embajada de Estados Unidos.

—General, yo soy Mario Firmenich, oficial superior de Montoneros.

—Yo soy Roberto Perdía, oficial superior de Montoneros.

—Y yo, Roberto Quieto, también oficial superior de Montoneros.

—Bueno, encantado, yo soy Juan Domingo Perón, general del Ejército Argentino.

Perón había viajado a Italia a visitar a una serie de políticos, empresarios y cardenales para preparar su regreso definitivo a la Argentina. Cuando

terminó esas reuniones, invitó a los tres jefes guerrilleros a continuar la charla en Puerta de Hierro.

Tampoco se sintió cómodo en su casa, cuando, en el último encuentro en España, Firmenich se levantó para entregarle un presente.

—General, aquí tiene, ésta es la pistola con la que ejecutamos a Aramburu.

—No, no, guárdenla ustedes, que está en buenas manos —se atajó Perón.

La última anécdota muestra a los jefes montoneros preocupados porque, según ellos, el Ejército iba a entregar el poder pero solo para preparar un nuevo golpe de Estado, ya que seguía intacta su “concepción gorila”.

—General, tenemos que impedir que se repita lo del 55 y, en nuestra opinión, la forma de impedir esto es organizar las milicias populares —le dijo uno de ellos.

—Por supuesto, por supuesto. Voy a hacer una ley para que cada obrero tenga un fusil en su casa y ustedes, que son los que ya tienen experiencia en esto, serán los encargados de organizarlas.

En el primero de esos encuentros en Madrid, los jóvenes le entregaron una carpeta titulada *El Organigrama*, varias hojas repletas de ternas de candidatos para ocupar los cien principales puestos del aparato estatal a nivel nacional. Trescientos nombres. Y una lista de personas que “no podían ser parte del gobierno popular”; entre los vetados figuraban el sindicalista Juan José Taccone, los técnicos desarrollistas del ex presidente Arturo Frondizi y los economistas Cafiero y Gómez Morales.

El organigrama había sido elaborado por Alejandro Peyrou, que coordinaba el grupo de técnicos y profesionales de Montoneros. “Me ordenaron —contó Peyrou— a través de mi responsable, Adriana Lesgart, que elaborara una lista de candidatos. Varios nombres me llegaron directamente de la Conducción Nacional. Me dijeron también que

contactara a los economistas del radicalismo. Con todos los aportes, hice un listado de nombres posibles, y lo elevé. Luego, el listado me fue devuelto con algunas correcciones a mano, realizadas, se presume, por Firmenich. Una de esas correcciones decía: ‘No promoverlos más’, en alusión a Julián Licastro y Carlos Grosso. Tengo muy presentes algunos nombres de los candidatos. Al ‘Bebe’ Righi lo acercaron los Cámpora. También estaba Hugo Anzorreguy, ligado a los ‘montos’ pero no sé cómo. Siempre me intrigó la presencia de Francisco Delich (ex rector de la UBA con Raúl Alfonsín) como candidato a ministro de Educación. Ese nombre vino de Córdoba”.

Perón puso cara de piedra cuando recibió el organigrama montonero, pero no debió haber quedado muy contento con esos jóvenes tan osados como para atarle las manos a un conductor como él. “Lógicamente, Perón interpretó eso como una imposición. Leí luego en una revista qué dijo: ‘Que estos muchachos se vayan a plantar zanahorias’”, recordó Peyrou.

Perdía, por su lado, explicó cómo eran esas ternas: “El primer nombre era el candidato propio, el más importante para nosotros; luego venía el aliado, y el tercer nombre era el candidato más lejano, un aliado pero ya no tanto. No le planteamos a Perón que tomara ningún compromiso con nosotros; solo era una lista de nombres sugeridos. Éramos bastante abiertos: sugeríamos a los radicales para Economía, concretamente a Roque Carranza, a pesar de las denuncias de que habría participado como comando civil en atentados contra el gobierno peronista en la década del 50. Fue una actitud diferente de la que luego tendría el presidente Alfonsín con nosotros. Perseguíamos un objetivo: establecer una alianza con los radicales para evitar un golpe militar. También proponíamos descabezar a la cúpula militar y designar como comandante del Ejército a un coronel, Carlos Dalla

Tea, o a Juan Jaime Cesio. Era un esquema reformista, apuntábamos a modificar el Estado. No era la Patria Socialista ni nada por el estilo”.

Otros candidatos del organigrama montonero eran Juan Manuel Abal Medina para el área política, el periodista Miguel Bonasso para la secretaría de Prensa y Difusión, el radical Conrado Storani para el área energética, Rodolfo Ortega Peña para el ministerio de Trabajo, Rolando García para el ministerio de Obras Públicas, el padre Carlos Mugica para la subsecretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad, y los historiadores Rodolfo Puiggrós y Juan José Hernández Arregui para el área educativa.

Por si fuera poco, los jefes montoneros también le revelaron a Perón que contaban como fuerza propia a los gobernadores electos de las dos provincias más poderosas, Buenos Aires y Córdoba, en alusión a Oscar Bidegain y Ricardo Obregón Cano.

Para los tres jefes montoneros el viaje a Roma y a Madrid fue también una oportunidad para conocer a un personaje aparentemente gris pero que se haría cada vez más influyente en el entorno del líder, en simultáneo con el deterioro de su salud: su secretario privado, José López Rega.

Perdía me contó que López Rega les pareció un bufón del General, “pero como nos diría Jorge Taiana, luego ministro de Educación de Cámpora [padre del ex canciller y actual senador]: una cosa era López Rega con Perón controlando la situación y otra muy distinta con Perón dependiendo de él”.

López Rega era un ex cabo de la Policía Federal que se relacionó no se sabe bien cómo con Isabel Perón cuando ella viajó a Buenos Aires en 1965 para apoyar al candidato de Perón en las elecciones de gobernador de Mendoza, Ernesto Corvalán Nancrales. Isabelita cayó en las redes de López Rega, se lo llevó a Madrid y dicen que prácticamente se lo impuso a Perón como secretario privado.

A esa altura, ‘Lopecito’, como le decía Perón, ya tenía sus planes políticos y se los confió a los tres jefes montoneros. Luego de la última reunión en Madrid, los invitó a tomar unas copas en el bar del hotel Monte Real, a unas tres cuadras de la residencia 17 de Octubre. Les contó la anécdota del guitarrista malo de Gardel: “Carlos Gardel tenía dos guitarristas, uno bueno y otro malo. El más habilidoso murió también en el accidente de Medellín. El otro se salvó porque se había quedado en Buenos Aires para reducir los costos de la gira. A partir de la muerte de Gardel, el guitarrista malo se ganó la vida con el título ‘El guitarrista de Gardel’: reemplazó su poca habilidad con la fuerza de ese título. Así va a suceder también conmigo: Perón va a retornar a Argentina y va a volver al gobierno, con Isabel como vicepresidenta; Perón se va a morir e Isabel lo va a suceder, pero ella no entiende mucho de esto. Yo, en cambio, voy a ser como el guitarrista malo de Gardel: con la fuerza del título de ‘secretario privado de Perón’, voy a ejercer el poder a través de Isabel”.

Perdía me dijo que en aquel momento no le dieron ninguna importancia al relato: “Pensamos que eran los sueños de un delirante. Con el tiempo, comprendimos cómo nos habíamos equivocado”.

Tampoco Isabelita les pareció gran cosa, en su rol de solícita esposa (de “caba enfermera”, decía) que solo osaba interrumpir al General para recordarle cómo seguía su agenda o a qué hora tenía que tomar sus remedios.

Perón no daba órdenes en forma directa; prefería relatar cuentos y anécdotas para que sus interlocutores sacaran sus conclusiones, que eran ratificadas o corregidas por él con un guiño, una frase ingeniosa o una amplia sonrisa.

En la última entrevista con los tres jefes montoneros, les contó que un padre judío quiso hacerle un regalo muy especial a su hijo, que cumplía

doce años y entraba a la mayoría de edad: “El padre lo llama: ‘Jacobo, Jacobo. Tu regalo está arriba del ropero. Andá a buscar la escalera y agarralo’. El chico, con toda la ilusión, busca la escalera y se trepa a la carrera, pero cuando llega arriba no ve nada. ‘Papá, aquí no hay nada’, se queja, sorprendido. Entonces el padre lo mira, toma la escalera y se la quita de un tirón; el chico se da un golpe y, cuando está en el piso, dolorido, el padre le dice: ‘Hijo mío, mi regalo es que aprendas a no confiar ni en tu padre’”.

El cuento podía ser interpretado como una advertencia de Perón en el sentido de que el soporte político de los montoneros era él; por lo tanto, si no aceptaban sus directivas, podía enojarse y sacarles la escalera. En aquel momento, los jefes guerrilleros no llegaron a esa conclusión.

¿Qué era lo que más le preocupaba a Perón? El papel de la guerrilla peronista en la naciente democracia. En su opinión, la violencia de abajo había sido legitimada por la violencia de arriba y, por lo tanto, debía cesar una vez terminada la dictadura. Los tiempos habían cambiado y ahora los montoneros debían desarmarse y convertirse en una fuerza política que fuera ocupando espacios cada vez más importantes en el aparato estatal para aprender a gobernar con el objetivo de reemplazar, en el futuro, a los dirigentes más veteranos, concretando el curioso concepto que había inventado unos años atrás: el trasvasamiento generacional.

Perdía aseguró que “Perón no ocultaba su preocupación acerca de la necesaria reconversión de nuestra fuerza. Él quería que utilizáramos los próximos cuatro años para aprender a gobernar, para asegurar un eficaz traspaso a nuestra generación de la conducción del país y del Movimiento. Nos dijo en Madrid: ‘Cuando yo vuelva al país reorganizamos la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, les traspasamos fondos y así ustedes establecen un sistema de relaciones legales para reconvertirse como organización

militar’. No es verdad que nosotros no quisiéramos eso; pasó que cuando Perón volvió, no hizo nada de eso”.

Perón ilustró sus prevenciones con otro recurso frecuente en él: los relatos históricos. Así les habló del emperador de Prusia, Federico II el Grande, quien, una vez que se afianzó en el trono y conquistó los territorios que necesitaba para gobernar, en 1763, desarmó a buena parte de su Ejército porque sus objetivos políticos habían cambiado. “Es —les explicó— una cuestión central porque las armas sirven para pelear pero no se puede gobernar sentado en las bayonetas”.

Los montoneros no se desarmaron y, por el contrario, buscaron aumentar su arsenal y mejorar el adiestramiento militar de sus cuadros. Más importante aún: aceleraron su fusión con las FAR para incrementar drásticamente su poder de fuego. Estaban convencidos de que la Revolución estaba muy cerca y de que el pasaje al socialismo necesitaría de un inevitable “momento militar”, de un choque armado definitivo con las Fuerzas Armadas.

Firmenich lo expresó con claridad el sábado 8 de septiembre de 1973, quince días antes de las elecciones que consagrarían por tercera vez a Perón como presidente y diecisiete días antes de que asesinaran a Rucci. Fue a la salida de la residencia de Gaspar Campos, luego de un encuentro del General con diversos grupos juveniles del Movimiento, cuando un periodista de la revista montonera *El Descamisado* le preguntó si abandonarían las armas ahora que Perón estaba a punto de volver al gobierno.

—De ninguna manera: el poder político brota de la boca de un fusil. Si hemos llegado hasta aquí ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos; si abandonáramos las armas retrocederíamos en las posiciones políticas. En la guerra, hay momentos de enfrentamiento, como los que

hemos pasado, y momentos de tregua, en los que cada fuerza se prepara para el próximo enfrentamiento. En tanto no haya sido destruido el poder del imperialismo y la oligarquía debemos prepararnos para soportar o afrontar el próximo enfrentamiento —respondió Pepe Firmenich.

Los encuentros en Roma y Madrid no sirvieron de nada: las diferencias entre Perón y los montoneros comenzaron a salir a la superficie pocos días después. Y se fueron ampliando durante los cuarenta y nueve días que duró la presidencia de Cámpora, cuya caída fue leída por los jóvenes revolucionarios como un golpe de Estado de Perón contra ellos.

El primer cortocircuito se produjo ya el 23 de abril de 1973, cuando trascendió que, en un discurso en el sindicato del Calzado, Rodolfo Galimberti se había manifestado en favor de la creación de “las milicias de la Juventud Peronista para la liberación nacional”.

Galimberti, *El Loco*, era uno de los rostros más conocidos de la Juventud Peronista. Sus declaraciones armaron revuelo entre los militares, donde varios jefes resistían el traspaso del gobierno a Cámpora y al peronismo. Uno de los que le salió al cruce fue el director del Colegio Militar, el general Jorge Rafael Videla.

El 26 de abril a la noche, Cámpora viajó a Madrid para repasar los nombramientos más importantes y resolver la crisis con los militares. Al día siguiente, López Rega anunció el desplazamiento de Galimberti como representante de la Juventud Peronista ante el Consejo Superior del Peronismo para enojo de los montoneros.

Cámpora mantuvo otros encuentros con Perón y retornó el 30 de abril a Buenos Aires. La relación entre El Viejo y El Tío seguía a las mil

maravillas. Eran los tiempos en que Perón decía que “ahora el que corta el salame es el doctor Cámpora”.

Por su lado, el presidente electo lo llamaba “mi jefe y amigo, el general Perón”. La lealtad era el atributo que lo había distinguido siempre, primero con Evita y ahora con Perón. Un chiste cruel describía esa situación: Perón se está afeitando y desde el baño le pregunta a Cámpora, que lo esperaba afuera con una toalla: “¿Qué hora es, doctor Cámpora?”. “La que usted quiera, General”, le responde.

Cámpora llegó a Buenos Aires el 1 de mayo de 1973 con una sabrosa novedad: “Perón regresará pronto al país”.

Todavía el General lucía muy cómodo en el traje que se había diseñado: regresaría para recuperar su grado militar, pero dejaría que Cámpora ocupara la presidencia mientras él se convertía en el poder detrás del trono: “Yo me considero un argentino más que un justicialista. Me reservo una tarea de coordinador, de manager como dicen ahora, para hacer un bloque de fuerzas e ideas al servicio del país”.

Finalmente, Cámpora asumió y los montoneros resultaron muy beneficiados en el nuevo esquema político.

- Gozaban de una excelente llegada al flamante presidente, gracias a la fluida relación con su hijo y secretario privado, Héctor Pedro, *Hijitus* para amigos y enemigos; con el ministro del Interior, Esteban *Bebe* Righi, compañero de promoción en la Facultad de Derecho de la UBA de Héctor Pedro y su socio en un estudio jurídico, y con el secretario general de la presidencia, Mario Cámpora, el influyente sobrino presidencial. Los tres formaban el círculo de hierro del nuevo mandatario.
- Podían contar con el canciller, Juan Carlos Puig, y su equipo.

- Tenían una muy buena relación con el titular de Educación, el médico Jorge Taiana: su hijo, Jorge, pertenecía a la “orga”, y varios militantes ocupaban puestos importantes en el ministerio.
- Eran aliados de al menos seis gobernadores, entre ellos los de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz.
- Les respondían entre 20 y 25 diputados.
- El vicepresidente primero del Senado y segundo hombre en la sucesión presidencial era Alejandro Díaz Bialet, tío de Magdalena Díaz Bialet, que era la esposa de Mario Cámpora. Su hermano, Agustín Díaz Bialet, integraría la Corte Suprema de Justicia.
- Pasaron a controlar las principales universidades del país, incluida la UBA.
- Se llevaban muy bien con el nuevo jefe del Ejército, el general Jorge Carcagno, y con algunos miembros de su Estado Mayor, en especial con los coroneles Cesio y Dalla Tea.
- Mantenían una buena relación con el secretario general del Movimiento, Juan Manuel Abal Medina, el hermano de Fernando, el primer jefe de Montoneros.

Tenían un enemigo potencialmente muy peligroso en el gabinete: López Rega, al frente de Bienestar Social, el más peronista de los ministerios, pero podían compensar con el otro hombre fuerte del elenco, el titular de Economía, Gelbard, quien por su formación de izquierda y sus contactos internacionales, en especial con la Unión Soviética, los miraba con buenos ojos. Además, Gelbard contaba con un par de relaciones comunes con los montoneros, como el ascendente banquero David Graiver, un misterioso personaje que era uno de sus asesores y que también había sido funcionario de la dictadura.

Pero no podían conformarse con todo eso; se sentían urgidos por la revolución socialista, según me contó Santiago Díaz Ortiz, quien había encabezado la lista de diputados en la Capital Federal, y aunque no pertenecía a la “orga”, tenía muy buenas relaciones con ellos.

“Perón —explicó— les dio mucho aire desde Madrid, pero, por una mala administración de sus fuerzas, la Juventud perdió rápidamente su oportunidad. Cometió errores políticos como no desarmarse al pasar el país a la democracia o seguir con un discurso radicalizado. Creo que la Juventud no apreció bien las relaciones de fuerzas dentro del Movimiento: creyó que tenía más fuerza que la que realmente tenía. Y eso que Perón les había dicho que el trasvasamiento generacional del que él hablaba no significaba que podían tirar un viejo por la ventana todos los días”.

De acuerdo con Perdía, los verdaderos problemas con Perón comenzaron aquel 25 de mayo por la noche; luego del discurso de Cámpora ante una plaza de Mayo colmada, la Juventud Peronista convocó desde el balcón de la Casa Rosada a marchar hacia la cárcel de Villa Devoto para exigir la libertad de los guerrilleros presos.

Las columnas marcharon con dos consignas excluyentes:

—¡El Tío presidente, libertad a los combatientes!

—¡Primera ley vigente, libertad a los combatientes!

A las 20 ya había más de 30 mil personas rodeando los muros de la cárcel, que alojaba a unos ciento ochenta presos de Montoneros, las FAR, las FAP y el ERP. Casi todos ya habían sido juzgados y condenados por los tribunales especiales creados por el gobierno militar.

La manifestación sorprendió al flamante presidente recibiendo a las delegaciones extranjeras para una cena de gala. Sus colaboradores ya habían acordado con todos los bloques legislativos un paquete de tres leyes que incluía una amnistía amplia y generosa para todos los “presos

políticos”, la derogación de las leyes que reprimían a la guerrilla y la eliminación de los tribunales especiales. Solo había que esperar al día siguiente.

Pero a las 22 ya eran 50 mil los que golpeaban las puertas del penal. Presionado por los grupos guerrilleros, Cámpora tuvo que firmar un decreto de indulto a las 23; minutos después, comenzaron a salir los primeros presos. A la madrugada, cuando la mayoría de los manifestantes ya se había retirado, la policía chocó violentamente con grupos que querían tomar la cárcel.

Finalmente, el sábado 26 de mayo el Congreso, rodeado por otra fervorosa movilización, sancionó por unanimidad la ley de amnistía.

Muchos periodistas montaron guardia en Puerta de Hierro porque querían saber qué pensaba Perón de todo esto, pero el General no se dejó ver. “A Perón no le gustó lo de Devoto, pero nosotros no podíamos esperar porque teníamos un compromiso: ni un día de gobierno popular con presos políticos”, contó Perdía.

La liberación de los guerrilleros presos no podía sino enojar a Perón, ya que contradecía sus sugerencias a Cámpora en una carta enviada tres días antes, el 22 de mayo: “Creo que hasta tomar realmente el poder, debemos tratar por todos los medios de actuar con una prudencia, si se puede, exagerada, para dar la sensación de una real consideración de las instituciones, aunque los hombres de las mismas nos merezcan por el momento la mayor desconfianza y el mayor rechazo. Hay que desplumar a la gallina sin que grite”.

La “primavera camporista” nunca pudo sacarse de encima la imagen caótica de aquella noche inicial; las movilizaciones juveniles fueron vistas por buena parte de los medios de comunicación y de la opinión pública

como aprietes al nuevo gobierno, como auténticas “montoneras”: masas barulleras, tumultuosas, peligrosas y violentas.

Durante el nuevo gobierno, si bien cayó el número de asesinatos por razones políticas, la violencia de las guerrillas continuó ya que todos los grupos aumentaron los secuestros de empresarios y otras formas delictivas para recaudar fondos; los montoneros otorgaron una tregua aunque advirtieron que seguirían armados, vigilando la marcha del gobierno popular, pero el ERP rechazó directamente el pedido de cese del fuego formulado por el nuevo presidente debido a que “sus medidas no van contra el sistema”.

Por si fuera poco, apareció una nueva modalidad de apriete: las ocupaciones. Prácticamente, todos los sectores del peronismo se dedicaron a tomar hospitales, escuelas, ministerios, cementerios, emisoras de radio y demás organismos estatales. Las ocupaciones incluyeron empresas privadas, desde el Alvear Palace Hotel hasta la fábrica de pinturas Alba. Los objetivos también eran variados, desde aumentos salariales y la adopción de nuevos ritmos de producción hasta el cambio de autoridades o la sanción de un jefe negrero.

Todo eso contribuyó a una sensación generalizada de vacío de poder.

El 14 de junio había ciento ochenta ocupaciones cuando Cámpora embarcó rumbo a Madrid de visita oficial a España y para traer al General en su “regreso definitivo a la Patria”. Allí pudo comprobar que la relación se había roto y debió sufrir duras reprimendas por su debilidad en el gobierno, que incluyeron desaires protocolares, como la notoria ausencia de Perón en los actos oficiales encabezados por el generalísimo Francisco Franco.

Perón volvía a la Argentina con nuevos objetivos. “Yo voy a tomar el poder”, avisó el General antes de subirse al avión, según informó el 20 de

junio de 1973 el enviado especial de *Clarín*, Julio Algañaraz.

“Se acabó la joda”, diría Rucci el 10 de julio, luego de una visita a Cámpora, tres días antes de su caída. El péndulo de Perón pasaba a favorecer a los sindicalistas contra los montoneros.

OceanofPDF.com

Capítulo 3

DOS PATRIAS EN PUGNA

Esos balazos fueron para mí; me cortaron las patas.

Juan Domingo Perón a los periodistas el 26 de septiembre de 1973 en el velatorio de José Ignacio Rucci.

La ideología de Perón es contradictoria con nuestra ideología porque nosotros somos socialistas.

Mario Firmenich en una charla luego del asesinato de Rucci.

Muchachos, se están olvidando de que acá el único que conduce es Perón. Le están queriendo pelear la hegemonía del Movimiento, están tratando de imponerle condiciones. A Perón, muchachos, a Perón. Estamos cayendo en la soberbia armada.

El cura Jorge Galli en una crítica a los montoneros antes de romper con ellos.

El primer libro que escribí sobre los 70 fue *Operación Traviata*, acerca del asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, “la gota que derramó el

vaso”, según dijo Juan Perón al lanzar una purga de fin del mundo contra los montoneros, que acentuó la locura de atentados, secuestros, bombas y muertes.

Rucci fue asesinado el martes 25 de septiembre de 1973 a las 12.10 por un preciso disparo de FAL del mejor cuadro militar de Montoneros, Julio Iván Roqué, también conocido como *Lino*, *Martín*, *Mateo* o *Uno*, un oficial superior que era el número seis de la Conducción Nacional y planificó todo el operativo.

El balazo de Lino penetró en la cara lateral izquierda del cuello de Rucci, que nunca llegó a tocar la puerta trasera del Torino colorado de la CGT al que estaba a punto de subir; un tiro fatal, disimulado entre los veinticinco agujeritos que afearon su cuerpo, abiertos por el jefe guerrillero y sus dos lugartenientes.

Tantos balazos inspiraron un chiste macabro que rápidamente comenzó a circular en algunos grupos montoneros:

—¿Sabés cómo le dicen a Rucci? —preguntaba uno.

—No, ¿cómo? —era la respuesta cantada.

—Traviata, por los veintitrés agujeritos.

Aludía a una muy popular publicidad de las galletitas Traviata, de Bagley —hoy, de Arcor— cuyo lema, tan pegadizo, era: “La de los veintitrés agujeritos”. Para los montoneros, el atentado adquirió entonces un nombre definitivo: Operación Traviata.

Lino era un cordobés grandote, sereno y amable. Maestro y licenciado en Ciencias de la Educación, publicó varios artículos en la revista *Pasado y Presente*, algunos de cuyos intelectuales influyeron en el giro de Mario Firmenich y otros jefes montoneros hacia el marxismo.

Lino fue profesor universitario y rector de un instituto secundario en Córdoba. Ideológicamente, era un marxista leninista, admiraba al Che

Guevara y no tenía ninguna simpatía ni confianza por Perón.

Llegó a Montoneros luego de la fusión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyo bautismo de fuego fue, precisamente, la emboscada a Rucci. Ya era un jefe admirado en la guerrilla, donde empezó a hacerse un nombre cuando liquidó al general Juan Carlos Sánchez en pleno centro de Rosario, el 10 de abril de 1972, desde un coche en movimiento. Sánchez era el jefe del Segundo Cuerpo del Ejército. Nada menos.

El asesinato de Rucci fue crucial para el peronismo y la Argentina de los 70; hubo un antes y un después de esta emboscada, en especial en el dinámico triángulo de relaciones entre Perón, los montoneros y los sindicalistas.

La Operación Traviata marcó el triunfo de los sectores de ese grupo guerrillero que apostaban a una respuesta militar contra la decisión política de Perón de borrarlos de las posiciones de poder que habían conseguido en las elecciones del 11 de marzo y en el gobierno de Héctor Cámpora.

Los “fierros” vencieron a los “políticos” o “movimientistas” en una victoria interna que resultó pírrica: los montoneros, que apenas cuatro meses atrás marchaban a la Revolución, se fueron replegando sobre su aparato militar y, alienados de los sectores populares y de la calle, se condenaron a una derrota también en ese plano.

Muchos se fueron de Montoneros, descontentos por ese giro militarista, con lo cual la organización perdió musculatura, tal vez el 30 por ciento de su fuerza. Un grueso sector fundó la Juventud Peronista Lealtad, cuyo solo nombre indica su razón de ser: a diferencia de la casa matriz, acataban la conducción de Perón.

Un ex “oficial” de Montoneros, que solicitó que su nombre no fuera revelado, me contó que le llevó “años de terapia el abandono de la ‘Orga’.

Era una pertenencia muy grande: no podíamos usar nuestro nombre y apellido, vivíamos en la clandestinidad, cedíamos los salarios y los bienes; era peor que una secta religiosa. Vos recibías una mensualidad y un nombre, convivías con otros militantes, no podías ver a tu familia ni a los viejos amigos salvo que los llevaras vendados a los lugares de encuentro, estaba prohibido hacer nuevas amistades”.

Entre los nombres más conocidos de los disidentes figuraron Horacio González, Alberto Iribarne, Carlos *Chacho* Álvarez, Fernando Galmarini, Alejandro Peyrou, Jorge Obeid, Norberto Ivancich y dos sacerdotes: Carlos Mugica y Jorge Galli, que venían de diferentes sectores sociales, uno de la aristocracia y el otro de la clase obrera, pero tenían el mismo compromiso de mejorar la vida de los pobres.

Varios de los sobrevivientes recuerdan todavía las críticas internas del cura Galli antes de dar el salto, en las que dejó una frase que haría historia: “la soberbia armada”.

“Muchachos —los reprendió—, se están olvidando de que acá el único que conduce es Perón. Le están queriendo pelear la hegemonía del Movimiento, están tratando de imponerle condiciones. A Perón, muchachos, a Perón. Nos estamos apartando del pueblo. No se puede creer que porque tengamos un aparato militar más o menos importante podemos imponerle condiciones al pueblo. Compañeros: estamos cayendo en la soberbia armada”.

El punto culminante de esa militarización progresiva fue el 6 de septiembre de 1974, dos meses después de la muerte de Perón, cuando volvieron a la clandestinidad y abandonaron la política de masas. Por ejemplo, no participaron de la movilización del 27 de junio de 1975, cuando los sindicatos coparon la Plaza de Mayo y le arrancaron a la sucesora y

viuda, Isabel Perón, la renuncia del hombre fuerte de su gobierno, José López Rega.

Reducidos a un aparato militar, ya habían perdido la calle y la gente.

Para Perón, la pelea con Montoneros fue también un sonoro fracaso. “La suprema elocuencia de la conducción está en que, si es buena, resulta, y si es mala, no resulta”, había sentenciado el General. Su creencia en que podría disciplinar a los jóvenes que había lanzado a la violencia se demostró excesiva.

Perón perdió a Rucci y eso fue decisivo para el fracaso de la Patria Peronista, la restauración del modelo justicialista, que giraba en torno a un concepto: la Tercera Posición, no solo en la política internacional, donde se mantenía equidistante de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, sino también en los planos económico y social. Ni el individualismo egoísta del capitalismo liberal ni la lucha de clases del comunismo. En su lugar, la Comunidad Organizada, la colaboración entre el trabajo y el capital con la mediación y orientación del Estado a través del Pacto Social.

El nuevo Pacto Social fue firmado incluso antes del regreso de Perón del exilio, el 8 de junio de 1973, por Rucci, en representación de los sindicatos, Julio Broner, en nombre de los empresarios, y José Gelbard, el ministro de Economía, ocupando la silla del Estado.

El secretario general de la CGT garantizaba el control de las demandas de los trabajadores, es decir el acatamiento de los modestos aumentos salariales que hubo antes de un prolongado congelamiento de precios.

Esa moderación sindical era una de las claves para que el Pacto Social tuviera éxito; para que creciera el país, cayera la inflación y la distribución

de la riqueza fuera más equitativa en procura de la promesa peronista del 50 por ciento para el trabajo y el 50 por ciento para el capital.

Rucci parecía saber que la firma del Pacto Social le traería problemas más bien graves. Me lo contó el economista Carlos Leyba, subsecretario de Coordinación y Planificación Económica durante la gestión de Gelbard.

“Rucci —explicó— sabía que se estaba jugando la vida y así lo dijo una de las últimas noches de mayo de 1973 delante de todos los que estábamos elaborando el Acta de Compromiso (Pacto Social). Más de veinte personas nos encontrábamos discutiendo la determinación de un ‘nivel real’ de salarios con el objetivo de aplastar la inflación y evitar el desmadre salarial. Rucci estaba rodeado de guardaespaldas que entraban y salían del Salón de Acuerdos del Ministerio de Economía, hoy salón Padilla. El dirigente metalúrgico, apoyado en uno de los sillones junto a la larga mesa, dijo en un tono cortante, profundo, grave: ‘Con este acuerdo estoy firmando mi sentencia de muerte’”.

También Antonio Cafiero, amigo y aliado de Rucci, y uno de sus consejeros en temas económicos, escuchó algo muy parecido: “Él me dijo una vez: ‘Mire, Antonio, a mí me van a matar por firmar el Pacto Social’. Él entendió que eso iba a ser un arma que iban a utilizar sus enemigos para declararlo traidor a la clase trabajadora. Se sabía sentenciado por los montoneros; no me lo dijo con estas palabras, pero me lo dio a entender”.

Cafiero agregó que el Pacto Social era la columna vertebral del plan de gobierno, y que la muerte de Rucci fue un duro golpe para la Patria Peronista: “La concepción central de Perón giraba alrededor de la concertación entre el capital y el trabajo en un país conmovido por unos desencuentros realmente pavorosos, sobre todo porque los muchachos de la Juventud, los que estaban en esa posición, todavía soñaban con la Patria Socialista, y en la Patria Socialista la concertación no existe; existe la lucha

de clases. Con la firma del Pacto, Rucci veía que quedaba un poco pataleando en el aire para esos sectores”.

El periodista Osvaldo Papaleo, secretario de Prensa en el gobierno de Isabel Perón, conoció de cerca a la plana mayor de los metalúrgicos: “Rucci nunca cuestionó la conducción de Perón. Por ejemplo, firmó el Pacto Social, que implicaba un aumento salarial pequeño y un congelamiento de precios. ¡Había que firmar eso! Muchos pensaban que había llegado el momento en que los trabajadores podían tener la sartén por el mango y el mango también, y él tuvo responsabilidad”.

Ninguno de los dos principales grupos guerrilleros respaldaba el clásico modelo justicialista. Por un lado, el ERP siempre defendió la lucha de clases y se oponía a los acuerdos entre el capital y el trabajo, y volvió a manifestarse en contra del Pacto Social de Perón, a quien consideraba un líder burgués, muy popular pero no más que eso.

Por el otro, los montoneros no decían públicamente que estaban en contra del Pacto Social para no ofender gratuitamente al imaginario peronista; en cambio, declaraban que querían reemplazarlo por otro, que “refleje los intereses de los trabajadores”, según dijo Mario Firmenich el 22 de agosto de 1973 en un acto en la cancha de Atlanta.

“Los trabajadores no tienen representantes... Porque tienen allí, en la CGT, una burocracia con cuatro burócratas que no representan ni a su abuela”, lamentó el jefe montonero mientras la multitud, más de cuarenta mil personas, se entusiasmaba y coreaba dos consignas conocidas:

—¡Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical!

—¡Rucci traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Vandor!

“Compañeros: esa consigna refleja verdaderamente lo que estamos diciendo... No existe la más mínima posibilidad. El tiempo...”, continuó Firmenich, pero su frase se perdió en el griterío de la gente.

Los cantores y el orador aludían a otro sindicalista metalúrgico, Augusto Timoteo Vandor, *El Lobo*, asesinado el 30 de junio de 1969.

Eso en el discurso público; en privado la posición se había vuelto mucho más crítica con Perón y el Pacto Social debido al giro ideológico hacia el marxismo leninismo que llevó a Firmenich y a varios jefes montoneros a asumirse como la “vanguardia armada de la clase obrera”.

“La Organización se define metodológicamente marxista leninista”, establecía *La Biblia*, el documento de Montoneros que explicaba semejante cambio ideológico luego de su fusión con las FAR, que fue aprobado por la Conducción Nacional en simultáneo con el atentado contra Rucci.

Ese pomposo nombre oficial fue bautizado por los montoneros con uno más profano: *El Mamotreto*, porque “era grueso así, muy difícil de abrochar, se le salían las hojas. Y era también muy pesado y muy difícil de tragar”, recordó Ramón Canalis, jefe de un pelotón en una villa miseria de San Francisco Solano.

Canalis me contó que se lo entregó una semana después del asesinato de Rucci su “responsable”: Norma Arrostito, *Gaby*, uno de los “bronces” de la Orga y la única mujer que participó del secuestro y fusilamiento del teniente general Pedro Aramburu.

—Fuimos nosotros —le informó Arrostito sobre la autoría de una emboscada que nunca fue reivindicada públicamente por Montoneros.

—Cagamos —pensó Canalis, que era peronista desde que su papá lo hacía dormir en una cuna escuchando la marchita en un barrio pobre de Tigre.

—Éste es el último documento de la Conducción Nacional. La idea es que circule solo entre los oficiales y que sirva para el debate y la discusión. Creemos que explica muy bien toda la situación que estamos atravesando —le explicó su jefa.

Hasta aquel momento, Canalis estaba convencido de que la Central de Inteligencia Americana, la CIA, estaba detrás del atentado.

Canalis volvió a la villa y le pasó el parte a sus compañeros, les regaló el documento, abrazó a cada uno de ellos, les deseó mucha suerte, se subió a un Citroën y no volvió nunca más a San Francisco Solano.

Fue uno de los tantos que abandonó Montoneros, descontento por el nivel al que había llegado el enfrentamiento con Perón. Para un peronista como Canalis, ¿qué era eso de definirse como marxista leninista?

Vladimir Lenin escribió su libro *¿Qué hacer?* durante la autocracia de los zares, cuando su grupo de revolucionarios tenía que vivir en la clandestinidad y el secreto; definió que “el partido es el sector políticamente consciente y avanzado de la clase obrera, de la clase revolucionaria; es su vanguardia”. Y eso era así porque portaban la “ideología correcta”, el marxismo, que era “proletaria” por definición y funcionaba como “una guía para la acción”.

La lógica impecable y universal del marxismo adaptado por Lenin a la realidad rusa fascinó a Firmenich y a otros guerrilleros que venían del catolicismo: si ya eran mesiánicos y sectarios, Lenin los despegó aún más de las masas y reforzó su militarismo en la toma de decisiones.

Un chiste de la época reflejaba cómo se veía a la Conducción Nacional que resultó de la unión de Montoneros con las FAR, y que ya había procesado la integración de los “cristianuchis” de los Descamisados: “En una combinación de laboratorio, mezclamos un poco de catolicismo [por los descamisados], kilos de montoneros y una gotita de las FAR, y ¿qué sale? Sale un gaucho grandote que grita: ‘Vivan las FAR’”.

La broma mostraba el predominio discursivo e ideológico de las FAR, que ponían la palabra y el pensamiento, mientras Montoneros contribuía con los músculos y la sensibilidad popular.

Fue Firmenich quien explicó esa conversión en una charla a los dirigentes de las agrupaciones que respondían a Montoneros, en la Ciudad Universitaria de la UBA pocos días después de la muerte de Rucci.

“La ideología de Perón —dijo— es contradictoria con nuestra ideología porque nosotros somos socialistas; es decir, para nosotros la Comunidad Organizada, la alianza de clases, es un proceso de transición al socialismo, el cual, además, entendemos, por el análisis de la realidad, que es obligado; no hay formas de frenarlo”.

La contradicción principal —una frase muy de los 70— era que ellos buscaban el socialismo a diferencia de Perón, que “no es partidario de una revolución violenta ni de un cambio de sistema, sino de un cambio progresivo de las estructuras dentro del sistema, y, además, entre el tiempo y la sangre, elige el tiempo”.

“Nuestra ideología —agregó Firmenich— es el socialismo porque es el estado que mejor representa los intereses de la clase obrera. Y un proyecto de vanguardia es el proyecto de una organización política que expresa los intereses de la clase obrera”.

Por lo tanto, los montoneros no eran unas simples “formaciones especiales” del peronismo, “una especie de brazo armado del peronismo. No solo no hay que disolverse sino que hay que lograr la conducción del Movimiento Peronista para transformarlo en un Movimiento de Liberación Nacional total”.

“La única acumulación de poder válida —precisó— es la del poder militar en última instancia; es decir, es el poder decisivo para conquistar los poderes político y económico. Y la acumulación de poder militar es el

poder militar del pueblo, el Ejército del Pueblo. Nosotros somos partidarios de construir las milicias, Perón no”.

¿Y los burócratas sindicales como Rucci? Para Firmenich, eran el principal enemigo dentro del peronismo, el pivot sobre el que se estaba apoyando Perón para enfrentarlos, para “aniquilarnos”, para disolverlos como grupo armado y neutralizarlos en el plano político.

Pero, si la Patria Peronista fracasó, como ya vimos, a la Patria Socialista le fue peor: murió antes de nacer ya que ni siquiera pudo tomar la conducción del peronismo y del país.

En *Operación Traviata* expliqué en detalle cómo fue el asesinato de Rucci y quiénes fueron sus autores. La muerte lo sorprendió en el pico de su poder; la victoria de la fórmula Perón-Perón por el 61,85 por ciento de los votos, la mayor cifra de la historia, también le pertenecía un poco: él y los sindicalistas habían encabezado la campaña.

A diferencia de lo que había ocurrido apenas seis meses antes, la Juventud Peronista tuvo que limitarse a un papel muy secundario, mientras era hostigada por Perón cada vez que tomaba el micrófono. Y también por Rucci, pero esa pelea venía desde mucho más lejos.

El General había vuelto definitivamente al país el 20 de junio. Una multitud nunca vista —casi dos millones de personas— se desplazó a Ezeiza para darle la bienvenida luego de casi dieciocho años de exilio. Pero la fiesta peronista terminó en una masacre en la que hubo trece muertos y trescientos sesenta y cinco heridos, en los alrededores del palco montado en el puente El Trébol, sobre la autopista Ricchieri, a tres kilómetros del aeropuerto.

En ese palco debió haber hablado Perón. No pudo porque los tiros lo obligaron a bajar en la base militar de Morón. Fue una matanza, dentro del Movimiento. El locutor oficial era el cineasta y cantautor Leonardo Favio: “Se ruega a los peronistas no hacer uso de sus armas”, se le escuchó decir cuando zumbaban las balas.

¿Qué pasó? La organización del acto y de la movilización popular había quedado en manos del teniente coronel retirado Jorge Manuel Osinde, secretario de Deportes y Turismo de la Nación y protegido del ministro de Bienestar Social, José López Rega. Tenía una larga trayectoria en la derecha peronista y buenos contactos en las Fuerzas Armadas pues había sido delegado militar de Perón.

Osinde eligió el lugar del acto y reclutó a los mil civiles fuertemente armados que el día anterior ocuparon posiciones cerca del palco para impedir que se acercaran los montoneros y sus agrupaciones de superficie. Sus hombres también coparon el palco, desde el cual a las dos y media de la tarde abrieron fuego con armas largas y automáticas contra la numerosa columna Sur de la Juventud Peronista —venían del sur del Gran Buenos Aires, La Plata y el sur de la provincia— que estaba pasando por detrás para quedar más cerca del orador pero alterando el riguroso esquema oficial. Ese fue el primer tiroteo, el que desencadenó la tragedia.

De los trece muertos, tres pertenecían a Montoneros y uno a la derecha; de los otros nueve —la mayoría— no pudo establecerse si pertenecían a algún grupo dentro del peronismo.

La masacre de Ezeiza tuvo mucho significado histórico e impactó fuertemente en la moral de los jefes y la tropa de la Orga. No solo por los tiros con los que fueron corridos por la derecha peronista sino también porque allí fue la primera vez que Perón dividió las aguas al definir que su

doctrina seguía siendo “peronista” y que, por lo tanto, no tenía nada que ver con la Patria Socialista que vivaban los montoneros.

Frustrado porque la matanza le había impedido el reencuentro con la multitud, Perón dio un mensaje por radio y televisión la noche siguiente desde su casa en Gaspar Campos. Se mostró muy conciliador con todos los argentinos: “Llego casi desencarnado. Nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasiones”, dijo. Pero fue muy duro contra “los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado. Deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. A los enemigos embozados y encubiertos o disimulados les aconsejo que cesen en sus intentos porque, cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento”.

También creyó necesario recordar qué era el peronismo: “Nosotros somos justicialistas, levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina y a nuestra ideología. Somos lo que las Veinte Verdades peronistas dicen”.

Perón obró en consecuencia. El viernes 13 de julio, Cámpora tuvo que presentar su renuncia y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno de López Rega, se convirtió en presidente con el único objetivo de organizar nuevas elecciones para que Perón volviera al gobierno.

En realidad, debía asumir el presidente provisional del Senado, Alejandro Díaz Bialek, pero, como era hombre de Cámpora, fue enviado de viaje a Madrid para preparar la posición que la Argentina llevaría a una todavía lejana conferencia de los Países No Alineados, en Argel.

La relación entre Perón y Cámpora terminó mal, tanto que el ex presidente ni siquiera fue invitado a la asunción del General, el 12 de

octubre.

Uno de los médicos de Perón, el doctor Carlos Seara, me dijo por qué había quedado tan molesto. “La verdad es que yo no vine a Argentina para ser presidente”, le comentó su paciente a mediados de enero de 1974. “Yo quería —agregó— venir a vivir tranquilo, ser una figura de consulta para cuestiones macropolíticas. Siempre le hice mucho caso a lo que decía Evita, y Evita siempre me decía que mi más leal colaborador era el doctor Cámpora. Cuando se dieron las circunstancias políticas que usted conoce, le hice caso. Pero ocurrió lo impensado: Cámpora se dejó copar por la izquierda”.

La respuesta de los montoneros a tantos desplantes de Perón fue tremenda: el asesinato de Rucci, que puede leerse como un atentado contra la conducción de Perón, una jugada para que volviera a tenerlos en cuenta en el reparto del poder. Para utilizar el lenguaje de la época, “le tiraron un fiambre sobre la mesa de negociaciones”; lo “apretaron” para que retomara su “política pendular” y dejara de apoyarse en la “burocracia sindical”.

Obviamente, esa muerte, y todas las de los 70, solo se entienden en el ajedrez violento de entonces.

Pero el General no se dejó apretar. “Fue la gota que derramó el vaso”, dijo Perón muy enojado cuatro días después de la emboscada, el 29 de septiembre de 1973, durante un encuentro con dirigentes políticos y sindicales. Y los convocó a “una lucha contra los terroristas y a expulsar a todos los elementos marxistas del movimiento peronista y del gobierno”, según un cable confidencial enviado el 2 de octubre de 1973 por el embajador estadounidense, John Lodge, a su gobierno, citando “fuentes peronistas”.

“Uno de los resultados de esta orden de Perón fue el pedido de renuncia al interventor de la UBA, Rodolfo Puiggrós”, comentó Lodge, quien también informó sobre la cumbre del día anterior, el 1° de octubre, en la que participaron Perón, Lastiri, los ministros, los líderes del Consejo Superior Peronista, y los gobernadores oficialistas.

“A los gobernadores —señaló el embajador— se les ordenó que purguen sus gabinetes de todos los elementos marxistas. Según *La Opinión* de esta mañana, los gobernadores fueron también informados de las estrictas órdenes remitidas a todos los delegados provinciales del movimiento peronista, instruyéndolos a que comiencen una campaña concertada contra los elementos subversivos”.

Esas instrucciones a los delegados partidarios en las provincias habían sido elaboradas por el Consejo Superior Peronista, de dieciséis miembros, el máximo organismo del Movimiento. Tenía el rótulo de “Documento Reservado” y buscaba enfrentar de una manera coordinada la “guerra desencadenada contra nuestra organización y nuestros dirigentes” por “los grupos marxistas terroristas y subversivos”, que se manifestaba en campañas de desprestigio, “infiltración”, amenazas, agresiones y asesinatos. Esa “guerra” debía tener como respuesta no solo la defensa sino también el ataque “al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión”. Para eso, daba una serie de directivas e indicaba que “se utilizarán todos los medios de lucha que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad”.

Para Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Movimiento, el asesinato de Rucci “fue la provocación más grande contra el General. Él nunca dudó de que habían sido los montoneros y lo vivió así. Muchos intentamos recomponer. Yo tenía diálogo permanente con el General y me reunía con gente de la Organización. Había gente sensata, pero el liderazgo

estaba en manos de un grupo que pensaba que en la Argentina estábamos cerca de la Revolución”.

En su informe, el embajador Lodge evaluó que Perón no pretendía destruir a toda el ala izquierda de su Movimiento ya que “ellos son un gran componente del Movimiento y, más importante aún, él los necesita para balancear al ala derecha. Más bien, él parece apuntar a deshacerse de un número limitado de los izquierdistas más extremos y correr la izquierda más hacia el centro”.

Lodge tenía razón: los desgajamientos de Montoneros fueron recibidos con entusiasmo por Perón, que estaba convencido de que con mucha paciencia y retórica podía recuperar a toda la Juventud con excepción de algunos de sus dirigentes, como Firmenich y Roberto Quieto; los consideraba perdidos, en un nivel parecido al de la guerrilla trotskista del ERP, proscripta desde el 24 de septiembre de 1973.

De los “erpianos”, Perón pensaba que podían terminar derrumbando al gobierno y abriendo la puerta a un golpe militar, como en su opinión habían hecho los sectores de ultraizquierda del gobierno del socialista Salvador Allende en Chile. Los identificaba con una terminal en París, sede de la Cuarta Internacional, y formando parte de una red desplegada también en otros países, con el apoyo de Cuba.

La violencia política, que no era poca, aumentó “perceptiblemente”, como informó a su gobierno el embajador Lodge ya el 5 de octubre de 1973 en otro cable confidencial. El diplomático estadounidense clasificaba esos hechos en tres grupos: “atentados contra la policía”, “ataques a locales de sectores juveniles y sindicales del peronismo” —atribuidos a las “facciones guerreras del peronismo, con las FAP, las FAR y Montoneros de un lado, y

los sindicatos del otro”— y “tiroteos de la policía con supuestos criminales, especialmente secuestradores. Ha habido un inusual número de detenidos muertos ‘mientras resisten arrestos’. Se rumorea que, de nuevo, está siendo aplicada la ‘ley de fuga’”, aludiendo a ejecuciones sumarias.

El mes siguiente, el 21 de noviembre de 1973, hizo su debut la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, con una bomba colocada en el auto del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que le destrozó las piernas y no lo mató de milagro.

Al poco tiempo se supo que esta organización se referenciaba en López Rega, el ministro de Bienestar Social y secretario privado de Perón, que nucleaba en torno a su influyente figura a diversos exponentes de la derecha armada del peronismo.

Sus principales jefes eran ex policías y ex militares; algunos de ellos se habían hecho notar en la matanza de Ezeiza. Usaban recursos del Estado, como vehículos e instalaciones, aunque también contaban con el respaldo de sindicatos y grupos nacionalistas.

¿Estaba Perón detrás de la Triple A? Desde el otro sector, Firmenich afirmó que no creía que Perón las hubiera creado, pero consideraba que dejó que “López Rega hiciera las Tres A”.

En tanto, el ex dictador Jorge Rafael Videla sostuvo que la Triple A fue fundada por Perón para “una guerra clandestina contra el ala izquierda de su Movimiento; en eso juega Perón personalmente. El elemento, la mano que ejecuta, fue López Rega, que, por otro lado, era un exagerado, que cometió excesos a más no poder. Luego de la muerte de Perón, la Triple A y el propio López Rega fueron inmanejables”.

Ese grupo paraestatal se convirtió en uno de los protagonistas más relevantes de la violencia política después de la muerte de Perón, el 1° de

julio de 1974, durante la presidencia de Isabelita, y, en especial, hasta que López Rega perdió su cargo y su condición de hombre fuerte del gobierno.

En el fondo, el tema del conflicto era uno solo: el poder, la conducción o, como decía el anciano líder, la “manija” o “quien corta el salame”.

No eran solo los montoneros quienes dentro del Movimiento se probaban el traje de Perón: todos sabían que, a los 78 años, tenía problemas de salud que se estaban agravando. Pero el problema con ellos era que el asesinato de Rucci le había provocado “un impacto emocional enorme. Fue, sin dudas, uno de los impactos más grandes en su salud”, afirmó el doctor Seara.

Diversas fuentes me dijeron que Perón lo quería como a un hijo. En el velatorio en la CGT, se lo notó muy apenado, y cuando un grupo de periodistas le hizo señas, se les acercó y les regaló una frase de título: “Esos balazos fueron para mí; me cortaron las patas”.

Además, Montoneros quería heredarlo para impulsar un proyecto al que Perón se oponía fuertemente. Nunca dieron demasiados detalles; solo que incluía la sustitución del “sistema demoliberal” por una “democracia popular” —se supone que similar a las dictaduras de los países comunistas— junto con la estatización de las principales empresas y el reemplazo de las Fuerzas Armadas por milicias populares.

Esa voluntad de poder se volvió tan ostensible que derivó en un encuentro reservado y audaz con la cúpula del Ejército, que rápidamente llegó a los oídos de Perón.

Ocurrió que el 21 de noviembre de 1973 por la noche al acostarse, Perón, que había asumido la presidencia hacía cuarenta días, sufrió una violenta taquicardia, que terminó indicando un daño severo de la función mecánica

del corazón como consecuencia de los infartos que ya había padecido. “Esta vez no estaba lista la guadaña, aunque la vi cerca”, le comentó Perón al doctor Pedro Cossio, apenas se recuperó.

A los pocos días, Jorge Taiana, también médico de Perón y ministro de Educación, se reunió con Roberto Perdía y le dijo: “Les quiero avisar que el General se muere en seis meses; con esta situación política, con el desgaste que implica el gobierno, se nos va en muy poco tiempo. En Madrid, habría vivido más, pero acá no”.

La cúpula de Montoneros solicitó una reunión con el jefe del Ejército, el general Jorge Carcagno, y con su Estado Mayor para “ver qué pasaba en el post Perón, ver con quién iban a jugar ellos”, me contó Perdía.

La cumbre se realizó en la primera semana de diciembre en el departamento de un empresario que despertaba la confianza de ambas partes, en la avenida Santa Fe, cerca de la Plaza San Martín. Carcagno fue con su jefe de Estado Mayor, el general Luis Betti; el jefe de Inteligencia, coronel Carlos Dalla Tea, y el jefe de Política, coronel Juan Jaime Cesio. No estuvo el jefe de Comunicaciones, general Leopoldo Fortunato Galtieri. Por Montoneros, concurrieron Firmenich y Perdía. Cada uno de los invitados fue dejando su arma en la entrada, bajo la custodia del dueño de casa.

“Hemos discutido ese tema con el Estado Mayor: nosotros vamos a estar con ustedes y no con el aparato sindical. Pero les quiero aclarar una cosa, muchachos: yo no manejo el Ejército, manejo los botones del Ejército; a veces, aprieto un botón y está el cable cortado; mi orden no llega a destino”, les informó Carcagno, según recordó Perdía.

Perón se enteró rápidamente de la reunión y decidió forzar el retiro de Carcagno, a quien ya tenía en la mira.

El General estaba a punto de morir y los montoneros lo sabían: ¿por qué aceleraron el choque? Perdía lamentó que no hubieran podido “evitar o salir de la confrontación con Perón, o bajar los decibeles. Es que éramos muy imberbes, como él nos dijo el 1° de mayo de 1974 en la Plaza. El promedio de edad de la conducción era de 25 años; el de oficial para arriba, 21 años, y el de las agrupaciones, 19 años. Éramos muy jóvenes y había un componente de avasallamiento contra las otras generaciones que desde la Conducción no logramos evitar”.

La ruptura quedó a la vista de todos el 1° de mayo de 1974 en el acto por el Día del Trabajador, una de las fiestas del peronismo. Terminó siendo el día en que Perón los echó de la Plaza de Mayo y del Movimiento o, como siguen sosteniendo los jefes montoneros, cuando ellos decidieron irse, empujados por sus bases. Lo cierto es que ya no hubo retorno porque Perón murió dos meses después, el 1° de julio, luego de consagrar al pueblo como su único heredero, cuando se despidió con estas palabras tan elocuentes: “Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del Pueblo Argentino”.

Pero antes ocurrió otro episodio fundamental: el 19 de enero de 1974, el ERP atacó el Regimiento de Caballería Blindada de Azul; no eran los montoneros pero Perón aprovechó la conmoción popular para forzar la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Bidegain, un aliado de la Orga.

En Azul, participaron 70 guerrilleros y fue la primera vez que la guerrilla operó con tanta gente a tanta distancia de una gran ciudad. El objetivo del ERP era tomar unos 500 fusiles para abastecer su frente rural en Tucumán, pero no pudieron hacerlo aunque mataron al jefe del cuartel, el coronel Camilo Gay, a su esposa y a un soldado. Se retiraron llevando de rehén al

subjefe, el teniente coronel Jorge Ibarzábal, quien apareció asesinado diez meses más tarde.

Perón se calzó su traje de teniente general y se presentó por televisión a las 21:08 del domingo 20 de enero para pronunciar sus palabras más duras desde el retorno a la Argentina. “Estamos en presencia de verdaderos enemigos de la Patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado, al que a la vez infiltran con aviesos fines insurreccionales. El aniquilar cuanto antes a este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana”.

Bidegain presentó su renuncia; fue reemplazado por el vice, Victorio Calabró, de la UOM, un modelo de “limpieza” de los gobernadores afines a los montoneros que había comenzado en Formosa y siguió rápidamente en Córdoba y Mendoza.

Perón aprovechó para acelerar un proyecto de ley que ya había enviado al Congreso, que endurecía la represión a las guerrillas al incluir cambios en la figura de la asociación ilícita y mayores penas contra la tenencia de armas de guerra.

Varios diputados patalearon y el martes 22 de enero de 1974 Perón les concedió una audiencia en Olivos. El General les tendió una trampa: ordenó que prepararan una escenografía adecuada y que el encuentro fuera transmitido en directo por televisión. En el fondo de la residencia, se levantó una tarima sobre la cual fue colocado el imponente escritorio del General. Enfrente, al nivel del piso, fueron ubicadas las sillas de los diputados formando una disminuida platea.

Frente a una treintena de diputados, Perón sacó a relucir el asesinato de Rucci: “¿Y nos vamos a dejar matar? Lo mataron al secretario general de la Confederación General del Trabajo, están asesinando alevosamente y nosotros con los brazos cruzados porque no tenemos ley para reprimirlos”.

“En este momento —agregó—, con lo que acabamos de ver, en que una banda de asaltantes invoca cuestiones ideológicas o políticas para cometer un crimen, ¿ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica? ¡No! Un crimen es un crimen cualquiera sea el pensamiento o el sentimiento o la pasión que impulse al criminal”.

Tenía una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, pero advirtió a los disidentes que no iba a ahorrar ningún medio para poner en caja a la guerrilla.

“Si no tenemos la ley —señaló—, el camino será otro, y les aseguro que, puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio porque no estamos aquí de monigotes. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia”.

Dos días después, el jueves 24 de enero de 1974, renunciaron ocho diputados vinculados a Montoneros, entre ellos Carlos Kunkel. Al día siguiente, el Congreso sancionó la reforma al Código Penal y el Consejo Superior Peronista expulsó a los ocho díscolos.

Para el último round de la pelea, Montoneros planeó el acto en la Plaza de Mayo como una asamblea popular ante la cual Perón debía rendir cuentas; la consigna que llevaron era punzante: “¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, General, que está lleno de gorilas el gobierno popular?”. La gritaron con fuerza cuando Perón salió al balcón, a las cinco de la tarde. Con fastidio, Perón esperó que se callaran, luego les hizo gestos con las manos pidiendo silencio y, como no lo consiguió, se largó a hablar:

“Compañeros: hace hoy veinte años que en este mismo balcón y con un día luminoso como éste, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones

porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical, que se mantuvo a través de veinte años, pese a estos estúpidos que gritan”.

Los montoneros reaccionaron con cantos ya clásicos.

—¡Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical!

—¡Mon-to-neros, carajo! ¡Mon-to-neros, carajo!

“Decía que a través de estos veinte años, las organizaciones sindicales se han mantenido inmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años”.

Mientras los montoneros volvían a la consigna central, Perón tomó aire y asestó otra puñalada, esta vez recordando a Rucci, aunque sin nombrarlo.

“Por eso, compañeros, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones que han mantenido su fuerza orgánica y han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que todavía haya tronado el escarmiento”.

Los montoneros sintonizaron la misma frecuencia.

—¡Rucci, traidor, saludos a Vandor! ¡Rucci, traidor, saludos a Vandor!

Perón siguió elogiando a los gremios y a los trabajadores, “la columna vertebral de nuestro Movimiento”, y prometió que concretaría la reconstrucción y la liberación del país “no solamente del colonialismo que viene azotando a la República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero”.

Muchos montoneros ya no lo escuchaban porque le habían dado la espalda y se estaban yendo. El acto terminó con la mitad de la Plaza vacía y con la otra mitad, la que había sido movilizada por los sindicatos, gritando victoriosa.

—¡Ni yanquis ni marxistas, peronistas!

—Vea, vea, vea, qué cosa más bonita, Rucci dio la vida por la Patria Peronista.

El General los había bendecido en la disputa que también ellos mantenían con los montoneros.

OceanofPDF.com

Capítulo 4

UNA TRAGEDIA GRIEGA

Todo 1975 fue algo muy impresionante: una tormenta de violencia con matanzas, secuestros, bombas. Era obvio que eso no podía durar mucho tiempo.

Robert Cox, periodista, Buenos Aires, 2009.

Los decretos nos dicen: “Salgan a matar”, a aniquilar al enemigo. El Ejército sale a actuar como el Ejército sabe: a matar, a aniquilar al enemigo. Antes, la represión había estado a cargo de las fuerzas policiales.

Jorge Rafael Videla, sobre los decretos firmados por el gobierno peronista en 1975, en Campo de Mayo, 2011.

Desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Pero hicimos nuestros cálculos de guerra y nos preparamos para sufrir mil quinientas bajas en

el primer año. Si no eran mayores, estaríamos seguros de haber ganado. Pues bien: no han sido mayores.

Mario Firmenich a Gabriel García Márquez, 1977.

El 24 de marzo de 1976 fue un día “peronista”, soleado y alegre. Los argentinos se despertaron con la noticia de que los militares habían derrocado a la presidenta Isabel Perón y, aunque ahora parezca increíble, muchos recibieron con alivio el tan anunciado golpe de Estado.

El remedio resultaría peor que la enfermedad, pero en aquel momento la Argentina asistía a una “orgía de asesinatos de la derecha y la izquierda”, según una crónica titulada “El país enamorado de la muerte”, publicada a mediados de 1975 por el diario británico *Sunday Telegraph*.

Los argentinos incubaron el huevo de la serpiente durante todo 1975. No es que la violencia política comenzó allí; pensándolo bien, tal vez sea una de las marcas de origen del país; en todo caso, lo es seguro de los 70 y, como ya hemos visto, los grupos guerrilleros no le dieron tregua —en especial, el ERP— ni siquiera al propio Juan Perón en 1973, cuando volvió al país y al gobierno.

Pero, como dijo el periodista y escritor argentino Andrew Graham-Yooll, el 24 de marzo de 1976 “cayó la noche cuando el país ya estaba a oscuras”. Treinta años después, publicó *Los muertos de 1975*, una lista que “es historia; no se publica con placer ni como logro de investigación, simplemente, horriblemente, como informe de un año trágico”.

La lista de Graham-Yooll es una recopilación basada en los diarios de la época; los comunicados de las diversas organizaciones clandestinas, de derecha e izquierda, y “una variedad de publicaciones”. Como su autor señala, “está incompleta justamente por ser el trabajo de una persona”.

El resultado es escalofriante porque la nómina está hecha día por día e incluye, siempre que se sepan, el nombre, la edad, el rol, dónde murió y el grupo que lo mató. Ocupa treinta y tres páginas y el número final es de 1.065 víctimas: casi tres asesinatos por día, de izquierda, derecha, centro o sin pertenencia ideológica.

“A la distancia, puede verse en los tres años anteriores al 24 de marzo de 1976 que cada día fue un paso hacia el patíbulo”, evaluó Graham-Yooll, que en aquella época trabajaba como periodista en el *Buenos Aires Herald*.

En ese camino más bien largo, muchos argentinos fueron convenciéndose de que los militares eran la única solución frente a los problemas que el gobierno peronista no parecía capaz de resolver; la escalada de violencia en primer lugar, pero también la inflación, el desabastecimiento y la corrupción.

En realidad, los golpes eran frecuentes desde 1930, pero la novedad fue que el consenso en favor de la ruptura democrática trascendía largamente a los sectores siempre afines al “partido militar”, como recordó el periodista británico Robert Cox, precisamente director del *Buenos Aires Herald*.

“El golpe de 1966 —me contó Cox— contra el radical Arturo Illia había sido arreglado con la prensa. En 1976, eso no fue necesario: la mayoría de la gente lo esperaba y lo deseaba. Desafortunadamente, muchos argentinos estaban siempre buscando a los militares para que entraran al gobierno, ordenaran el país y dieran luego elecciones. Los civiles estaban golpeando las puertas de los cuarteles, y eso formaba parte de la tradición política del país. Pero pasaba ahora también con gente de la izquierda”.

Y señaló que “con mi mujer nos encontramos en una recepción en la embajada de Egipto con un periodista de *El Cronista Comercial*, que militaba en la izquierda, y con su esposa, que estaba embarazada. Ellos eran jóvenes y confiaban en que un gobierno militar pondría en marcha una

represión más legal que el gobierno de Isabel Perón, en el que aparecían cuerpos carbonizados, en zanjones...”.

Cox cuenta que “todo 1975 se vivió como una tragedia griega, que desembocó en el golpe. Era algo muy impresionante: una tormenta de violencia con matanzas, secuestros, bombas. Era obvio que eso no podía durar mucho tiempo. El gobierno de Isabel era terrible: había también corrupción, inflación, desabastecimiento; faltaba hasta papel higiénico. Yo igual creía que era posible llegar a las elecciones, y que había que hacerlo porque uno de los graves problemas del país era la discontinuidad democrática. El gran problema en la Argentina es que no hay paciencia”.

La violencia era la principal preocupación. En las vísperas del golpe, *La Opinión*, considerado de centroizquierda y dirigido por Jacobo Timerman, informaba que cada cinco horas ocurría un asesinato político, y cada tres estallaba una bomba. La inflación llegó al 38 por ciento en marzo de 1976 y al 98,1 por ciento acumulado en los tres primeros meses del año.

María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel o Isabelita, lucía muy debilitada, a punto de renunciar: se enfermaba seguido, el respaldo a su gobierno se había reducido a un escaso número de políticos todavía leales y a un sector del sindicalismo y, como no le encontraba la vuelta a la compleja situación, había tenido que cambiar un ministro cada veinticinco días.

Los militares marchaban, otra vez, hacia la Casa Rosada, y de eso se hablaba en todos los cafés y los teatros de la gran ciudad. En el Embassy, la actriz y cantante Susana Rinaldi describía la vida cotidiana durante el final del gobierno peronista con aguda ironía: “¿Vio, señora? Ya no hay papel higiénico en las góndolas... Total, para lo que una come...”.

Isabel Perón se quedó sin rumbo al perder al hombre fuerte de su gobierno, José López Rega, *El Brujo*, quien vivió sus meses de gloria luego de la muerte del general Juan Perón, el 1° de julio de 1974, cuando siguió firme en sus dos cargos, como ministro de Bienestar Social y secretario privado de la Presidencia.

Buena parte de los historiadores y de los periodistas consideran que fue un gobierno a la deriva por la ineptitud y la locura tanto de la viuda de Perón como de López Rega; El Brujo ejercía una influencia casi mística sobre la Presidenta debido a sus prácticas esotéricas.

Prefiero otra hipótesis: Isabel Perón y López Rega encarnaban el ala derecha del peronismo, que intentó tomar el control del Movimiento, el gobierno y el país luego de la muerte de Perón; es la tesis del economista y ex canciller Guido Di Tella en su libro *Perón-Perón*: “La principal sorpresa luego de la muerte de Perón consistió en que Isabel no asumió ni una posición decorativa ni tampoco una actitud que la situara por encima de todas las fracciones en pugna. Por el contrario, con pleno apoyo de López Rega y bajo su poderosa influencia, trató de manejar el gobierno y llevó adelante, en forma sorprendentemente enérgica, un programa de derecha, de línea muy autoritaria, que alarmó incluso a las fuerzas tradicionales”.

Di Tella enfatizó en ese libro que el plan tenía muy pocas posibilidades de éxito porque el peronismo era un partido de base sindical y porque rompía con los sectores que aún respaldaban al gobierno, como los pequeños y medianos empresarios y los partidos chicos de la coalición. Además, las Fuerzas Armadas debían adoptar un “apoyo tácito” al gobierno y eso era casi imposible de lograr.

“El programa —explicó— consistía en cinco objetivos básicos, tal cual lo explicitó el propio López Rega a los jefes militares. El primero era el compromiso de un nuevo y decisivo esfuerzo por acabar con la subversión,

consumado mediante el empleo de grupos civiles paramilitares, conocidos como la Triple A, ejecutores del ‘trabajo sucio’, que evitaba a los militares una intervención directa. El segundo objetivo era la eliminación de la infiltración izquierdista en la educación en general y en la Universidad de Buenos Aires en particular. El tercer objetivo consistía en poner fin a las políticas económicas antiempresarias, relativamente nacionales y reformistas. Tenía que operarse un vuelco hacia el capital extranjero, la economía de mercado y la confianza en el capital privado como fuente de inversiones y desarrollo. Se rebajarían los salarios y se reestablecería la disciplina industrial. El cuarto objetivo era el sometimiento de los dirigentes sindicales. Esta fue la principal razón de la intensidad de las medidas económicas y también de la intensidad de la reacción que provocaron. El quinto objetivo, sumamente importante, consistió en pedir a los militares que, como compensación, abandonaran su neutralidad política y pasaran a una actitud de apoyo tácito. Esto se logró en mayo de 1975, aunque fue solo por unos pocos meses, con la designación de un nuevo comandante en jefe, el general Alberto Numa Laplane”.

Según Di Tella, este plan podría haber sido compartido “por la mayoría de los sectores de centro derecha. Pero los métodos empleados, las connotaciones fascistas y la intensidad de las medidas suscitaron objeciones, incluso en algunos de esos grupos. Algunas excentricidades personales de López Rega contribuyeron a fortalecer una imagen general de escasa confiabilidad, como sus inclinaciones espiritistas o su apoyo a grupos católicos disidentes. Por añadidura, el grupo de Isabel estaba asociado a un manejo sumamente desordenado y arbitrario de sus áreas de influencia”.

López Rega empezó a caer cuando uno de sus protegidos, el flamante ministro de Economía, Celestino Rodrigo, lanzó el 4 de junio de 1975 un

drástico plan de ajuste que pasó a la historia como “Rodrigazo”; preveía una devaluación del 160 por ciento para el dólar comercial y del ciento por ciento para el dólar financiero, entre otras medidas.

El impacto en el bolsillo de la gente fue dramático: la nafta subió el 172,7 por ciento; el transporte, el ciento por ciento; la leche, el 65 por ciento; los medicamentos, el 70 por ciento, y se licuaron los ahorros en los bancos.

Los sindicatos, encabezados por el metalúrgico Lorenzo Miguel y el textil Casildo Herreras, protestaron con movilizaciones en varias ciudades, que desembocaron en una huelga general de dos días, inédita para una gestión peronista, y fueron a la Plaza de Mayo a pedir la cabeza de López Rega.

Los peronistas moderados y los jefes de las Fuerzas Armadas ayudaron a la caída de López Rega, que fue decidida en una reunión organizada por el santafesino Ángel Robledo, un ex ministro de Defensa recordado por su habilidad política y su ironía. El encuentro se realizó en el quinto piso de un edificio del Bajo porteño, en la sede de Mercedes-Benz. “Hubo coincidencia en que López Rega debía ser desplazado por una razón fundamental: nos parecía que estaba loco y que era muy peligroso; era un personaje nefasto para la Presidenta, que era manejada por ese señor como luego sería manejada por los gremios”, me contó antes de morir el brigadier Héctor Fautario, que era el jefe de la Fuerza Aérea.

Precisamente, Fautario fue elegido para acercar el mensaje a la Presidenta porque sería el anfitrión de la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, el 7 de julio, y, como tal, se sentaría a su lado.

—Mire señora, me gustaría decirle algo en lo que todos los comandantes estamos de acuerdo: sería prudente que el señor López Rega tomara distancia del gobierno y del país —soltó Fautario aquella noche, luego del primer plato.

—¿Pero ustedes me están pidiendo que lo saque del gobierno?

—Sí, señora.

—Pero, brigadier, yo no puedo hacer eso.

—Esto es algo que me trasciende a mí y a mi fuerza; yo solo he sido el portador del mensaje. Creo, señora, que usted no tiene otra opción.

—Bueno, déjeme pensarlo.

Un par de días después, Fautario recibió la respuesta. Isabelita había comprendido que ya no podía sostener a López Rega.

El 11 de julio, la Presidenta aceptó la renuncia del misterioso personaje que se había ganado su confianza hacía una década.

Ocho días después, López Rega debió abandonar el país aunque salió por la puerta grande, con un pasaporte diplomático que lo acreditaba como embajador ante los organismos internacionales en Europa. Se fue a vivir a la residencia de Perón en Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid, que había sido escriturada a nombre de Isabel.

El secretario técnico de la Presidencia, Julio González, tuvo que preparar los decretos para facilitar el viaje y se los llevó a la viuda de Perón para que los firmara.

“Isabel —me dijo González— estaba desfalleciente; su rostro revelaba la angustia de los acontecimientos, pero en ningún momento lloró. Firmó y me indicó que esperase a López Rega en la biblioteca. Al ver que mi ayudante llevaba el libro de registro de protocolo, López Rega me pidió si podía elegir el número de sus decretos. Abrimos el libro de registro y de entre todos los números no utilizados, el ex ministro eligió uno que le satisfacía según una apreciación cabalística que hizo en el momento. ‘Mi sucesor va a ser Roballos’, dijo con voz displicente. Yo sonreí y crucé la mirada con mi ayudante. Nos admiraba que en tales momentos López Rega tuviera

semejante humor. Horas después, supe que el pretendido chiste era una realidad: Rodolfo Roballos juraría como ministro”.

La salida del país de López Rega fue un golpe duro, decisivo, para ella. “Entonces, Isabel y yo quedamos solos frente al país”, afirmó González, quien se llevaba muy bien con López Rega y lo reemplazó como secretario privado manteniendo su cargo anterior.

El día de la partida de López Rega, Isabel saludó en Olivos a una delegación de mujeres peronistas. Pesaba 42 kilos. Aquel domingo, ni siquiera asistió a misa en la capilla de la residencia de Olivos. El lunes se mostró muy fría en la entrevista con Lorenzo Miguel y los sindicalistas, los grandes ganadores de la pulseada por el ajuste frustrado, que le habían llevado una propuesta económica alternativa que terminaría siendo aceptada por la debilitada mandataria. Pero aquel lunes no siguió con su agenda alegando una indisposición: había sufrido tres lipotimias en tres días; se recluyó en Olivos y no apareció por la Casa Rosada durante quince días.

Un persistente cuadro de depresión, insomnio, cansancio y disturbios gastrointestinales la mantuvo en la residencia de Olivos durante largos periodos en los que permanecía en la cama. Las reuniones de gabinete se hacían en su dormitorio. El país parecía a la deriva, sin un vértice que supiera qué hacer.

Lapidario aunque exacto fue el cable confidencial del 10 de septiembre de 1975 en el que el embajador Robert Hill informó al gobierno de Estados Unidos que “el poder político real no reside más en la Presidenta. A esta altura, si se queda como Presidenta o no es una cuestión casi de interés académico. Hay un vacío de poder en el centro y no será ella quien lo llene. El problema, sin embargo, es que la señora de Perón puede no darse cuenta de que el juego está terminado”.

Curiosamente, la evaluación de Montoneros coincidía con la del embajador Hill, al que vinculaba con la CIA, la central de inteligencia de Estados Unidos, y sus movidas golpistas en la región. También para ellos el gobierno de la viuda de Perón estaba acabado.

No solo eso: los montoneros se pusieron contentos con esa conclusión porque en aquel momento tenían como “objetivo político principal el deterioro del gobierno de Isabel Martínez”, que, un año después del retorno a la lucha armada —o “a la resistencia”, según ellos—, “se ha cumplido”.

¿Por qué querían que a la viuda del General le fuera mal? Para “impedir que el imperialismo pueda estabilizar su política bajo una cobertura peronista, con la secuela de confusión desorganizada de masas que eso hubiera acarreado”.

Todo eso lo escribieron luego, en un curso de formación lanzado en el exilio en 1977, en homenaje a Julio Roqué, el asesino de José Rucci. Matar y morir: el jefe guerrillero había muerto en Haedo, en el Gran Buenos Aires, donde tomó la pastilla de cianuro que ya llevaban encima los montoneros para evitar que los capturaran vivos, y luego de resistir él solo durante varias horas el asedio de un pelotón de la Marina.

Pero el fracaso del gobierno peronista en 1975 no estaba siendo aprovechado por ellos sino por los militares, como admitieron en la cuarta clase de aquel curso: “No es aún el pueblo organizado el que avanza sobre el poder político sino las Fuerzas Armadas, que ante el fracaso del gobierno, se conciben como la única fuerza política y militar capaz de aniquilar a la subversión y superar la crisis económica”.

Por ese motivo deducían el futuro más probable: “La agudización de la lucha armada y, a nivel de poder del Estado, el avance militar directo”, el golpe de Estado.

En octubre de 1975, Mario Firmenich y la cúpula guerrillera tenían información calificada y estaban convencidos de que el golpe se daría en marzo de 1976, pero no hicieron nada para impedirlo. Al contrario, el derrocamiento de Isabel Perón era visto con entusiasmo militante; creían dos cosas:

- La revolución socialista y la liberación nacional se definirían en un choque militar con las Fuerzas Armadas que sería largo y cruento; una “guerra nacional, popular y prolongada”.
- Caído el gobierno de Isabelita, el ajuste económico y la represión militar posteriores al golpe de Estado harían que el pueblo se pusiera del lado de los montoneros, que portaban la ideología correcta, el socialismo, y defendían los intereses de los trabajadores.

En síntesis, el golpe militar no haría más que “acelerar las contradicciones” —como se decía en los 70— entre el Ejército y sus mandantes —el imperialismo yanqui y la oligarquía criolla— por un lado, y el pueblo y sus verdaderos representantes, la guerrilla, por el otro.

Además, el 5 de octubre de 1975, cuando debutó el Ejército Montonero para enfrentar al “ejército opresor, gorila”, hacía casi dos años que Firmenich sostenía que el golpe militar era inevitable y que, si bien la guerrilla no tendría la fuerza suficiente para impedirlo, podría emprender sí una resistencia gloriosa contra la dictadura que derivaría luego en una contraofensiva victoriosa. Lo explicó en la charla con dirigentes y simpatizantes montoneros que ya vimos: “Aquí hay que hacer un cálculo estratégico: un irregular, un guerrillero, equivale, cálculo mínimo, a diez soldados regulares; el país tiene alrededor de doscientos mil soldados regulares, entre pitos y flautas, en las distintas fuerzas. Nosotros para

equilibrar eso precisamos un mínimo de veinte mil hombres armados. Estamos lejos. Con menos y una parte de las Fuerzas Armadas volcada a nuestro favor a lo mejor se lograría. Pero precisamos seguro un mínimo de diez mil y de ahí para arriba. Lograr eso en seis meses es imposible. Lograrlo en dos años es más o menos posible. Lo más probable, de todos modos, es que llegado el momento de fractura, debamos otra vez replegarnos a la defensiva estratégica”.

En aquella charla de noviembre de 1973, el número 1 de Montoneros agregó que, “si bien contamos con el aparato del Estado, la situación de nuestras fuerzas nos imposibilita la ofensiva”. Pero aunque no estaban en condiciones de tomar el poder, se mostró seguro de que, llegado el momento, tendrían “una buena fuerza defensiva como para acorralar a corto plazo al enemigo”.

Firmenich seguía confiando en esa dialéctica —ofensiva militar, resistencia guerrillera y contraofensiva montonera— en 1977, un año después del golpe, cuando se encontró por casualidad con el escritor y periodista Gabriel García Márquez en un vuelo, “a diez mil metros de altura y en mitad del océano Atlántico”, según describió el Nobel. Firmenich tenía 28 años y a García Márquez le impresionó como “un gato enorme”, con “una gran lucidez política” aunque “fundamentalmente un guerrero”.

García Márquez aprovechó para hacerle una entrevista en la que Firmenich le dijo: “Desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Pero hicimos nuestros cálculos de guerra y nos preparamos para sufrir mil quinientas bajas en el primer año. Si no eran mayores, estaríamos seguros de haber ganado. Pues bien: no han sido mayores. En cambio, la dictadura está agotada, sin salida,

y nosotros tenemos un gran prestigio entre las masas y somos una opción segura para el futuro inmediato. Este año marcará el fin de la campaña ofensiva de la dictadura, y se desarrollarán las condiciones para la contraofensiva final”.

El periodista y ex montonero Juan Gasparini confirmó que la cúpula de Montoneros conocía cuándo y cómo sería el golpe porque “el hijo de un alto jefe del Ejército encuadrado en el servicio de inteligencia montonero a cargo del *Profesor Neurus* [el periodista y escritor Rodolfo Walsh] había sacado copia del borrador de la ‘Orden de Batalla 24 de marzo’, guardada en la caja fuerte de su padre”.

Gasparini reveló que en la última cena en Buenos Aires antes de escapar al exilio —a Roma, entre la Navidad y el Año Nuevo de 1976— Firmenich contó que los principales jefes montoneros tomaron la decisión de abandonar el país en la reunión de la Conducción Nacional celebrada en Buenos Aires el sábado 4 de octubre de 1975.

“No era sino el emergente —dijo Firmenich, según Gasparini— de haber apostado al golpe para permitir una más clara visualización del enemigo por el pueblo, al que el pseudoperonismo de Isabel podía soliviantar a la división. En su opinión, representaba el correlato de la polarización de fuerzas que promovía la dictadura, de la aceleración de las contradicciones que debían aproximar la victoria popular. Era el precio del triunfo. Si la guerrilla quería alzarse con los laureles, debía mantener el acoso. El costo era la sangre”.

Gasparini agregó: “Se creía que si se salvaban unos cien montoneros en el exterior y sobrevivían otros tantos adentro bastaría para recomenzar una vez liquidado el ‘Proceso’ [la dictadura]. La factura que los ‘montos’ pasarían entonces a la Nación [los caídos] les permitiría renacer con renovado brío”.

En aquel encuentro de octubre, la cúpula guerrillera aprobó el Código de Justicia Penal Revolucionario, un instrumento adecuado para un ejército que se preparaba para una guerra prolongada; era el fruto, uno más, de una visión militarista, que prefería las armas a la política.

Los montoneros ya usaban un Código de Justicia Militar desde 1972, pero el nuevo reglamento era más completo, con cincuenta y dos artículos que se referían a los delitos, las penas y los juicios revolucionarios. Prácticamente, todos los aspectos de la vida de un guerrillero pasaban a estar regulados: cualquier oficial o aspirante a oficial podía ser juzgado por diecisiete delitos, desde traición y desertión hasta acumulación de poder y deslealtad, que castigaba “a quienes tengan relaciones sexuales al margen de la pareja constituida”.

Las penas iban de degradación y expulsión a prisión y fusilamiento. El nuevo código pronto fue conocido como “el reglamento montonero” y castigaba con el delito de “delación” a los guerrilleros que eran torturados y entregaban algún dato perjudicial para sus compañeros o la Organización. La consigna era clara: la tortura no era un problema de resistencia física sino de fortaleza ideológica; se podía resistir a los tormentos.

También la guerrilla trotskista guevarista, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), tenía información precisa sobre cuándo sería el golpe de Estado y lo recibió con entusiasmo: pensaba que permitiría el “comienzo de un proceso de guerra civil abierta que significa un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria”, como escribió su líder, Mario Santucho, la misma mañana del 24 de marzo de 1976. O como señaló en su autobiografía Enrique Gorriarán Merlo: “Habíamos obtenido la información de que el golpe estaba en plena preparación a través de Chacho Perrota, dueño de *El Cronista Comercial* y miembro del aparato de inteligencia del ERP. El 24 de marzo se produjo el golpe militar; hicimos una evaluación y

llegamos a la conclusión de que el advenimiento de una dictadura militar iba a conllevar una exacerbación de la resistencia contra esa dictadura”.

El domingo 5 de octubre, el debut del Ejército Montonero y la matanza de veintiocho jóvenes tomaron a todos por sorpresa. Isabel Perón estaba de licencia por enfermedad, en un chalet de la Fuerza Aérea en las sierras cordobesas, y había ido a misa en la iglesia de Santa Catalina, una maravilla del barroco colonial. El presidente interino era el senador Ítalo Argentino Luder, que también asistió a misa pero en la capilla de Olivos, junto a su familia y algunos amigos.

Hacía tres meses, desde que había sido elegido como presidente provisional del Senado, que el nombre de Luder aparecía como el más probable sucesor de la viuda de Perón, como el “regente” que permitiría que la crisis del gobierno isabelino no derivara en un golpe militar y se pudiera llegar a las elecciones del año siguiente.

Luder disfrutaba de ese consenso que se iba gestando alrededor de su atildada figura, pero otros temas, más triviales, preocupaban aquel domingo al presidente interino y su pequeño cortejo. Uno de ellos era cómo le iría a un comprovinciano suyo, Carlos Alberto Reutemann, *El Lole*, en el Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos; el austríaco Niki Lauda ya se había coronado campeón, pero Reutemann podía ser subcampeón por primera vez en su vida, aunque tenía un duro rival en el brasileño Emerson Fittipaldi. La carrera comenzaba a las 16, como la quinta fecha del Campeonato Nacional de fútbol, en la que River Plate buscaba cerrar un año para la historia de la mano de don Ángel Labruna.

La tapa de los diarios del lunes no fue la Fórmula 1 ni el fútbol ni, mucho menos, el fervor religioso de Isabelita y Luder, sino el cruento ataque de

Montoneros en el que, además de los veinticuatro jóvenes que murieron en el cuartel, la guerrilla fusiló a un policía durante el copamiento del aeropuerto.

Y, cuando todo había pasado, los militares mataron a tres vecinos que no habían tenido nada que ver. Los atacantes ya habían huido de la provincia en un avión de Aerolíneas Argentinas y en un Cessna 182, que aterrizó en Corrientes.

Todos jóvenes, todos peronistas, de uno y otro lado; aun los tres vecinos.

“Fallido golpe terrorista en Formosa: 27 muertos”, tituló *Clarín* en la tapa. “Sangriento intento extremista en Formosa”, prefirió *La Nación*. “A sangre y fuego frustróse el golpe extremista de Formosa”, eligió el vespertino *La Razón*.

La noticia continuó ocupando la primera plana de los diarios nacionales el día siguiente. El martes 7 de octubre, *La Opinión* le dedicó toda su tapa, con una segunda nota, “El país en guerra”, ilustrada con un mapa de los “episodios terroristas” del último fin de semana en nueve lugares diferentes del país. “Si algo faltaba para corroborarlo, el ataque de Formosa lo ha demostrado: el país está en guerra; todo el país, a lo largo y a lo ancho de su territorio”, afirmó el diario de Timerman. *La Opinión* colocó también en tapa un recuadro, “Una sola pregunta”, que dio mucho que hablar ya que afirmaba que, si bien la economía era un caos, “cada argentino —honesto— comprueba que el principal peligro que lo acecha es la delincuencia subversiva”. Y planteaba que “cada argentino —honesto— se formula en estos días, una pregunta: ¿Puede el gobierno organizar al país para la lucha contra la subversión y dejar de lado sus rencillas internas?”

Todas las fuerzas políticas condenaron el asalto al cuartel, desde *El Caudillo*, la revista de la ultraderecha peronista, hasta *Nuestra Palabra*, el

órgano oficial del Partido Comunista, que criticó “otra infausta aventura del extremismo pequeño-burgués”.

Fue la primera vez que Montoneros puso en la mira a un cuartel del Ejército. Hasta ese día, ese tipo de incursiones había sido protagonizado por el ERP. Antes, entre el 22 y el 28 de agosto de 1975, la guerrilla peronista había atentado contra la fragata *Santísima Trinidad* y un Hércules C-130, en sendos ataques contra la Armada y la Fuerza Aérea.

También los montoneros empujaban a los militares al golpe de Estado. Ya no tenía sentido resguardar sus vínculos en las Fuerzas Armadas, en especial en el Ejército, que se remontaban a incluso antes de su aparición pública, con el secuestro y la muerte del general Pedro Aramburu, en 1970.

Del otro lado, el ataque convenció a los oficiales del Ejército de que no había diferencias entre la guerrilla peronista y el ERP, y que ambos debían ser tratados de la misma manera.

Videla me contó cómo veían en el Ejército a uno y otro grupo guerrillero antes de la Operación Primicia: “Por su preparación militar e ideológica, el ERP era más enemigo que Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el que había nacido. El nacionalismo de Montoneros estaba dado desde el principio; por ejemplo, el copamiento de la localidad de La Calera, en Córdoba, en 1970, fue protagonizado por jóvenes del Liceo Militar General Paz, hijos de familias acomodadas, conservadoras. El ERP era otra cosa, sin sentido nacional”.

Luego del golpe, el Ejército se especializó en la represión al ERP y la Armada, a Montoneros debido, entre otros argumentos, al recelo del almirante Emilio Massera y sus colaboradores por los estrechos vínculos que la guerrilla peronista había desarrollado con algunos jefes del Ejército. Videla admitió esa causa, pero enfatizó una razón “funcional”: “Hubo un

acuerdo oficial a nivel de Junta Militar para repartir un poco los esfuerzos contra la subversión. La Armada se concentró en Montoneros y el Ejército, en el ERP. No hubo una razón específica porque el Ejército tuvo problemas con ambos; en Tucumán actuaba el ERP, pero con apoyo de Montoneros. Fue más funcional así, aunque también es cierto que el Ejército distinguía entre Montoneros, cuyos orígenes nacionalistas rescataba, y el ERP, que no tenía nada de eso. También pesaba el antecedente del Operativo Dorrego [tareas de ayuda social en la provincia de Buenos Aires] entre el Ejército, durante la comandancia del general Jorge Carcagno, y la Juventud Peronista”.

Según expresaron en la revista *Evita Montonera* y en el “Parte de Guerra” del lunes 6 de octubre, los objetivos del ataque en Formosa fueron “recuperar armamento”, unos doscientos fusiles; marcar el comienzo de la creación de “un Ejército regular” para “la toma del poder del Pueblo”, y humillar al Ejército, mojarle la oreja y revelar la vulnerabilidad del poder militar con el copamiento de un cuartel en una provincia periférica y fronteriza. También querían provocar una reacción autoritaria en los militares, “fascistizar al Ejército”, como decía un periodista que integraba Montoneros; empujarlos al golpe y a la represión.

Aquel lunes, mientras la opinión pública y los medios seguían conmocionados por el audaz ataque, Luder se reunió con su ministro del Interior, Ángel Robledo, en la Casa Rosada: decidieron impulsar tres decretos que ya venían trabajando con los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Luder convocó al mediodía a todo el gabinete y a los tres comandantes; Videla había viajado a Formosa a visitar el regimiento atacado y en su lugar

fue el jefe de su Estado Mayor, general Roberto Viola. “Se ponen a consideración las firmas de estos decretos para terminar con la subversión”, señaló Luder luego de que el ministro de Defensa, Tomás Vottero, los leyera. Nadie dijo nada y los decretos quedaron aprobados por todo el gabinete.

No fue la primera vez ni sería la última: la izquierda colaboraba con la derecha. Los decretos ordenaron a las Fuerzas Armadas “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Los decretos creaban dos consejos para dirigir la lucha contra la guerrilla, en los que participaban la Presidenta y sus ministros, pero el gobierno estaba tan debilitado que sucedió lo que podía preverse: la lucha quedó en manos de los jefes militares, que ya tenían todo preparado y comenzaron a actuar rápidamente.

La escalada guerrillera apuntaba al corazón del gobierno peronista, al “monopolio de la violencia física legítima”, que caracteriza a todo Estado moderno y le permite cumplir con su función básica, que es mantener el orden público y cuidar la seguridad de los ciudadanos. Pero los funcionarios del peronismo ya no podían hacerlo sino que, en la práctica, pasaron a depender de las Fuerzas Armadas. Casi un certificado de defunción para un régimen democrático.

Los decretos fueron enviados al Congreso, que los ratificó. Carlos Ruckauf, en aquel momento un joven ministro de Trabajo, me dijo que Luder les explicó que también “se iban a mandar dos proyectos de ley que explicaban la forma de aplicar los decretos y cómo iba a funcionar un mecanismo de control por parte del poder político sobre las fuerzas militares, que obviamente nunca se ejecutó: los tipos hacían lo que querían e inclusive detenían a compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba”.

Era lo que los militares venían reclamando en las últimas semanas, me aseguró Videla, quien fue más allá e interpretó que las desapariciones de personas, que ya ocurrían cada tanto pero aumentaron drásticamente a partir de esos decretos, quedaron avaladas por esas normas.

“Las desapariciones —aseguró— se dan luego de los decretos de Luder, que nos permiten entrar en guerra contra la subversión, que nos dan licencia para matar; esos decretos nos dicen: ‘Salgan a matar’, a aniquilar al enemigo. El Ejército sale a actuar como el Ejército sabe: a matar, a aniquilar al enemigo. Antes, la represión había estado a cargo de las fuerzas policiales”.

“El término ‘aniquilar’ —agregó— era la llave para esa licencia para matar, previsto en el Código Militar y en el decreto 2772. Un término que había sido convalidado por Perón, en la carta a los jefes del regimiento de Azul luego de la agresión del ERP, donde utilizó un verbo aún más grave, como ‘exterminar’, que no figura en el Código Militar; por el diputado Alberto Stecco, que en el homenaje a José Rucci habló de ‘matarlos como a ratas’, y por Vottero, que habló de ‘perseguirlos hasta el exterminio total’”.

Pero tanto Luder como Ruckauf y el ex ministro de Economía, Antonio Cafiero, negaron esa interpretación del verbo “aniquilar” en el juicio a Videla y a los miembros de las tres primeras juntas militares, el 22 de abril de 1985.

Luder precisó que el decreto 2772 aludía a “inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significaba aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal. Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley”.

La Justicia respaldó los argumentos de Luder, y Videla fue destituido y condenado a prisión perpetua, al igual que Massera. En 2012, un año antes de morir, el ex dictador seguía enfrascado en una discusión imaginaria con el ex senador —ya fallecido en aquel momento— sobre el significado de esa palabra: “Él dijo que no quería decir matar a personas. Pero ¿cómo se puede aniquilar el accionar sin aniquilar al accionante?”

Luego del tan mentado decreto, el viernes 10 de octubre de 1975, el embajador Hill informó a su gobierno que esa norma daba “a los militares la autoridad para tomar a su cargo la lucha antisubversiva y para tomar las acciones necesarias para aniquilar a los subversivos”. Y concluyó: “Las Fuerzas Armadas tienen ahora la autoridad que han buscado durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los terroristas, la cual hasta este momento ha sido en gran medida manejada (o mal manejada) por la Policía Federal”.

Los decretos fueron bajados a la lucha concreta en forma muy rápida a través de distintas directivas que, por ejemplo, dividían el país en cinco zonas, diecinueve subzonas y ciento diecisiete áreas, y destacaban que “el esfuerzo principal de la ofensiva será llevado sobre el eje Tucumán-Córdoba-Santa Fe-Rosario-Capital Federal-La Plata”.

Una de esas directivas planteaba varios objetivos intermedios hasta llegar a “aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977”.

Videla dijo que todo salió tan rápido luego de la Operación Primicia porque el Ejército había preparado hasta los tres decretos, ya que venía trabajando sobre “la guerra interna” como hipótesis de conflicto desde la comandancia del general Juan Carlos Onganía, que asumió en 1962. Y que incluso la división del territorio nacional en zonas “estaba basada en planes ya existentes”.

“Nosotros —afirmó— ya veíamos lo que se venía y en la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor del Ejército ya teníamos los decretos preparados con sus respectivas argumentaciones, junto con la Directiva Número 1 del Consejo de Defensa y la Directiva 404, que es la Orden de Operaciones firmada por mí. Es mi orden para aniquilar la subversión. Es genérica; una orden escrita siempre es genérica. La concepción de la operación estaba basada en planes ya existentes, como la división del país en zonas, que correspondían a los cuerpos; subzonas, a las brigadas; áreas, a unidades de combate como los regimientos, y subáreas, a las unidades independientes, más chicas. Todo eso ya estaba escrito. El Ejército tenía desde los años de Onganía el Plan de Capacidades, que contenía las previsiones sobre lo que se podía hacer con lo que se disponía ante la ocurrencia de alguna de las hipótesis de conflicto. Eran cinco las hipótesis de conflicto, la quinta era la guerra interna, una explosión subversiva que obligara al Ejército a intervenir al ser superadas las Fuerzas de Seguridad y policiales”.

Los militares habían adquirido ya tanta autonomía con relación al poder político que se preparaban para una represión inédita. “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”, afirmó Videla el 23 de octubre de 1975 en Montevideo, en la Undécima Conferencia de Ejércitos Americanos.

Las palabras suelen convertirse en acciones.

Capítulo 5

PASO A PASO

La decisión sobre el golpe toma un impulso decisivo cuando el senador Luder nos hace saber que él no aceptaba reemplazar a la Presidente. Pensamos con Massera: “Acá se acaba la línea legal; esto está perdido”.

Videla sobre el resultado de una reunión del 10 de octubre de 1975, en Campo de Mayo, 2011.

Es inminente el final. Todo está dicho.

Título principal del vespertino *La Razón* del 23 de marzo de 1976.

Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales.

Videla en la cárcel de Campo de Mayo, 2011.

“¡Se van, se van, y nunca volverán!” Apenas tres años después de aquel grito popular que los había devuelto a los cuarteles, los militares retornaron

al poder, a la vista de todos e impulsados por diversas fuerzas, que incluyeron al Partido Comunista. En la Argentina hubo muchos golpes de Estado, pero el último fue el más organizado de la historia.

La conspiración comenzó nueve meses antes si se parte de las primeras conversaciones que Jorge Rafael Videla admitió haber tenido con civiles que ansiaban conocer al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y que también tenían relación con Emilio Eduardo Massera. O siete meses si contamos desde que esos contactos se formalizaron, cuando Videla asumió como comandante en jefe del Ejército. O poco más de cinco meses si se considera el momento en el que el golpe adquirió el impulso decisivo, irrefrenable, luego del ataque de Montoneros al cuartel de Formosa.

En todo caso, entre enero y febrero de 1976 la suerte del gobierno ya estaba echada no solo para los militares, quienes en todas las unidades del país ya confeccionaban las listas de personas que serían detenidas o secuestradas luego del Día D, los llamados “blancos” u “objetivos”.

El Ejército no estaba solo en la conspiración y hasta es probable que la idea del golpe haya germinado primero en la cabeza de Massera, que tenía un claro proyecto presidencial desde hacía tiempo, que iba más allá de la plataforma de poder más bien escueta que podía ofrecerle la Armada.

En la serie de entrevistas que derivaron en mi libro *Disposición Final*, Videla recordó que, a pesar de tantas reuniones con diversos grupos de civiles, el golpe terminó siendo criticado por algunos conspicuos miembros del llamado “partido militar”, entre ellos el patriarca liberal Álvaro Alsogaray.

Alsogaray, que tenía bastante influencia en algunos círculos, no era partidario de un golpe a solo seis meses de las elecciones: “Decía que los militares debíamos esperar a que el desgobierno se profundizara aún más

para que el peronismo fuera expulsado del gobierno por el malhumor popular”, señaló Videla.

Frente a críticas como la de Alsogaray y si, como ya vimos, Videla aseguraba que ya no necesitaban de un golpe para luchar contra las guerrillas luego de los decretos de octubre de 1975, ¿por qué entonces los militares con él a la cabeza derrocaron al gobierno constitucional?

“Pensábamos —me dijo— que si el golpe no se hacía en aquella época, el problema era el desborde en las Fuerzas Armadas: que nos pasaran por arriba los de abajo. Y eso era el anarquismo total, algo que no podíamos permitir. En concreto, en el Ejército el riesgo era que nos pasara por encima algún coronel nacionalista. Mal que mal, nosotros teníamos algo preparado; ideas y proyectos sobre los cuales ya veníamos trabajando. Además, se trataba de ocupar el vacío de poder existente para que no lo llenaran la subversión y el marxismo, con el objetivo final de salvar las instituciones republicanas, circunstancialmente paralizadas por el desgobierno reinante”.

Los peronistas, en general, insisten en que no había tal vacío de poder, que esa mención recurrente era solo una excusa del golpismo, de la cúpula del Ejército en primer lugar, y que, en todo caso, apenas se trataba de esperar unos meses hasta llegar a los comicios, que ya habían sido adelantados a pedido de la oposición. Por el contrario, Videla está convencido de que el golpe “fue una intervención plenamente justificada desde el punto de vista político”.

“No era —precisó su punto de vista— una situación aguantable: los políticos incitaban, los empresarios también; los diarios predecían el golpe. La Presidente no estaba en condiciones de gobernar, había un enjambre de intereses privados y corporativos que no la dejaban. El gobierno estaba muerto”.

En la historia argentina, cada golpe militar fue distinto; al 24 de marzo de 1976, por varias razones que incluyen la crisis del gobierno constitucional, la falta de liderazgo de Isabelita, la ineficacia de los políticos, el desafío armado de los grupos guerrilleros y el terror de la gente, las Fuerzas Armadas habían acumulado un tremendo poder en apenas tres años; fue el momento de mayor autonomía de los militares con relación a la política y la sociedad.

Tanto fue así que dieron el golpe cuando quisieron e impusieron una solución fundacional, expresada ya en el nombre elegido para su gobierno: Proceso de Reorganización Nacional. Una salida autoritaria, por la fuerza, de arriba hacia abajo, no solo en el plano de la lucha contra la guerrilla: pretendían cambiar a toda la sociedad argentina; querían moldearla como si fuera de plastilina para liberarla de las “plagas” que, según los militares, impedían su desarrollo. Sin el consenso de nadie.

“Nuestro objetivo —sostuvo Videla— era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo económico, un cambio bastante radical; a la sociedad había que disciplinarla para que fuera más eficiente. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.

Es cierto que el consenso civil que se había formado no era en favor del tipo de dictadura que vino después, en especial de la sangrienta y masiva violación a los derechos humanos, sino de un golpe más tradicional, en el que los militares estuvieran poco tiempo en el gobierno; el suficiente para solucionar —dentro de la ley o más o menos dentro de la ley— el problema que había llevado a la crisis —la violencia política— y llamaran luego a elecciones.

Así habían sido, en general, los golpes en América latina y en la Argentina; un “modelo moderador” del sistema político, según el conocido concepto del politólogo estadounidense Alfred Stepan. Pero Stepan advertía que esa pauta dependía de que los militares aceptaran, en primer lugar, “la legitimidad y viabilidad de la forma parlamentaria de gobierno”, y, en segundo lugar, de “su convencimiento de que, en comparación con los civiles, es relativamente baja la capacidad de mando de los militares en la esfera política”.

El problema era que ese tipo de golpes ya no resultaba posible en la Argentina, donde los militares habían adquirido tal autonomía que se consideraban más capacitados que los civiles para solucionar de una vez por todas los grandes males del país.

Como vimos, tanto Montoneros como el Ejército Revolucionario del Pueblo empujaban hacia el golpe, pero creían que la represión no sería mayor a la que ya había con Isabel Perón y los escuadrones de la muerte, y que esa violencia centralizada por los militares haría que el pueblo saliera a la calle y terminara apoyando a las guerrillas.

Roberto Perdía, el número 2 de Montoneros, me dijo que “nos tomó por sorpresa la magnitud de la represión. ¿Quién podía prever eso? Había habido desaparecidos, detenidos que se quedaban en la tortura y hacían desaparecer el cuerpo, pero nunca esa política”. Y contó que “tuvimos información de que los militares preparaban un golpe por un soldado nuestro que sacó un documento del cesto de papeles, lo analizamos y nos llamó la atención una frase que había allí: ‘detenciones especiales’, creo que era. La analizamos durante varios días y entendimos que se refería a abrir cárceles en los regimientos para cortar esos lazos de solidaridad que espontáneamente se habían dado entre los compañeros presos y gente de las ciudades durante la dictadura de Lanusse”.

La mayoría de los políticos también creía que la represión no sería tan violenta, como recordó Julio Bárbaro, que era diputado: “Todos creíamos que el golpe sería como los anteriores, no pensábamos que habría ese salvajismo. Juan Manuel Abal Medina, por ejemplo, no se quería esconder, pensaba que no lo irían a buscar. ¡Cómo íbamos a prever la violencia de los militares si en octubre de 1973 habían estado codo a codo con los montoneros en el Operativo Dorrego!”.

La violencia de la represión también tomó por sorpresa a Antonio Cafiero, que ya había dejado el Ministerio de Economía y había sido designado embajador ante el Vaticano. Antes de viajar, fue a ver al representante del Papa en Buenos Aires, Pío Laghi.

—Dígame, monseñor, ¿qué noticias tiene usted de esto que se rumorea?
—le preguntó.

—No le haga caso, son todas suposiciones falsas.

“¡Me lo dijo a mí Pío Laghi! —recordó—. No sé si me lo dijo para engañarme, para reírse de mí o porque pensaba que el golpe era imposible. Llegué a Roma el 22 de marzo y fui a la sede la embajada, en el Palazzo Patrizzi. Llegó el golpe. Yo no había presentado las cartas credenciales, pero pedí una audiencia con el Papa y, ante mi alegría, Paulo VI decide recibirme. Fue muy breve la audiencia, pero al retirarme, el Papa me dice: ‘No se preocupe, los pueblos siempre vencen’. Yo pensé: ‘Debe saber algo’, y me quise quedar dos minutos más pero me dio una medallita y me tuve que ir. Pensaba que sería un golpe como los otros y que luego llamarían a elecciones, y decidí volver a la Argentina, donde tenía mi familia y mis amigos. Me detuvieron directamente en el aeropuerto de Ezeiza, y pasé de la alfombra de diez centímetros del Palazzo Patrizzi al piso desnudo del barco *33 Orientales*”.

En cuanto a la trama del golpe, Videla me dijo que, “en forma inorgánica, la planificación comenzó cuando asumo como jefe del Estado Mayor Conjunto y empiezo a recibir visitas de gente que está interesada en verme. Fue decisivo el impacto de mi discurso de asunción de ese cargo, el 4 de julio de 1975. Entre esa gente estaba el grupo de Perriaux. Me enteré después de que también estaban en contacto con la Armada. En aquel momento, no tenía noción de la conjuntes de la situación”.

El abogado Jaime Perriaux, “Jacques”, era el vértice de ese grupo de civiles, de distintas áreas. Discípulo del filósofo español José Ortega y Gasset, Perriaux había sido ministro de Justicia del general Alejandro Lanusse. El Grupo Perriaux solía reunirse en una casa en la calle Azcuénaga; allí se encontraban, entre otros, José Alfredo Martínez de Hoz, Juan José Catalán, Mario Cadenas Madariaga, José Estenssoro y Horacio García Belsunce.

Aquel discurso de Videla llamó la atención de ese grupo y de otros civiles que buscaban en los cuarteles un jefe que volviera a guiarlos al gobierno. Estaban convencidos de dos cosas: la presidenta Isabel Perón no podía solucionar los problemas que afectaban al país y el peronismo era imbatible en las urnas. El “partido militar” volvía a ponerse en acción.

Fue un discurso corto aquel de Videla, que ofició como un llamador para los civiles del “partido militar”. Brindó definiciones sobre mando, subordinación, patria y valor, que —afirmó— “es coraje sí, pero también templanza; entrega de sí mismo; entereza moral para afirmar nuestras convicciones sin claudicar, aun al precio de la propia vida, ofrendada en una muerte heroica o en el elocuente silencio de un renunciamento ejemplar.”

La política tiene sus paradojas, también en el Ejército. Videla había estado muy cerca de que le cortaran la cabeza, de que lo retiraran y lo

mandaran a su casa. Eso ocurrió durante un drástico cambio en la cúpula del Ejército, el 13 de mayo de 1975, cuando el general Leandro Anaya fue reemplazado por el general Alberto Numa Laplane, también de Infantería. Fue el momento de mayor esplendor del hombre fuerte del gobierno de Isabelita, José López Rega. Laplane sostenía la tesis del “profesionalismo integrado”: el Ejército debía compartir los objetivos del gobierno peronista y ayudar a lograrlos; Anaya, por el contrario, creía en el “profesionalismo prescindente”: el Ejército era una institución que no tenía que mezclarse con el gobierno y los partidos; no debía politizarse.

Anaya era hijo de un general que había sido compañero de promoción y amigo de Juan Perón, quien lo había nombrado jefe del Ejército el 19 de diciembre de 1973 en reemplazo del general Jorge Carcagno.

“Muerto Perón —explicó Videla— Anaya perdió su más firme sostenedor. Quedó entonces Isabel, manejada por López Rega, y toda esa gente empezó a hacerle la vida imposible a Anaya, que fue despertando algunos celos porque no era una persona dócil”.

Como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Videla tenía mucho tiempo libre y decidió ocuparlo en recibir a todos esos civiles que querían conocerlo y llevarle sus ideas, aunque aclaró que, primero, habló con el ministro de Defensa, Jorge Garrido.

“Había —se justificó— un ambiente de ‘fragote’ generalizado. Con un grupo de amigos comenzamos a pensar en una suerte de plan de gobierno. Definimos algunas ideas básicas para que, llegada la hora, no tuviéramos que improvisar. No por ganas de hacerlo sino para prever lo previsible: que frente a un vacío de poder, tal como se estaba produciendo, las Fuerzas Armadas debieran intervenir, y, en ese caso, más valía prepararnos para esa eventualidad”.

Mientras Videla se reunía con civiles, muchos de ellos futuros colaboradores en la dictadura, Laplane se quedaba sin su respaldo principal: López Rega fue obligado a renunciar el 11 de julio de aquel año y hubo un nuevo cambio de gabinete, el séptimo en trece meses de gobierno.

Un oficial superior en actividad, el coronel Vicente Damasco, fue designado ministro del Interior, pero la mayoría de los generales y coroneles rechazó ese nombramiento argumentando que, como Damasco no estaba retirado, comprometía al Ejército con el gobierno. La crisis duró diez días y terminó con el pase a retiro de Damasco y el reemplazo de Laplane por Videla.

Laplane había durado apenas ciento seis días al frente del Ejército y su caída fue otro duro golpe para Isabelita.

El ascenso de Videla fue una imposición del Ejército a la Presidenta, que tenía otro candidato; el punto culminante de una comedia de enredos muy bien relatada por Julio González, convertido en figura clave del “entorno” de Isabelita desde su doble cargo de secretario técnico de la Presidencia y secretario privado de la Presidenta.

González recordó que el 26 de agosto de 1975, cuando trascendió la rebelión de los generales, Laplane le prometió a Isabelita que reprimiría a los sediciosos durante una reunión en la residencia de Olivos en la que también participaron los ministros y los líderes gremiales Lorenzo Miguel y Casildo Herreras, que se habían transformado en los nuevos soportes del gobierno.

“Antes de combatir —relató—, Laplane pidió festejar el triunfo. Mientras en la biblioteca yo mecanografiaba el comunicado de apoyo de los sindicatos, un ruido estrepitoso señaló el comienzo de las hostilidades: un corcho de champagne que retumbó como un disparo y un choque de varias

copas de cristal fueron los indicios del brindis preliminar del teniente general Laplane con la Presidente, los ministros y los dirigentes gremiales. ‘Con su apoyo, señora, y con el apoyo de los sindicatos, cuento con todo lo que necesito’. Y tras beber su champagne, el comandante general del Ejército partió a iniciar la lucha que pondría fin a la conflagración iniciada”.

A las ocho de la mañana del día siguiente, González recibió el llamado del ministro Garrido, que le informó que Laplane había fracasado en su tentativa de reprimir a los rebeldes, y que le había presentado la renuncia y la solicitud de su pase a retiro.

El 27 de agosto por la tarde, la Presidenta ordenó a Garrido que le ofreciera el cargo al general Alberto Samuel Cáceres, jefe del Primer Cuerpo, correntino, nacionalista y aliado de Lorenzo Miguel. Luego, Isabelita, acompañada por su médico personal, subió a sus habitaciones del primer piso y dejó a los ministros y a los jefes sindicales en la planta baja. Al anoecer, volvió Garrido junto con Cáceres, que informó que eran pocos los jefes militares leales al gobierno y que, por ese motivo, la situación no era sencilla. Pero les prometió que, si la Presidenta lo nombraba al frente del Ejército y le ordenaba la represión a los díscolos, él cumpliría esa tarea de inmediato.

Siempre según González, Garrido saltó y dijo que, primero, era conveniente que él, como ministro de Defensa, se reuniese con los sublevados para que ellos decidieran si aceptaban o no a Cáceres como nuevo jefe del Ejército. Entonces, Cáceres declinó rotundamente el ofrecimiento: “Yo no podría exponer al país y al Ejército a un enfrentamiento para respaldar a un elenco incapaz de tomar una posición elemental frente a una situación tan difícil”, les dijo, y se fue a su casa.

Con Cáceres fuera de juego y sin otro candidato nacionalista o peronista, el gobierno quedó a merced de los generales complotados en la guarnición

de Campo de Mayo. El primero en la lista de sucesión era Carlos Delía, general de Caballería y jefe del Tercer Cuerpo. Pero no era el candidato de los “rebeldes”, como le aclaró por si hiciera falta el general Roberto Viola, jefe del Segundo Cuerpo, con asiento en Rosario, el 28 de agosto por la mañana en la Escuela de Comunicaciones: “Discúlpeme, mi general, pero usted no entra en este proyecto”, le informó.

A esa altura, era claro que Viola había asumido el papel de organizador de la maniobra que colocaría a su amigo Videla al frente del Ejército. Videla y Viola se conocían mucho y formaban una junta bien afianzada, que se complementaba y compartía intereses que iban más allá del plano estrictamente militar.

Según Videla, se llevaban tan bien porque, mientras a Viola “le gustaba la política, era un ‘trenzador’, yo tenía otro perfil, el de un profesional interesado solo en el Ejército”.

Ambos eran de Infantería, el arma que, con la vuelta del peronismo al gobierno, había recuperado el control del Ejército frente a la Caballería, y no estaba dispuesta a cederlo. Durante la dictadura, Viola sería el sucesor de Videla al frente del Ejército y luego, del país.

Corrido Delía, quedó entonces Videla como el candidato obligado para Isabel Perón ya que era el general más antiguo de su promoción y el Ejército no se hallaba en condiciones de soportar otra purga.

Isabelita no pudo hacer otra cosa que nombrar a Videla, el 28 de agosto de 1975, pero sentía una profunda desconfianza por ese general de rostro indescifrable, parco, que el 20 de junio de 1973 se había negado a representar al Ejército y a la Infantería —el arma de Perón— en el vuelo que trajo de regreso a su esposo, luego de casi dieciocho años de exilio.

La Presidenta lo recibió días después en una visita protocolar. González contó que “se reunieron a solas durante aproximadamente media hora.

Videla era una personalidad difícil de describir, pero un camarada suyo dio una versión bastante aproximada: ‘Es un hijo de puta con cara de ángel’. Era realmente un ser aséptico, insensible, indiferente en apariencia, calculadoramente especulativo”.

Cuando Videla se retiró, Isabelita seguía enojada por la designación que le habían arrancado. “Dijo que respetará el orden constitucional. Veremos si es así”, le comentó secamente a su secretario.

Videla llegó a la jefatura del Ejército con aquellas “ideas básicas por si debíamos hacernos cargo del gobierno”, pero “la planificación en forma orgánica del golpe” comenzó luego de su llegada al vértice militar, cuando “cambio de esquema y oficializo esas reuniones porque ya no serían reuniones con el general Videla sino con el comandante general del Ejército; por eso, esos encuentros fueron canalizados a través de la secretaría general del Ejército. Marina también hace lo mismo”.

Pero —aseguró— todavía con una intención preventiva, “para nutrirse de ideas por lo que podría llegar a ocurrir; estar informados de la situación y prever medidas de urgencia en caso de que ocurriera lo que veíamos que podría ocurrir”.

En mi libro sobre el ataque al cuartel Formosa, sostuve la hipótesis de que la Operación Primicia provocó el golpe del 24 de marzo de 1976 al detonar una serie de reacciones en cadena no solo en la cúpula militar sino también en el peronismo, el sindicalismo y el radicalismo.

Eso no quiere decir que haya sido la única causa del golpe: los fenómenos políticos de esta envergadura son siempre multicausales. Ni, mucho menos, que haya sido la principal causa, sino que ya no hubo

manera de volver atrás al acelerar un complejo mecanismo que venía siendo engarzado desde hacía varios meses.

Videla confirmó que “la decisión sobre el golpe toma un impulso decisivo cuando el senador Luder nos hace saber que él no aceptaba reemplazar a la Presidente. Cuando Luder viene con su negativa, pensamos con Massera: ‘Acá se acaba la línea legal; esto está perdido’”.

¿Y eso cuándo ocurrió?

Antes de la Operación Primicia, un sector importante del peronismo, al que podríamos llamar moderado o de centro, propiciaba una salida que satisfacía a las Fuerzas Armadas: el reemplazo de Isabelita por el presidente interino, Ítalo Luder, quien, como flamante titular del Senado, era el segundo en la línea de sucesión.

Las alternativas eran tres: que la viuda de Perón extendiera su licencia médica, renunciara o fuera desplazada a través de un juicio político a causa de presuntas irregularidades, como la firma de un cheque de un fondo asistencial, la Cruzada de Solidaridad Justicialista, para pagar una deuda privada de su difunto esposo con las hermanas de Evita.

El ministro del Interior, Ángel Robledo, presentó la idea a los tres comandantes: Videla, Massera y Héctor Luis Fautario, en una reunión reservada en su casa entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 1975. Los militares le tenían confianza a Robledo desde su época de ministro de Defensa, en la que dejó una imagen de político inteligente y dúctil.

Videla afirmó que recibieron la propuesta con entusiasmo: “Esa idea era una cosa que cayó como llovida del cielo; nosotros le dijimos que sí, siempre que la Señora fuera sacada del gobierno por una causa contemplada en la Constitución y las leyes, como una enfermedad, por ejemplo”.

El problema se les presentó cuando, luego del ataque en Formosa, el martes 7 de octubre, Robledo viajó a Ascochinga bien temprano para

reunirse con Isabelita y la encontró decidida a retornar a Buenos Aires, reasumir el gobierno y encabezar el acto central por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, en la Plaza de Mayo.

Apenas volvió de Córdoba, lo primero que hizo Robledo fue avisar por teléfono a cada uno de los jefes militares sobre la decisión de la Presidenta. Los tres comandantes se mostraron molestos por la novedad y Robledo los invitó a un encuentro con Luder en el departamento del presidente interino, en la calle Posadas, en la Recoleta, el viernes 10 de octubre por la noche.

Hubo seis comensales en la casa de Luder: Videla, Massera y Fautario, por un lado, y el dueño de casa, Robledo y el ministro de Defensa, Tomás Vottero, los tres santafesinos que formaban el núcleo duro del gobierno, por el otro.

Son dos las versiones de ese encuentro. Por un lado, Fautario me dijo que Robledo les preguntó: “Señores, ¿cómo seguimos?”, apenas los comandantes se sentaron a la mesa donde los esperaba una picada de quesos y embutidos. Antes de que los visitantes contestaran, Robledo enumeró una serie de problemas, entre ellos la violencia política, la inflación y la fuga de capitales.

—Si seguimos así, vamos a tener algún problema serio en cualquier momento. ¿Ustedes han pensado en tomar alguna actitud? —preguntó a los tres comandantes.

Era lo que todo el mundo quería saber en aquel momento: si los militares pensaban desplazar a Isabel luego de que trascendiera que ella quería reasumir la presidencia.

—Luder, si usted quiere hacerse cargo y se busca un mecanismo legal, nosotros no nos vamos a oponer y el país va a salir adelante —lanzó Massera.

—Yo no me puedo hacer cargo porque me van a tildar de traidor y yo no voy a ser el traidor de la señora de Perón —contestó Luder, a quien le gustaba la idea de asumir la presidencia en forma permanente, pero solo si Isabelita estaba de acuerdo.

La segunda versión de esa picada es la de Videla, quien me contó que Robledo les habló “acerca del ‘cansancio de la Presidente’ y la posibilidad de que, mediante la utilización de la vía legal, sea Luder quien asuma el gobierno. Luder pide: ‘Déjenmelo pensar’. A los pocos días, y vía Robledo, Luder da su respuesta: ‘No le puedo ser desleal a la Señora’”.

Ése fue el hecho, según Videla, que convenció a él y a Massera de que ya no había otra salida que el golpe.

Videla y Massera actuaban como si fueran una sola persona; en cambio, Fautario estaba en contra del golpe. Los tres se conocían bien porque eran compañeros de promoción. Videla y Massera intentaron convencerlo por última vez el viernes 17 de octubre al mediodía, durante un almuerzo por los canales del Delta a bordo del yate *Itatí*, de la Armada.

Fue otro día espléndido, a puro sol, sin una nube. A treinta kilómetros, la Plaza de Mayo se iba llenando de peronistas dispuestos a escuchar el primer discurso de Isabelita luego de una licencia por enfermedad que había durado treinta y tres días; algunos grupos cantaban la consigna de la hora: “¡Si la tocan a Isabel, va a haber guerra sin cuartel!”.

Fautario, un entrerriano de 51 años, manejaba con mano de hierro la Fuerza Aérea desde 1970 y era el único comandante que, “sin ser peronista sino un profesional a las órdenes de la Constitución”, como le gustaba definirse, había sobrevivido a las gestiones de Héctor Cámpora, Raúl

Lastiri, Juan Perón e Isabelita. Pero ya se notaban algunas fisuras en la cúpula de la Aeronáutica.

Fautario me contó que Massera y Videla comenzaron con los mismos argumentos de cuatro días antes, durante una reunión para analizar los ascensos de fin de año. Un suboficial de guantes blancos les servía una entrada de palta con langostinos.

—Mirá, nosotros te queremos hablar a raíz de lo que está pasando para que revises tu posición; esta situación no da para más: fijate el problema de la subversión, los gremios que pasaron a dominar el gobierno, esta mujer que no controla la situación pero no quiere irse —le dijo Massera, que llevaba la voz cantante en ese tipo de reuniones.

—Nosotros no estamos preparados para gobernar, no insistan con eso. Estoy cansado de los salvadores de la Patria que luego tienen que dejar el gobierno por la puerta de atrás —contestó Fautario.

—Esta vez va a ser distinto; se va a hacer cargo del país una Junta Militar y se va a respetar el 33 por ciento para cada fuerza —prometió Videla.

—A mí no me enrosqués la víbora. El Ejército, como siempre, se va a quedar con la principal porción; después, vendrá la Marina, y a nosotros, a la Fuerza Aérea, nos quedarán las migajas.

—Pero ya viste lo que pasa: los políticos no quieren hacerse cargo de la situación. Los tres nos reunimos con Luder y con Robledo; cada uno de nosotros habló con [Ricardo] Balbín y con otros políticos. ¡El país se va a la mierda y ellos se hacen los boludos! —se exaltó Massera.

—Me parece que ustedes se están apresurando. El año próximo hay elecciones y se termina el mito de que el peronismo no puede ser derrotado en las urnas. Dejemos que las cosas se solucionen como tienen que solucionarse.

Fautario pensaba que el peronismo podía ser derrotado en los comicios, que habían sido adelantados para octubre de 1976, pero Massera y Videla desconfiaban de las posibilidades electorales de Balbín, el candidato “natural” de la UCR, y ponían como ejemplo los resultados en las elecciones de gobernador de Misiones, en abril de aquel año, ganadas por el oficialismo.

Sostuvo Fautario que Massera incluso le reveló la fecha del golpe: el 24 de marzo de 1976, dado que el Ejército y la Armada necesitaban algunas semanas para adiestrar a los conscriptos de la clase 1955, que se incorporaban a principios de 1976, pero no podían demorarse mucho porque debían anticiparse al inicio de la campaña electoral.

Fautario estaba convencido de que “el detonante del golpe fue el ataque de Montoneros en Formosa: murieron diez conscriptos, estúpidamente, y eso impactó mucho. A partir de ahí, el golpe fue imparable; los políticos, en primer lugar, no lo pararon. Para el Ejército, el problema mayor pasó a ser que la subversión había salido de Tucumán”, donde había un frente rural desde el año anterior.

Las diferencias con Fautario se saldaron a fines de 1975, cuando Fautario fue reemplazado por el brigadier Orlando Ramón Agosti luego de una rebelión dentro de la Fuerza Aérea que comenzó el 18 de diciembre con la toma del aeroparque Jorge Newbery y duró cuatro días, encabezada por el brigadier Orlando Capellini.

En un momento de la crisis en su fuerza, Fautario fue a la residencia de Olivos e intentó ver a la Presidenta, quien no lo recibió. Le envió entonces un mensaje a través del edecán de la Aeronáutica: “Cuídese, Señora, porque a usted la van a echar en marzo”.

Por su lado, Videla me dijo que con Massera apoyaron “por la pasiva” la rebelión contra Fautario y atribuyó la falta de apoyo al golpe por parte del

brigadier entrerriano a su simpatía con el gobierno peronista.

“La Fuerza Aérea —afirmó Videla— no participaba en las conversaciones sobre el golpe por el marcado peronismo de su comandante, el brigadier Fautario. Se lo miraba con desconfianza. Cuando se produce el alzamiento de Capellini, nosotros lo apoyamos por la pasiva, demorando la represión. Era lógico que había que reprimir ese levantamiento, pero, por un lado, era otra fuerza y no quedaba nada simpático que saliéramos a tirar contra ellos; por el otro lado, sabíamos que Capellini había tomado esa actitud porque iba a ser pasado a retiro por Fautario y nosotros, con Massera, simpatizábamos más con Capellini que con Fautario”.

El cambio de mando en la Fuerza Aérea era todo lo que Videla y Massera pretendían: “Al sucesor de Fautario, el brigadier Agosti, lo considerábamos más confiable desde todo punto de vista. Era mercedino, como yo, y había estado con Massera destinado en la Junta Interamericana de Defensa durante dos años, donde habían trabado una buena relación. Además, Agosti había estado preso cuatro años como consecuencia de la Revolución de 1951”, contra el presidente Perón.

Tres meses después, Agosti sería el tercer hombre de la Junta Militar.

A las 8 de la mañana del que sería su último día al frente del país, el martes 23 de marzo, la presidenta Isabel Perón “estaba extraordinariamente bien”, según la encontró Julio González, la persona más influyente de su entorno. “Había descansado por la noche y su semblante y tono de voz eran alegres”, completó.

“No recuerdo —agregó— si viajamos a la Casa de Gobierno en automóvil o en helicóptero. Una vez allí, la jornada fue normal. La

Presidenta almorzó con Lorenzo Miguel, Rogelio Papagno (sindicalista de los albañiles) y el ministro de Trabajo, Miguel Unamuno”, entre otros.

Tres horas antes, el ministro de Defensa, José Deheza, se había reunido con Videla, Massera y Agosti en uno de los encuentros de rutina de los martes por la mañana. Videla afirmó que, si bien ya habían cumplido con todos los preparativos para el golpe, todavía no habían señalado el momento exacto en el que detendrían a la viuda de Perón.

“Todos se atribuyen cuándo fue fijado el Día D. Y la verdad es que surgió de casualidad, cuando el ministro Deheza, para sorpresa de nuestra parte, nos pide un nuevo apoyo a la Presidente”, me contó. Veamos el diálogo según la versión de Videla.

DEHEZA: —La Presidente necesita del apoyo de los comandantes militares para poder llevar adelante el gobierno.

VIDELA: —A la Presidente ya se le dieron algunas ideas, pero nunca obtuvimos respuestas, por lo cual pensamos que nuestra opinión no era válida.

DEHEZA: —El apoyo de ustedes es imprescindible porque no la dejan gobernar.

MASSERA: —No es la función nuestra darle apoyo porque quedaría ella como un mero mascarón de proa.

Videla agregó que “la reunión termina así y a nosotros nos llama la atención el pedido, que indicaba una debilidad tremenda de la Presidente y del gobierno”.

En tanto, Deheza, un cordobés que era yerno de Eduardo Lonardi —el general nacionalista que, bajo el lema “Ni vencedores ni vencidos”, encabezó el golpe de 1955 contra Perón—, le informó por teléfono a González que a las 19 se volvería a reunir con los comandantes “para

obtener una respuesta decisiva sobre la posición de las Fuerzas Armadas frente al gobierno constitucional”, me dijo el secretario.

A medida que avanzaba la tarde, las versiones sobre el golpe se multiplicaban y González se preocupaba cada vez más, aunque Isabel seguía “bastante serena, inmutable en su despacho”. El ex funcionario recordó que los llamados telefónicos “eran incesantes” y cargados de malas noticias. Por ejemplo, a las 20 llamaron los gobernadores de La Rioja, Carlos Menem, y de San Luis, Elías Adre. “Me aseguraron que la insurrección era un hecho y que las guarniciones militares de ambas provincias estaban aprestadas para hacerse cargo de los gobiernos provinciales”, recordó González.

El título del vespertino *La Razón* era muy expresivo: “Es inminente el final. Todo está dicho”.

En el Ministerio de Defensa, Deheza comenzaba la segunda reunión del día con los tres comandantes. Videla aseguró que “nos volvió a convocar de manera urgente, con el mismo reclamo”.

DEHEZA: —Hablé con la Señora. Insiste en que ustedes le den su apoyo.

VIDELA: —La Señora es Presidente por voluntad popular. Si todavía tiene el poder, que lo ejerza. Si no, que renuncie.

Deheza ofreció otro punto de vista, muy distinto: afirmó que en ese encuentro “volví a hablar de las leyes antisubversivas que se iban a aprobar por decreto-ley, de los planes del gobierno, de la necesidad de respetar la Constitución y de los peligros que un golpe podría acarrear. Videla me dijo: ‘Doctor, quisiera que usted exponga la posición del gobierno ante los altos mandos del Ejército, para lo cual le pido que mañana a las 12 concurra a la sede de mi comando, donde convocaré a los comandantes de cuerpo que no se encuentran en Buenos Aires’. Dos horas después, daba el golpe, y a la hora de la cita yo estaba detenido.”

En la Casa Rosada aumentaba la ansiedad, recordó González: “Pasadas ya las 21 y ante la carencia absoluta de noticias sobre las conversaciones en el Ministerio de Defensa, Isabel me ordenó que convocase a todos los ministros. Cuando eran ya las 22, recibí el llamado del doctor Deheza. ‘Recién termino de hablar con los comandantes, doctor. Voy para la Casa de Gobierno a informar a la Presidenta’, me dijo con perceptible preocupación en su voz”.

Deheza habló primero a solas con la Presidenta, que luego hizo pasar a todos los funcionarios.

González contó que Deheza les informó que “los comandantes estaban disgustados con la acción de gobierno, con la situación del país y con el desenvolvimiento de la guerrilla; que los mandos medios trasuntaban su disconformidad; que el Poder Ejecutivo había dado muchas marchas y contramarchas; y que había vacío de poder”.

“Mañana a las 10 —afirmó— tengo una reunión con los comandantes y vamos a continuar nuestras conversaciones. Luego, ellos van a venir conmigo a informar a la señora Presidente”. Y agregó que Videla le había asegurado que “seguiríamos conversando”. En conclusión, según el ministro, todos podían irse a dormir tranquilos porque no habría golpe, al menos aquella noche.

—¿Qué pasa si los comandantes no cumplen con su palabra? —quiso saber el ministro de Justicia, Augusto Saffores.

—Yo no puedo responderle porque de un lado hay un ejército con todo un armamento y del otro lado estoy yo solo con un palo. Así que solo nos queda confiar en ellos.

En eso, llegó el ministro del Interior, Roberto Ares, que entró al recinto presidencial agitando su mano derecha, en la que sostenía un cigarrillo.

—¡Un golpe de Estado! Estoy anonadado con lo que oigo. ¡Cómo puede, señora Presidente, creerse una cosa así! Estuve cenando con el jefe de Policía y no hay absolutamente nada —gritó.

Ares venía de comer en un restaurante de Martínez, en el Gran Buenos Aires, con el general Albano Harguindeguy, que en febrero había sido nombrado jefe de la Policía Federal por el gobierno de Isabel, en otra muestra del poder que los militares estaban logrando mientras la gestión peronista se caía a pedazos.

Harguindeguy consideraba a “Ares un señorazo; lo apreciaba mucho, pero no le podía decir que se venía el golpe y que yo lo iba a reemplazar. Yo ya sabía que el golpe sería al día siguiente, me lo habían confirmado el día anterior. Estábamos comiendo con Ares y todo el mundo andaba muy nervioso, hasta que en un momento le digo: ‘Me parece, ministro, que lo mejor va a ser que cada uno se vaya a su puesto de trabajo’. Le pareció bien y nos fuimos. Cuando volvía por Libertador, veo un tanque y me doy cuenta de que todo estaba dicho”.

Las palabras de Ares en la Casa Rosada sirvieron para retemplar el ánimo de Isabel, el “entorno” y los políticos y sindicalistas “verticalistas”, que fueron abandonando la Casa Rosada cuando transcurrían los primeros minutos del miércoles 24 de marzo. “Juéguese por nosotros; pagamos 2,10”, dijo a los periodistas que hacían guardia un sorprendentemente locuaz Lorenzo Miguel. “Destapen champán, que no hay golpe militar”, gritó el diputado chaqueño Adam Pedrini, justo detrás de su comprovinciano y flamante vicepresidente primero del Partido Justicialista, el gobernador Deolindo Bittel.

Pero el golpe ya estaba en marcha. Luego del encuentro con Deheza, los tres comandantes llegaron a la conclusión, según Videla, “de que mañana

van a volver con la misma exigencia y nosotros no podremos decirles nada distinto. Esto ya no tiene sentido”.

“Ya estaba todo preparado para el golpe —completó; solo faltaba fijar el Día D y la Hora H. Nos enteramos de que la Presidente estaba en su despacho. Los tres comandantes cambiamos opiniones y coincidimos: ‘Nos largamos ahora’. Llamamos a la Casa Militar, donde ubicamos al capitán de navío José María Fernández. ‘La Señora usará el helicóptero para su regreso a Olivos’, nos dijo. ‘Ponga en marcha la Operación Perdiz’, le ordena Massera”.

Los jefes militares habían previsto que la detención no se hiciera en la residencia de Olivos ni en la Casa Rosada para evitarle al jefe de Granaderos que tuviera que cumplir con su misión de combatir en defensa de la Presidenta.

Videla me dijo que “habíamos pensado, entre otras variables, en fraguar una emergencia que hiciera que el helicóptero aterrizara en Aeroparque, a mitad de camino. Así se hizo, y un general, un almirante y un brigadier la detuvieron”.

Cuando se enteraron, los sindicalistas que todavía le eran leales llamaron a una huelga general, pero nadie salió a defender a Isabel Perón. La viuda del General se había quedado completamente sola.

Capítulo 6

EL PRECIO DE LA VICTORIA

Pongamos que eran 7 mil u 8 mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. No podíamos fusilarlas. Tampoco podíamos llevarlas ante la Justicia.

Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte.

Disposición Final fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible.

Videla en entrevistas en el Instituto Penal Federal Número 34, en Campo de Mayo, en 2011 y 2012.

A los 86 años, sentado en una silla de plástico al pie de una cama de una plaza en la celda número 5 del penal de Campo de Mayo, despojado del

grado de teniente general con el que comandó al Ejército, condenado a prisión perpetua por delitos contra la humanidad, el fantasma de aquel militar que durante cinco años encabezó la dictadura más sangrienta de nuestra violenta historia me contó la verdad sobre los desaparecidos.

Una palabra terrible, que luego de la dictadura se escribe y se pronuncia en castellano en todo el mundo, y que en cada caso, para cada persona, fue un calvario que abarcó cuatro estaciones dentro de un plan que se aplicó de manera sistemática en todo el país: la detención o el secuestro; el interrogatorio en un lugar secreto, donde quedaba a merced de las torturas de sus captores; el asesinato, y el ocultamiento del cuerpo trasladándolo en un “vuelo de la muerte” al mar o al río de la Plata; arrojándolo a un arroyo o a un dique; quemándolo en un horno o rodeado de neumáticos, o enterrándolo en una fosa sin nombre, solo o junto con otros desgraciados.

Videla admitió que los desaparecidos eran detenidos que fueron asesinados durante la dictadura que él encabezó como presidente del país hasta 1981 y —un dato muy importante— como comandante en jefe del Ejército hasta mediados de 1978, es decir, durante los dos años más calientes de la represión y cuando ocurrieron casi todos esos crímenes.

Me dijo que los militares llegaron al golpe del 24 de marzo de 1976 con un consenso básico: “Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. No había otra solución: estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión”.

Eran miles de personas las consideradas “irrecuperables” por los jefes militares: “Pongamos —sostuvo Videla— que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra; no podíamos fusilarlas. ¿Cómo íbamos a fusilar a toda esa gente? La justicia española había

condenado a muerte a tres etarras [terroristas de ETA], una decisión que el generalísimo Francisco Franco avaló a pesar de las protestas de buena parte del mundo, entre ellos el papa Paulo VI: solo pudo ejecutar al primero y eso que era Franco, aunque en una Europa que iba girando al socialismo. También estaba el resquemor mundial que había provocado la represión de Pinochet en Chile. Tampoco podíamos fusilar hoy a cinco en Buenos Aires, mañana a tres en Rosario, pasado mañana a cinco en Córdoba porque iba a llegar un momento en que la gente diría: ‘¡Basta, esto no es Cuba!’”.

Videla aseguró que menos aún podían derivar esas personas a los fiscales y jueces: “Tampoco podían ser condenados judicialmente porque ya habíamos visto lo que había pasado con los presos del mal llamado Camarón, que fueron amnistiados y liberados con el retorno a la democracia”.

La dictadura preveía que nadie en la Justicia se iba a animar a procesarlos y condenarlos luego del amargo final que apenas tres años antes habían tenido los integrantes de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, que entre 1971 y 1973 juzgó y condenó a centenares de guerrilleros. Esa Cámara —rebautizada “Camarón” o “Cámara del Terror”— fue creada por la dictadura del general Alejandro Lanusse a instancias de su ministro de Justicia, Jaime Perriau, y procesaba a los presuntos guerrilleros con leyes específicas y muy estrictas, y en una sola instancia.

El experimento terminó en forma más bien abrupta: las cárceles fueron abiertas el 25 de mayo de 1973 por la noche, horas después de la asunción del presidente Héctor Cámpora. Todos los presos fueron liberados; al día siguiente, resultaron amnistiados por el Congreso, donde ningún legislador les reclamó o al menos les pidió que dejaran las armas ya que el país había vuelto a la democracia. La Cámara quedó disuelta inmediatamente por otra ley, y sus jueces, fiscales y funcionarios fueron dejados cesantes y hasta

privados de sus derechos previsionales. Algunos sufrieron atentados —el juez Jorge Quiroga fue asesinado por dos jóvenes en motocicleta cuando salía de su vivienda— y otros tuvieron que marchar al exilio.

De esa experiencia se había agarrado Videla ya en la reunión de gabinete del 24 de septiembre de 1975, cuando el senador Ítalo Luder reemplazaba en la presidencia a Isabel Perón. Luder estaba preocupado por el auge de los grupos guerrilleros y quería escuchar las propuestas de las Fuerzas Armadas.

“Dije —recordó Videla— que la Justicia estaba inerte por temor a que se repitiera lo que había pasado. Y que tanto era así que desde el 25 de mayo de 1973 no había habido ninguna condena judicial respecto a hechos de terrorismo y ¡caramba si los había habido!”.

La solución judicial le fue sugerida por el embajador de Estados Unidos, Robert Hill, en una audiencia a solas con el presidente Videla que duró una hora y media, el 21 de septiembre de 1976. Hill era un diplomático conservador y anticomunista, aunque sensible a las violaciones a los derechos humanos, tal vez porque amigos de su hijo habían sido secuestrados y permanecían desaparecidos. “Le expresé la gran preocupación que había encontrado en mi viaje a Estados Unidos”, informó Hill en un cable secreto enviado tres días después al Departamento de Estado.

Hill escribió: “Había en mi país, le dije, una gran empatía con su gobierno, que había tomado el poder bajo circunstancias difíciles, y que todos comprendían que estaba envuelto en una lucha a muerte con la subversión. Sin embargo, algunas cosas como el asesinato de los sacerdotes [tres curas y dos seminaristas palotinos, el 4 de julio de 1976] y el asesinato masivo en Pilar [treinta cuerpos dinamitados, el 20 de agosto de 1976] estaban seriamente dañando la imagen de Argentina en Estados Unidos. Le

sugerí que en el análisis final la mejor forma de proceder contra los terroristas era dentro de la ley”.

“Videla no me contestó; más bien se lanzó a una larga exposición sobre la difícil situación que su gobierno había heredado. La economía había estado en ruinas y el terrorismo predominaba. Después, dijo que Argentina estaba ahora en guerra contra el comunismo internacional, el cual, a través de la penetración en las escuelas y hasta en la Iglesia, había estado a punto de tomar el poder. Aunque antes había deplorado el asesinato masivo en Pilar, algunas de sus declaraciones posteriores me hicieron pensar que consideraba que la matanza de algunos izquierdistas era una buena lección”, agregó el embajador norteamericano.

Obviamente, los jefes militares estaban de acuerdo en que no podían liberarlos porque preveían que volverían a tomar las armas o a enfrentar a la dictadura en las universidades, las fábricas o los barrios populares, ya que el concepto de “subversión” que utilizaban era amplio, discrecional: no se limitaba a los guerrilleros sino que también abarcaba a los llamados “líderes sociales”, cuyo alcance dependía del “señor de la guerra” que mandaba en cada una de las cinco zonas en las que el país fue dividido.

Videla confesó todo eso, pero aseguró que no hubo un plan sistemático para robar los chicos de los prisioneros —en especial, luego del parto de sus madres cautivas— y entregarlos a “matrimonios confiables”, que les cambiaban la identidad y los criaban como si fueran hijos propios.

“Nunca hubo —afirmó— la orden de sustraer menores; por otra parte, no tenía razón de ser ese plan, en el marco de la guerra contra el terrorismo. No necesitábamos eso. Por el contrario, la orden era restituir los chicos a quien correspondiera. Son pruebas los menores entregados a sus familiares y el fallo en el juicio a los comandantes”.

Sin embargo, las Abuelas de Plaza de Mayo habían logrado encontrar nada menos que a 105 chicos robados cuando hice la primera entrevista al ex dictador, en octubre de 2011. Videla admitió que “sí, se produjeron casos de irregularidades, pero individuales y por falta de control en el territorio. Yo soy el primero en reconocer que hubo chicos que fueron sustraídos, algunos con la mejor intención, para ayudar a una familia amiga que no podía tener hijos; otros para venderlos. En cualquiera de las dos hipótesis, es un delito individual”.

Más allá de sus palabras, también fue condenado —el 5 de julio de 2012— a cincuenta años de prisión por la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.

Uno debería pensar que, cuando derrocaron a la presidenta Isabel Perón, los militares ya habían definido qué harían con los prisioneros. Sin embargo, sostuvo Videla que tanto él como sus colegas de la Junta Militar —el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti— inauguraron el llamado Proceso de Reorganización Nacional sin saber cómo eliminarían a esos miles de personas que eran “el precio de la victoria”.

“Nosotros —aseguró— no tomamos esa decisión antes del golpe sino cuando se nos presentó el problema de qué hacer con toda esa gente. Entramos a la guerra sin saber qué hacer con todas las personas que eran el costo necesario para ganar la guerra”.

Esas palabras de Videla me sorprendieron mucho. Me costaba creerle. Buscando antecedentes, encontré que tampoco los nazis supieron qué hacer de entrada con los judíos, a los que también ya habían condenado.

Salvando las distancias históricas y sin pretender una analogía entre los desaparecidos argentinos y las víctimas del genocidio nazi, el régimen de

Adolf Hitler recién se decidió por la llamada “solución final” en 1942, tres años después de la invasión a Polonia que detonó la Segunda Guerra Mundial, y cuando la expansión alemana comenzaba a flaquear.

Los nazis ya consideraban a los judíos un “obstáculo” a la “inevitable supremacía de la raza aria”, pero no habían definido qué hacer con ellos, cómo remover o solucionar ese “problema”. Al principio, forzaron la emigración masiva de judíos a otros países, pero el 20 de enero de 1942, en una mansión a orillas del lago Wannsee, al sur de Berlín, quince jerarcas debatieron durante dos horas “una solución completa, final, a la cuestión judía en los territorios bajo control alemán”, según explicó el general Reinhard Heydrich al inicio de una suntuosa comida. La “solución final” que encontraron provocó la muerte de seis millones de personas en cámaras de gas.

Videla afirma que nunca se habló en la Argentina de “Solución Final” sino de “Disposición Final” o de su abreviatura, “DF”.

“‘Disposición Final’ —explicó— fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil”.

En la primera y hasta ahora única lista de desaparecidos encontrada desde la recuperación de la democracia, figura la sigla DF al lado de 195 de los 293 nombres de detenidos en la jefatura de la Policía de Tucumán. El documento fue aportado el 15 de junio de 2010 por Juan Carlos *El Perro* Clemente —un militante de la Juventud Peronista que luego pasó a colaborar con la represión ilegal— durante un juicio a policías y militares. La lista había sido confeccionada a máquina por los represores, y los nombres aparecen por orden alfabético, con su alias o presunto “nombre de guerra”; en la tercera columna figura el destino de cada uno de ellos: “DF”,

“Libertad” o “Disp. PEN”, en alusión a los detenidos que eran “blanqueados” y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Según el Régimen Funcional de Logística del Ejército, la Disposición Final es “la actividad logística mediante la cual se determina el trámite a dar a los efectos finales irrecuperables, obsoletos o que han perdido sus condiciones antes de su baja del patrimonio”.

También el ministro del Interior de la dictadura, el general Albano Harguindeguy, citó esa frase, cuando sostuvo que, aunque no lo sabía, suponía que los miembros de la Junta Militar debieron haberse reunido para definir el destino final de los prisioneros “irrecuperables”.

En el Hospital Militar, mientras se reponía de una dolencia, Harguindeguy me dijo que en el Ejército esa decisión crucial nunca pasó por los oficiales superiores, los coroneles y los generales: “No se habló... Ahora, usted recuerda que la Junta Militar se reunía y eran tres; los demás, ‘colita de perro’, como en los juegos infantiles. Tres eran las cabezas... Y en el Ejército, los comandantes de cuerpo, y arriba de ellos, el comandante en jefe. Si hablaron o no hablaron... Yo creo que no pudieron dejar de hablar porque era muy trascendente en la vida del país, del futuro, y más si iba a ser [haber] Disposición Final. Si era [había] Disposición Final, había que dar el nombre, el lugar y el hecho. ¿Cómo justificaba el hecho? ¿Cómo tenía que juntar las pruebas suficientes para esa pena?”.

La Junta Militar era la autoridad suprema, formada por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que elegían al presidente de la Nación. Videla fue el primero, y cumplió sus cinco años de mandato.

A pesar de la suposición de Harguindeguy, Videla aseguró que “no hubo una reunión de Junta para decidir esto; cada fuerza lo fue decidiendo a medida que se iban produciendo los hechos. La guerra contra la subversión

no fue competencia de la Junta Militar sino de cada fuerza a través de su comandante en jefe”, aseguró.

El Ejército asumió la “responsabilidad primaria”, principal, en la lucha contra la guerrilla, y dividió el territorio argentino en cinco zonas geográficas, siguiendo la distribución de los “cuerpos” de la fuerza. Cada una de esas zonas estuvo a cargo del comandante de cuerpo. Por ejemplo, la Zona 1 abarcaba la Capital Federal, parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa; el responsable fue el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el general Carlos Suárez Mason, *Pajarito*, uno de los “halcones” del Proceso. Otro ejemplo: la Zona 3 sumaba diez provincias, desde el Noroeste a Cuyo, con eje en Córdoba, donde tenía su sede el comandante del Tercer Cuerpo, el general Luciano Benjamín Menéndez, *Cachorro*, otro de los “duros”.

A su vez, para asegurar una mayor “eficacia” en la represión y terminar más rápido con la guerrilla, cada zona fue dividida en subzonas, áreas y subáreas, con sus correspondientes jefaturas.

La Armada participó activamente de la represión, pero en forma más circunscripta: Massera quería ser presidente y sostenía que sus subordinados debían tener una participación notoria en la lucha contra la guerrilla para hacer valer ese pergamino en la pulseada para suceder a Videla. Por eso, presionó al Ejército y logró que su fuerza se especializara en la lucha contra los montoneros en la Capital Federal y la zona norte del Gran Buenos Aires.

La Fuerza Aérea tuvo una participación menor.

A nivel nacional, el protagonismo fue del Ejército, que desplegó sus fuerzas de una manera simultánea y maciza en todo el territorio “para detectar la presencia de un enemigo mimético, que se escondía en el ambiente, y aniquilarlo”, según explicó el ex dictador.

En ese marco, era probable que los militares cometieran “errores y excesos” y, de hecho, Videla admitió que “la libertad de acción derivó en grupos que se manejaban con demasiada autonomía. Había una finalidad, pero los medios fueron tremendos”.

Pero no hubo errores ni excesos en el caso de los desaparecidos, aseguró el ex dictador. Ellos fueron el resultado de decisiones tomadas por una pirámide de mando cuidadosamente diseñada; en su zona geográfica, el comandante era amo y señor, el dueño de la vida y de la muerte de cada detenido, pero el vértice de todo el esquema era ocupado por Videla, tal como él me contó hablando de sí mismo en tercera persona, como si se pronunciara desde el mármol.

“No era que esa decisión sobre el destino de una persona la tomaba un cabo. No: había responsables en cada zona, subzona, área y subárea. Pero, por encima de ello, existía la responsabilidad del comandante en jefe del Ejército, tomada en la más absoluta soledad del mando, al aceptar como realidad irreversible la penosa figura del desaparecido”.

En la base de esa pirámide estaban los soldados —el servicio militar era obligatorio—, los suboficiales y los oficiales de menor rango, de subteniente a capitán. Según Videla, esos oficiales subalternos, que tenían menos de treinta años y que ahora son el grueso de los detenidos por violaciones a los derechos humanos, no podían negarse a cumplir las órdenes debido al amplio alcance del concepto de “obediencia debida” en las Fuerzas Armadas.

“El reglamento militar —explicó— dice que nadie está obligado a cumplir una orden inmoral. Un ejemplo: el jefe del regimiento no puede ordenarle al capitán que es el jefe de Intendencia que coimee al carnicero y divida con él el resultado de la coima. Eso está muy claro. El problema es qué orden es inmoral en una situación de guerra. En una guerra se trata

muchas veces de matar y eso no es inmoral. Usted dirá: ¡pero hay formas y formas de matar! No sé si es tan así, cuando, por ejemplo, el presidente Perón había hablado de ‘exterminar uno por uno’ a los guerrilleros que atacaron el regimiento de Azul, en su carta a los oficiales de esa unidad”.

“Yo creo que —precisó Videla su punto de vista— en el contexto de la guerra contra la subversión un oficial no tenía escapatoria si quería seguir en el Ejército, y que no cabía la calificación de orden inmoral. No es que estaban bajo coerción irresistible; no era el caso. Ha habido casos de jovencitos que se negaron a cumplir una orden y pidieron la baja, pero fueron casos excepcionales, muy contados. Es decir, podían negarse, pero tenían que irse del Ejército. Los generales estuvieron todos de acuerdo, y el que no lo estuvo, se fue”.

La represión fue capilar y la decisión de qué hacer con cada prisionero quedó en manos de cada fuerza; en el caso del Ejército, del comandante de cada zona. Y cuando enviaban al detenido a Disposición Final, esos “señores de la guerra” también se manejaban con “autonomía para encontrar el método más rápido y menos riesgoso” para hacer desaparecer el cuerpo.

Lo primero que se les ocurrió fue fraguar intentos de fuga durante los traslados de presos. O informar sobre muertos en tiroteos que no se habían producido. Pero eran trucos muy evidentes como para ser efectivos durante un cierto tiempo.

Pronto recurrieron a la desaparición de personas, que venía del gobierno peronista, en especial después de los decretos de octubre de 1975, pero que se masificaron durante la dictadura.

En Córdoba, por ejemplo, hubo 69 desaparecidos en los seis meses previos al golpe; se multiplicaron a 438 en la dictadura, cuando, además, hubo 118 muertos en forma pública.

“La figura del desaparecido —insistió el ex dictador— no estaba prevista en el momento en que hubo que dar el golpe. No se previó, hasta que se llega a la conclusión de que era la mejor solución, según las circunstancias. Fue una realidad que se impuso”.

“No había otra solución —agregó—; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. La solución fue mucho más sutil que al principio porque creaba una sensación ambigua en la gente: no estaban, no se sabía qué había pasado con ellos; yo los definí alguna vez como ‘una entelequia’. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.

En otra de las entrevistas, precisó: “La solución a ese dilema fue apareciendo de una manera espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando. Casos espontáneos, pero que, repito, no eran decididos por un joven oficial recién recibido; no, casos que eran ordenados por un capitán que, a su vez, recibía la orden del jefe de la brigada que, a su vez, recibía la orden del comandante o jefe de zona”.

“Frente a esas situaciones —completó—, había dos caminos para mí: sancionar a los responsables o alentar estas situaciones de manera tácita como una orden superior no escrita que creara la certeza en los mandos inferiores de que nadie sufriría ningún reproche. No había —no podía haber— una Orden de Operaciones que lo dijera. Hubo una autorización tácita. Yo me hago cargo de todos esos hechos”.

Videla me dijo que los jefes de las zonas no tenían que pedirle permiso y ni siquiera informarle sobre cada caso en particular, salvo aquellos que consideraran tan importantes o relevantes que debían ser conocidos por el comandante en jefe.

“Hubo problemas —relató— en algunos casos por la resonancia del personaje. A mí, los comandantes o jefes de zona no me pedían permiso para proceder: yo consentía por omisión. A veces, me avisaban. Recuerdo el caso de una visita a Córdoba y el general Menéndez me recibe con esta novedad: ‘El hijo de Escobar andaba en malas juntas y los liquidamos anoche’”. Era el hijo de un coronel compañero nuestro de promoción; entonces, yo ya sabía que si Escobar venía le tenía que decir: ‘De ese tema no quiero hablar’. Pero el padre no me preguntó nada”.

Los casos de hijos de militares que se habían convertido en guerrilleros fueron traumáticos para las Fuerzas Armadas: “Una vez, nos avisan de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA: ‘Lo tenemos al hijo de Laplane, está metido hasta la cabeza y es irrecuperable. ¿Qué hacemos? ¿Lo fusilamos o qué?’. Yo ordené que se lo entregaran a Harguindeguy; le avisamos al padre y lo hicimos salir del país, a Israel, país que él eligió porque su esposa era judía. Una cosa era matar al hijo del coronel Escobar y otra cosa al hijo del general Alberto Numa Laplane, que había sido jefe del Ejército. Otro caso: el hijo del general Julio Alsogaray. Un día, vino y nos dijo: ‘Sé que mi hijo está en la guerrilla; yo no puedo hacer nada, no lo puedo controlar; solo les pido que me entreguen su cadáver’. Es decir, él calculaba que en algún momento lo íbamos a matar y veía lo que estaba pasando con los desaparecidos”.

Alsogaray también había sido comandante en jefe del Ejército, entre 1966 y 1968, durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Uno de sus hijos, Juan Carlos, *El hippie* o *Paco*, sociólogo recibido en Francia, era

“oficial” de Montoneros y tenía 29 años cuando fue muerto, el 13 de febrero de 1976 —antes del golpe—, en un tiroteo en el monte tucumano. El cuerpo del primo de María Julia Alsogaray fue entregado a sus padres a fines de aquel mes por el general Antonio Bussi, comandante de la Quinta Brigada y jefe del “Operativo Independencia”, que se desarrollaba en Tucumán por orden del gobierno peronista.

Los jefes de cada una de las porciones en las que fue dividido el territorio argentino tenían tanto poder que, cuando “había que hacer un procedimiento en otra zona, se pedía al responsable de esa zona la autorización de ‘zona libre’, que era siempre por una cantidad determinada de horas; se realizaba la operación y se retornaba a la zona propia”, según Videla.

En ese marco, Videla me dijo que él “no preguntaba” el destino de los desaparecidos: “Sabía que no iba a tener respuestas si preguntaba. No tenía sentido buscar respuestas donde no las había”.

La dictadura no solo hizo desaparecer prisioneros sino también los cuerpos de guerrilleros que habían muerto en tiroteos, como el jefe del ERP, Mario Santucho, ultimado por una patrulla encabezada por el capitán Juan Carlos Leonetti, que lo sorprendió en un departamento en Villa Martelli —zona norte del Gran Buenos Aires— el lunes 19 de julio de 1976.

Leonetti también murió, sin saber que había matado nada menos que a Santucho, así como al número 2 del ERP, Benito Urteaga.

Videla me contó que la decisión sobre el ocultamiento del cuerpo de Santucho fue tomada por él, pero compartida por la Junta Militar. ¿Por qué? “Porque era una persona que generaba expectativas; la aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar. No sé qué pasó con su cuerpo. Decían que estaba en Campo de Mayo, pero hicieron excavaciones y no encontraron nada”.

Ya no se trataba de enmascarar la muerte de prisioneros sino de evitar que parientes, amigos y simpatizantes de personas cuyas muertes habían sido reconocidas y hasta celebradas por los jefes militares pudieran enterrar sus restos y honrarlos para que descansaran en paz.

En nuestra historia hay antecedentes incluso de este tipo. El más recordado es la desaparición durante más de catorce años del cuerpo embalsamado de Eva Perón luego del golpe de 1955 por orden del general Pedro Aramburu. Quince años después, el cuerpo de Aramburu corrió también el riesgo de desaparecer, pero para siempre: en la famosa entrevista a Mario Firmenich, el escritor Gabriel García Márquez escribió que “alguien les había dicho a los ejecutores que si enterraban el cuerpo con cincuenta kilos de cal viva no quedaría ningún rastro”. El Premio Nobel de Literatura agregó que el consejo no funcionó: “Fue al contrario: se conservó intacto y en poco tiempo fue descubierto”.

Es decir que los militares estaban convencidos de dos cosas: tenían que matar a “siete mil u ocho mil” personas y había que hacerlo sin que la gente, dentro y fuera del país, se diera cuenta.

Desde antes del golpe, buscaron ocultar, enmascarar, la decisión de derrotar a las guerrillas sin respetar las leyes ni los derechos humanos más fundamentales. Tanto es así que Massera tomó un café con el embajador Hill el 16 de marzo de 1976 —ocho días antes de que derrocaran a Isabelita— cuando, según transmitió el diplomático a su gobierno en un cable secreto, le aseguró que los militares eran “completamente conscientes de la necesidad de evitar problemas sobre los derechos humanos” y que, en el caso de que debieran tomar el poder, “no seguirán los lineamientos de la

intervención de Pinochet en Chile. Más bien, dijo él, tratarán de proceder dentro de la ley y con total respeto por los derechos humanos”.

Massera, Videla y los militares comprendían que Estados Unidos ya no era tan favorable a los gobiernos “amigos” que violaban los derechos humanos. En marzo de 1976 faltaban apenas siete meses para las elecciones que provocarían el retorno de los demócratas a la Casa Blanca con James Carter: la mayoría del electorado criticaba el abierto respaldo de los republicanos al cruento golpe del general Augusto Pinochet en Chile casi tres años antes.

El giro en la opinión pública norteamericana y la situación electoral en Estados Unidos fueron dos de los factores que inclinaron a Videla y a los militares hacia la Disposición Final. No querían levantar protestas. En sintonía, los colaboradores de Videla presentaban al nuevo presidente como al líder de la facción moderada dentro de los militares, las “palomas”, a quien había que respaldar porque era el único que podía mantener a raya a los “halcones”, partidarios de una represión feroz, “pinochetista”.

Al principio, la dictadura logró confundir a los diplomáticos acreditados en Buenos Aires. La delegación israelí fue una de las primeras en darse cuenta, según otro cable de la embajada norteamericana, del 23 de junio de 1976. Hill señaló que, para sus colegas de Israel, “los militares tomaron la decisión de eliminar la subversión y el terrorismo, y de silenciar y aterrorizar a toda la potencial oposición, mucho antes del golpe del 24 de marzo. La única cuestión restante era cómo hacerlo con menor exposición a las críticas externas que las que habían aislado al régimen militar en Chile. El gobierno dio luz verde a las fuerzas de seguridad para hacer frente al problema de seguridad interna con cualquier método considerado apropiado, pero siempre manteniendo al gobierno en una posición de ‘posible negación’ de la responsabilidad”.

Había otro motivo para hacer desaparecer los cuerpos de los prisioneros: el protagonismo que las tareas de Inteligencia adquirieron en la lucha contra las guerrillas. “La Inteligencia —dijo Videla— siempre actúa en secreto, sea para prevenir que se infiltre el enemigo como para obtener información y sembrar incertidumbre en las filas del enemigo”.

Sostuvo el ex dictador que “fue, fundamentalmente, una guerra de Inteligencia” y, en ese marco, justificó la tortura: “Las tropas de superficie actuaban en controles de rutas y de población, allanamientos, mantenimiento del orden, etcétera, pero había otras actividades que no se conocían, que eran secretas. En una guerra distinta, irregular, la Inteligencia cobró un gran protagonismo, que habitualmente no tiene”.

“En ese caso —agregó— siempre se trata de crear incertidumbre. Lo peor para este enemigo era no saber qué pasaba con sus compañeros: ¿Los tomaron prisioneros? ¿Estarán declarando? ¿Se habrán pasado al otro bando? Los guerrilleros se manejaban con una estructura de células, donde no se conocían entre ellos sino solo al jefe, y en la cual tenían que hacer contacto con su responsable cada cierto tiempo. Al faltar ese contacto, la célula se desparramaba. La urgencia en los interrogatorios se debía a la necesidad de evitar que los compañeros del detenido se alertaran y se dispersaran”.

—¿Se torturaba a los detenidos?

—Aceptemos que sí, que había declaraciones bajo fuerza. Hay que tener en cuenta que muchas veces estaba en juego la vida de muchas personas.

Los tormentos fueron tan generalizados que los jueces que condenaron a los comandantes el 9 de diciembre de 1985 no encontraron “constancia de algún centro de cautiverio donde no se aplicaran medios de tortura y, en casi

todos, la uniformidad de sistemas aparece manifiesta: pasaje de corriente eléctrica, golpes y asfixia”.

La sentencia incluyó el testimonio de Gladis Cuervo como ejemplo de esos tormentos aplicados en forma sistemática: “Me picaneaban y preguntaban por gente del Hospital Posadas [en Morón]. Después de la picana, sufrí otra serie de torturas en días sucesivos: me hicieron el submarino, como lo llamaban ellos, en una bañera llena de agua fría; volvieron a golpearme, me rompieron el esternón y las costillas. En otras oportunidades, me quemaron con cigarrillos, me prendieron fuego el vello del pubis y me quemaron con encendedores las piernas, el cuello. Me tenían dentro de un placard; me ataban las manos a los pies, por detrás; lo que ellos llamaban ‘en avión’”.

Videla fue muy explícito sobre la influencia de la llamada Doctrina Francesa en el uso de la tortura y en las desapariciones: “El Ejército no enseñaba a torturar. Pero también es cierto que había manuales del ejército francés basados en las experiencias en la Guerra de Argelia que motivaron la instalación dentro del Estado Mayor del Ejército de una comisión de oficiales franceses que colaboraron con el Departamento de Doctrina del Ejército para adecuar nuestros reglamentos”.

“Luego de la Guerra de Vietnam —agregó— vino también una comisión del ejército norteamericano, pero los de mayor influencia, tal vez por haber llegado primero y por la experiencia emblemática en Argelia, fueron los franceses. Además, un general argentino, Carlos Rosas, había hecho la Escuela Superior de Guerra en París durante el conflicto en Argelia, en 1957, y volvió deslumbrado por el tema de la guerra contrarrevolucionaria, que incluía métodos irregulares en la lucha contra el enemigo. Por eso, impulsó cursos especiales sobre la guerra contrarrevolucionaria, que debieron ser realizados por los oficiales de Estado Mayor”.

La Doctrina Francesa consistía en un conjunto de técnicas militares contra grupos guerrilleros, revolucionarios o independentistas que fueron aplicadas por primera vez en forma sistemática en Argel, la capital argelina. El objetivo era cristalino: aniquilar, sin ningún tipo de reparos éticos o legales, al Frente de Liberación Nacional, una escurridiza organización político militar que buscaba la independencia luego de casi ciento treinta años de dominio colonial.

Entre enero y septiembre de 1957, los paracaidistas franceses arrestaron y torturaron a unas 24 mil personas e inauguraron otra técnica que haría carrera en Argentina, Chile y, en menor medida, Brasil: el asesinato y la desaparición de prisioneros; hubo alrededor de 3 mil desaparecidos, que eran arrojados al mar o enterrados a una veintena de kilómetros de Argel, nunca en el mismo sitio.

Si bien los militares tomaron el gobierno sin haber definido qué harían con los detenidos “irrecuperables”, usaron sí el mucho tiempo que tuvieron entre enero y marzo de 1976 para preparar en cada zona una lista de “objetivos” o “blancos” que serían apresados o secuestrados luego del golpe. También decidieron que serían alojados en centros secretos de detención, donde quedarían a merced de los oficiales de Inteligencia.

Según el *Nunca Más*, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), hubo cerca de 340 Centros Clandestinos de Detención esparcidos en todo el territorio nacional. Durante semanas, meses o incluso años, los detenidos permanecían en esos “pozos”, una palabra del argot de ultratumba inventado por militares y prisioneros; muchos desaparecieron; otros fueron “blanqueados” y alojados en cárceles comunes, y el resto recuperó la libertad.

La clave era lograr información rápida y certera, y los centros de detención permitían eso. De este modo, se alimentaba un círculo salvaje:

detenciones, cautiverio, aprietes, torturas, información, nuevas detenciones y así sucesivamente, hasta destruir el organigrama celular de cada grupo guerrillero. Ése era el objetivo que aseguraba la victoria militar, según la doctrina elaborada y exportada por los franceses para la “guerra contrarrevolucionaria”.

Para Videla, no eran centros clandestinos: “Los detenidos eran alojados en lugares no comunes por razones de seguridad, que debían ser muy rigurosas, y además para tenerlos a mano para apretarlos cada vez que lo necesitáramos, a cambio de nada o de algo. Eran los Lugares de Reunión de Detenidos, que era el término reglamentario”.

Se refería al nombre con el cual aparecían en sus órdenes escritas como comandante en jefe del Ejército. También Massera dijo que eran centros reservados o secretos, pero no clandestinos: “La ESMA era un centro de detención, no un centro clandestino. En una guerra no se le va a avisar al enemigo dónde están los detenidos”.

Sin embargo, el recuerdo de la ESMA fue motivo de un conflicto posterior entre Videla y Massera, un reflejo de las diferencias que los enfrentaron cuando finalmente chocaron en sus pretensiones políticas: Massera quería heredar a Videla en la presidencia, mientras que Videla favorecía un reemplazo del Ejército, a su amigo Roberto Viola para luego, tal vez, volver pero en elecciones más o menos condicionadas.

“El Ejército —me contó el ex dictador— tenía El Vesubio, El Olimpo y otros Lugares de Reunión de Detenidos. La Armada tenía la ESMA, que empieza siendo eso que se preveía pero que se va distorsionando por la ambición política de Massera. Eso deriva en el intercambio de favores a los montoneros detenidos por información o colaboración con la fuerza política que Massera estaba creando. Eran ‘quebrados’ por distintas razones, que se ponían a disposición de los marinos y colaboraban con ellos, por ejemplo

‘marcando’ a ex compañeros. Fue una engañifa para los propios autores porque todos esos quebrados se dieron vuelta otra vez, y fueron los principales acusadores en el Caso ESMA. Yo tenía una idea de que algo de eso estaba pasando en la ESMA, pero era una cuestión de ellos: las zonas estaban perfectamente delimitadas y eran respetadas”.

Por su lado, Massera negaba esas acusaciones y atribuía la imagen negativa de la ESMA a “operaciones para dejarme mal parado” de dos de los principales colaboradores de Videla, el secretario general de la Presidencia, el general José Rogelio Villarreal, y su número dos, el abogado Ricardo Yofre.

La Justicia comprobó que la ESMA fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la dictadura.

Hacia el Mundial de Fútbol, en junio de 1978, la “guerra contra la subversión estaba prácticamente terminada”, señaló el ex dictador, que insistía en vincular los tiempos de la represión ilegal con el gobierno peronista. “Siguiendo con el cronograma que le habíamos prometido al presidente Luder en 1975, a fines de 1977 la guerrilla estaba controlada; no estaba derrotada pero era cuestión de tiempo”.

“Luego del Mundial —agregó— quedaron sí algunos remanentes, por ejemplo células que en la Contraofensiva de los montoneros, en noviembre de 1979, volvieron a entrar al país y mataron al empresario [Francisco] Soldati y atentaron contra [Guillermo Walter] Klein y [Juan] Alemann, funcionarios de Economía. Volvieron a salir y al año siguiente entraron pero ya no pudieron salir; no bien cruzaron por Paso de los Libres, a los pocos días, cayeron; ya sabíamos todo sobre estas células”.

Precisamente, los militares decidieron acelerar la matanza antes del comienzo del Mundial porque se trataba de un evento global, que los podría bajar los reflectores de todos los países.

Argentina se consagró campeón por primera vez y la dictadura vivió sus días de mayor popularidad entre el 1° y el 25 de junio. Aunque no le gustaba el fútbol, Videla asistió a cada uno de los partidos de la Selección, no escuchó silbidos en ningún estadio, y al final del partido Argentina 3 - Holanda 1 entregó la copa al capitán Daniel Passarella en el Monumental.

Parecía un país feliz y unido, a tono con el eslogan oficial —“Los argentinos somos derechos y humanos”—, que desmentía las denuncias en el exterior sobre la represión ilegal, esa “artera campaña antiargentina” que tanto denunciaba el régimen militar.

La dictadura comenzó a declinar justo después de lograr el objetivo para el que había sido llevada al poder por el consenso de tantos: la derrota de las guerrillas.

En la particular mirada del ex dictador, “promediando 1978, con sus matices en más o en menos, el objetivo principal del Proceso estaba logrado. El orden había sido recuperado en todos los niveles: militar, político, gremial, económico y social. El país había dejado atrás la anarquía y estaba en paz, en conformidad; no había aplausos, pero tampoco quejas”.

El Mundial los hizo populares, pero el éxito los mareó y desnudó las internas entre el Ejército y la Armada, aunque también dentro del Ejército y en el propio gobierno. Como suele ocurrir en los casos en los que un solo grupo ocupa todo el espacio político, una vez que se quedaron sin los enemigos que los mantenían unidos, los jerarcas del régimen se dedicaron a pelear entre ellos y terminaron destruyendo al Proceso y a sí mismos.

“No supimos aprovechar la oportunidad. Los políticos no demostraban mayor prisa por recuperar el poder porque persistía el temor a la guerrilla.

Nosotros sabíamos que estaba derrotada y que, en términos militares, había sido aniquilada, pero los políticos no lo sabían con certeza”, afirmó Videla.

Sus cinco años en el gobierno lo convirtieron en el presidente de facto que más tiempo ocupó el sillón de Rivadavia, en el marco de una larga etapa repleta de golpes militares que, afortunadamente, lleva ya treinta y siete años superada.

A pesar de que el aparato estatal fue loteado entre el Ejército, la Marina y la Aeronáutica, Videla afirmó que “la verdad es que durante esos cinco años hice prácticamente todo lo que quise. Nadie me impidió gobernar”.

Es cierto que hubo diferencias dentro de la dictadura sobre temas y casos puntuales, como, por ejemplo, el conflicto con Chile por las islas del canal de Beagle y la sucesión de Videla. Pero no hubo peleas en cuanto a la represión a las guerrillas. Para el propio Videla, la división entre “palomas” y “halcones” no valía para la Disposición Final: “Yo no creo que ese temperamento moderado mío haya evitado que hubiera más desaparecidos”.

Los factores de poder tenían su relevancia pero la dictadura de Videla reflejó el mayor grado de autonomía del Ejército y las Fuerzas Armadas con relación a la política y la sociedad.

En ese marco, el ex dictador me dijo que “los medios de comunicación fueron favorables al Proceso, sobre todo al inicio. No había problemas con la prensa: no podemos decir que la acción de los diarios impidiera hacer la guerra contra la subversión. Yo diría que no solo los medios sino todos los factores de poder estaban alineados en la guerra contra la subversión”.

“*Clarín*, *La Nación* y *La Razón* —agregó— tenían otro vínculo con nosotros, que era Papel Prensa; el gobierno había autorizado la compra de las acciones de los Graiver en esta empresa por parte de un grupo de

diarios. *La Prensa* no quiso entrar. Vimos la compra desde el punto de vista de salvar a una empresa que iba a producir un insumo estratégico, básico, que permitiría que el país ya no dependiera del papel importado. No buscábamos el apoyo político de esos diarios, no pensamos en eso en aquel momento”.

Sobre la Iglesia Católica, sostuvo Videla que “no era adicta a nosotros y teníamos nuestros encontronazos, pero, como institución, se manejaba con prudencia: decía lo que tenía que decir sin crearnos situaciones insostenibles. No nos lastimaba. En ese contexto, la relación fue muy buena”.

Su principal respaldo era monseñor Adolfo Tortolo, titular del Episcopado, vicario general de las Fuerzas Armadas y arzobispo de Paraná. Muy conservador, consideraba que la Argentina era y debía seguir siendo “una nación católica”, para lo cual promovía en forma militante la tradicional alianza entre la Iglesia y el Ejército.

Si el integrista Tortolo, su amigo y confesor, resultó un entusiasta impulsor del golpe, Videla encarnaba aquella unión entre la cruz y la espada en defensa de la Patria y de los valores “occidentales y cristianos”. Por un lado, nació y se crio en un regimiento en Mercedes, donde su padre hizo toda la carrera militar; por el otro, aun en la cárcel seguía siendo un católico que rezaba el rosario todas las tardes y los domingos asistía a misa y comulgaba, convencido de que había librado “una guerra justa en los términos de Santo Tomás; una guerra defensiva”.

Cuando lo entrevisté, Videla llevaba preso más de veinte años y se veía como una suerte de cruzado: “Creo que Dios nunca me soltó la mano. Me ha tocado transitar un tramo muy sinuoso, muy abrupto, del camino, pero estas sinuosidades me están perfeccionando a los ojos de Dios, con vistas a mi salvación eterna”.

Toda esa mezcla religiosa y política, sumada a la percepción de Videla y de la “familia militar” sobre el desafío de las guerrillas y el contexto anterior al golpe, relativizaban en su conciencia el peso que podía tener la presencia gritante de los desaparecidos.

“Ojo —me aclaró—, no estoy arrepentido de nada, duermo muy tranquilo todas las noches; tengo sí un peso en el alma, pero no estoy arrepentido de nada ni ese peso me saca el sueño, aunque me gustaría hacer una contribución para asumir mi responsabilidad de una manera tal que sirva para que la sociedad entienda lo que pasó y para aliviar la situación de militares que tenían menos graduación que yo”.

Dos meses después del golpe, el cardenal Raúl Primatesta reemplazó a Tortolo al frente de la Iglesia, que moderó su respaldo.

Entre los sectores que apoyaron al Proceso descolló el “establishment” económico, encarnado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que reunía a setecientas empresas y que cinco semanas antes del golpe cerró los negocios y las fábricas. Fue el primer paro patronal en la historia del país.

Encerrado de por vida, Videla no estaba nada contento con los empresarios: “Se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’ Era barato decir eso: ¡Mire el precio que tuve y que tuvimos que pagar!”.

A pesar del desgaste, en 1981, cuando Videla dejó la presidencia, todavía se hablaba de “una fuerza política que heredara al Proceso de Reorganización Nacional, a la que yo llamaba La cría del Proceso”, con él mismo como candidato a eventuales elecciones presidenciales.

Terminó siendo una fantasía que naufragó junto con el fracaso del plan económico, que agudizó las peleas y las traiciones entre los militares y los empujó a la guerra por las Malvinas contra Gran Bretaña y sus aliados — Estados Unidos y Francia, en primer lugar— para recuperar el poder que se les escapaba de las manos. Una causa noble convertida en una aventura nacionalista que sumó incluso al peronismo, a los sobrevivientes montoneros y al Partido Comunista, y terminó en una derrota tan previsible como dolorosa; el punto de quiebre de la dictadura, que hizo estallar la economía y destapó los crímenes y las desapariciones de miles de argentinos.

A los tumbos, como pudieron, los militares dejaron el gobierno en 1983 y fueron corridos a los cuarteles. A diferencia de sus vecinos brasileños, uruguayos y chilenos, no pudieron negociar la transición a la democracia y sus comandantes fueron rápida y ejemplarmente juzgados y condenados. También los jefes guerrilleros, aunque de una manera mucho más lenta, con menos entusiasmo público e incluso de la dirigencia económica.

La década de los 70 terminó allí, con sus sueños y sus pasiones ahogados por tanta violencia y tanta muerte, que, sin embargo, abrieron paso a una revalorización colectiva de la democracia y de los derechos humanos. No fue un milagro sino un largo aprendizaje; a la fuerza, sufrido, pero un cambio cultural e institucional que es el legado más valioso de aquellos años de plomo y sangre.

Anexo I

CUÁNTOS FUERON

Los dos últimos informes del Estado, elaborados durante el kirchnerismo, en 2006 y 2015, indican que las víctimas de la dictadura fueron entre 6415 y 6348 desaparecidos, y entre 743 y 952 asesinados. En total, entre 7158 y 7300 personas.

La lista original de víctimas, de la Conadep, se refería solo a la dictadura, pero luego fue ampliada hasta incluir a los muertos desde el 28 de junio de 1966. Ya está previsto que se extienda hasta 1955 porque ha sido autorizado por ley.

Los parientes de casi todas las víctimas fueron indemnizados con el equivalente a cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional, unos 220 mil dólares en los 90. Los criterios han sido muy laxos y hay numerosas irregularidades.

La matanza de la dictadura puede ser cuantificada mediante tres fuentes públicas: el *Nunca Más* de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de

Personas (Conadep), de 1984; la corrección de ese informe, publicado en 2006, y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), de septiembre de 2015.

Los números de esas tres fuentes son los siguientes:

- En el gobierno del radical Raúl Alfonsín y luego de ocho meses de trabajo, la Conadep señaló que hubo 8960 víctimas. Esa cifra sumaba las 7380 denuncias recibidas por esa comisión y los 1580 reclamos que ya habían sido formulados ante organismos específicos, nacionales e internacionales.
- Ese informe fue depurado y actualizado en el gobierno de Néstor Kirchner, y el resultado fue un nuevo *Nunca Más*, presentado en abril de 2006, en la Feria del Libro: 6415 desaparecidos y 743 víctimas de “ejecución sumaria”; 7158 en total.
- Días antes del final del segundo gobierno de Cristina Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos publicó el RUVTE en su sitio de internet. Elaborado en septiembre de 2015, creó conceptos, cambió criterios, canceló casos erróneos y sumó nombres nuevos. La conclusión: hubo 6348 desaparecidos y 952 víctimas de “asesinato”; 7300 en total.

Las cifras del informe de 2015 fueron difundidas al año siguiente por el nuevo gobierno, de Mauricio Macri, en respuesta al pedido de informes de una organización no gubernamental.

Las entidades de derechos humanos interpretaron que el Registro había sido elaborado por los funcionarios de Macri y salieron a criticarlo, pero, en realidad, era una herencia del tercer gobierno kirchnerista.

“Nos espanta, pero no perdemos las fuerzas. No sé de dónde han salido esas cifras y de dónde vienen las respuestas. Nunca se dio una cifra así. Es vergonzoso, nos humilla”, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Si bien las cifras de 2015 son muy similares a las de 2006, no pueden ser consideradas como definitivas ya que los listados dependen de las denuncias de parientes, amigos, camaradas, abogados y organizaciones de derechos humanos, que pueden ser presentadas en cualquier momento.

Un número definitivo, inapelable, solo podría surgir de la confesión de los jefes militares que perpetraron la matanza, pero hasta ahora no lo han hecho, lo cual, además de perpetuar el dolor por tantas víctimas, impide cerrar la polémica sobre su número total.

Por eso, se entiende que la actualización de nombres debe ser constante, para agregar casos que faltan y sacar los que no corresponden, que pueden haber sido incluidos por error o para cobrar de manera indebida la indemnización prevista por la ley para las víctimas del terrorismo de Estado.

De hecho, cuando el RUVTE fue difundido, en 2016, los funcionarios aclararon que ciento treinta y cinco casos todavía estaban siendo analizados para incluirlos o no.

Sin embargo, aun con la limitación de que no pueden ser considerados como definitivos, los dos informes elaborados durante el kirchnerismo nos permiten llegar a conclusiones bastante precisas:

- Los desaparecidos fueron entre 6348 y 6415.
- Y las víctimas de “ejecuciones sumarias o “asesinatos”, entre 743 y 952, aunque en estas categorías aparecen numerosas irregularidades o, al menos, casos muy discutibles.

- Total: entre 7158 y 7300 personas.

Un número escalofriante, una matanza enorme perpetrada desde el aparato estatal, que es el garante teórico de las leyes y de la vida de los ciudadanos.

Mientras la Conadep registró solo las víctimas de la dictadura —como correspondía al decreto de su creación— el nuevo *Nunca Más* de 2006 y el informe del RUVTE —de 2015— fueron mucho más allá, hasta 1969 y 1966, respectivamente. Aun así los números finales no variaron en forma significativa: 8327 y 8631.

Dado el tiempo transcurrido es improbable que las víctimas de la dictadura puedan llegar a la cifra de 30.000 a la que todavía se aferran los organismos de derechos humanos y la mayoría de los dirigentes políticos, encabezados por la izquierda y el kirchnerismo.

El emblemático monumento emplazado en el Parque de la Memoria, en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, contiene 30 mil placas, como si estuvieran esperando los nombres de más de 22 mil personas que algún día habrán de llegar.

No solo transcurrieron treinta y siete años desde el retorno a la democracia sino que, además del aliciente de las indemnizaciones, se han lanzado diversas propuestas para incentivar la presentación de denuncias. Pero el número sigue siendo el que parece debe ser.

¿Por qué entonces las entidades de derechos humanos continúan levantando la bandera de los 30.000 desaparecidos y ni siquiera admiten que esa cifra pase a tener un carácter más bien simbólico? ¿Por qué se enojan tanto con quienes cuestionan esa cifra aunque citen las fuentes que

corresponde, que son los registros del Estado? ¿Por qué califican de “negacionistas” a los críticos, igualándolos con quienes niegan el genocidio nazi, y quieren castigarlos con prisión de dos meses a dos años a través de un proyecto de ley que presentaron en 2019 y podría ser reflatado en cualquier momento, como el presidente Alberto Fernández admitió en febrero de 2020?

Uno de los argumentos es que las cifras menores a 30.000 son utilizadas para achicar la dimensión de la violación de los derechos humanos de la dictadura; para quitarle el carácter de “genocidio” que comparte con el Holocausto o, mejor dicho, la Shoá; la persecución y el exterminio de un millón y medio de armenios a principios del siglo pasado, y la ruralización forzada que provocó la muerte de un millón y medio de camboyanos entre 1975 y 1979.

Pero hace ya tiempo que está claro en el mundo que un genocidio no tiene que ver con la cantidad de muertos sino con la intención manifiesta de destruir a un grupo de personas por razones muy específicas.

El número mágico de los 30.000 parece haber surgido en Europa, donde los exiliados argentinos debían competir por la atención de la gente pero también de los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales con muchos otros refugiados latinoamericanos, que eran mejor aceptados por su pertenencia al socialismo o al comunismo mientras que a los peronistas se los miraba con recelo porque se los vinculaba a un derivado del fascismo.

En *La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina*, Graciela Fernández Meijide señaló que la cifra fue creada por los exiliados en Europa para lograr un mayor impacto en sus denuncias. Madre de un adolescente desaparecido, ella fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y secretaria de la Conadep.

El ex montonero Luis Labraña lo dijo con todas las letras: “Yo estaba exiliado en Amsterdam cuando las Madres llegan a Europa con una lista de 3700 o 4700 desaparecidos y piden ayuda. A los europeos, que tuvieron seis millones de judíos muertos en los campos de concentración de los nazis, les parecía que era poco y se complicaba el apoyo económico”.

“Por eso —agregó— se empezó a discutir en toda la colonia de argentinos exiliados si decíamos que eran 7 mil, 8 mil, 12 mil... En una de esas discusiones, yo simplemente dije: ‘¿Por qué no decimos 30 mil?’, y quedó. No fue una leyenda la de los 30 mil desaparecidos; fue una necesidad”.

En su libro, Fernández Meijide citó una entrevista con Eduardo Luis Duhalde, uno de los principales dirigentes en España de la filial de la Comisión Argentina de Derechos Humanos durante la dictadura, y luego funcionario kirchnerista de alto nivel.

“Si hablábamos de detenidos con vida aunque fuera en cárceles desconocidas, clandestinas, ante los organismos de derechos humanos internacionales no lográbamos el mismo eco que si denunciábamos un genocidio”, le confió Duhalde, según Fernández Meijide.

En aquellos años la definición de genocidio no estaba tan clara como ahora y se pensaba que uno de los requisitos debía ser un número rotundo de víctimas. Eso ya no sucede: en 1998, el Estatuto de Roma estableció que el genocidio se identifica por “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.

El Estatuto de Roma adoptaba así el límite impulsado cincuenta años atrás por la Unión Soviética: no había genocidio si se perseguía y mataba a un grupo por razones políticas.

Cito completo el artículo 6: “A los efectos del presente Estatuto se entenderá por ‘genocidio’ cualquiera de los actos mencionados a

continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Es decir que para el Estatuto de Roma la masiva violación a los derechos humanos de Videla y compañía no fue un genocidio porque no buscó aniquilar a “un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Como tampoco lo fueron las víctimas de la represión ilegal de Augusto Pinochet ni —yendo a la otra punta del espinel ideológico— los millones de muertos por la Gran Purga y las hambrunas de Stalin ni los centenares de fusilados del Che Guevara en la fortaleza La Cabaña al inicio de la Revolución Cubana.

En el caso argentino, algunos argumentan que también hubo razones raciales porque, si el detenido era judío, los militares se ensañaban con él debido a que muchos de los represores eran antisemitas. Y así lo prueban numerosos testimonios, pero el hecho de que fuera judío no constituía el único, ni siquiera el principal motivo de la captura, como sí ocurrió en la Shoá. Y ése es el carácter distintivo de un genocidio: no es un plan de exterminio por razones políticas, sean de derecha o de izquierda.

Eso en el plano del derecho penal internacional, donde los delitos tienen que estar bien tipificados para, cuando corresponde, ser juzgados por la Corte Penal, con sede en La Haya.

En el lenguaje coloquial se habla de genocidio también para incluir las matanzas por razones políticas; “genocidio” es una palabra muy fuerte, de un gran impacto mediático, y en ese sentido, muy útil en las disputas de

poder. Por un lado, precisamente, da cuenta de una gran cantidad de víctimas; por el otro, las purifica de cualquier contaminación con la política, con la lucha por el poder, como si hubieran sido perseguidas únicamente por su raza, su etnia, su nacionalidad o su religión; por último, traslada esa pureza irreproachable a sus defensores o patrocinadores vivos.

Hay otra causa por la cual se insiste tanto en la cifra de los 30.000: sus defensores temen que, si reconocen que fueron menos, deban explicar por qué tardaron tanto tiempo en admitir esa verdad y pierdan legitimidad como un actor que todavía tiene relevancia en la escena pública, aunque menos que antes por su pertenencia a una fuerza política determinada, el kirchnerismo.

Los 30.000 son una bandera que aún tiene su arrastre y sirven para mantener unido a un grupo de fieles bastante numeroso, minoritario pero muy movilizado y sonoro. Y para hacerse valer dentro del kirchnerismo, donde los líderes de los derechos humanos siempre han jugado el rol de valorado escudo ético —tanto defensivo como ofensivo— de Néstor y Cristina Kirchner. Es como si los derechos humanos dieran fueros; por ejemplo, otorgaran inmunidad frente a eventuales casos de corrupción.

En su libro, Fernández Meijide cuestionó que se siguiera hablando de los 30.000 por dos cuestiones: la verdad de los hechos y el uso político. “En homenaje a la verdad —escribió—, y sobre todo por respeto a las víctimas, resultaría deseable que se hiciera un esfuerzo para lograr una lista sujeta a la realidad de toda la información seria que hoy existe. Así se evitaría cualquier sospecha de la intención de utilizar el número de víctimas como herramienta de controversia política”.

En una entrevista, Fernández Meijide me contó que “por respeto a los desaparecidos, yo busco siempre y busqué siempre mientras estuve en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en la Conadep, el

nombre, el apellido; el máximo de identidad posible para encarnar a cada una de las víctimas. Todo lo que sean números englobantes demuestra la poca importancia que se les daba a las vidas, no importa quién los haga”.

Cuando su libro fue publicado por primera vez, en 2009, los dichos de Fernández Meijide fueron replicados con dureza por diversas figuras de los derechos humanos y el kirchnerismo, como la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y Duhalde, que era el secretario de Derechos Humanos.

En una carta pública, Duhalde la acusó de favorecer a la derecha, a quienes “justifican el obrar del terrorismo de Estado” y “se esfuerzan por disminuir la dimensión de la tragedia argentina”. Y defendió el número de 30 mil, que “no es arbitrario ni caprichoso”, ya que, según explicó, es “el producto de diversas variables”, entre ellas “la cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio; las estimaciones sobre el número de prisioneros, y la estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país”.

Por reflexionar de una manera crítica sobre este y otros temas vinculados a los derechos humanos también Héctor Schmucler fue acusado de “hacerle el juego al enemigo”, incluso durante su exilio en México. “Toto” Schmucler, padre de un joven secuestrado en La Plata, también llamado Pablo —como el hijo de Fernández Meijide—, era un sociólogo y semiólogo entrerriano radicado en Córdoba y uno de los principales referentes en estudios sobre la comunicación.

En su opinión, “nadie puede demostrar que hubo 30 mil desaparecidos. Todos los dirigentes experimentados saben que jamás se llegará a certificar esa cantidad de víctimas de la dictadura. Otros, los más jóvenes, entre los que se encuentran muchos militantes, ‘heredaron’ esa cifra y la aceptan como verdadera convirtiéndola en un lugar común. También hay militantes

que se aferran a esa cifra porque creen que, al aceptar que han sostenido una falsedad, se pueden poner en duda otros argumentos a los que adhieren sin vacilación alguna. Además, debe tenerse en cuenta que un pensamiento alimentado por un fuerte dogmatismo necesita de convicciones definitivas, firmes, simples y movilizadoras”.

Schmucler me dijo que todos habremos avanzado mucho cuando “aceptemos estas cuatro cosas:

1. No sea necesario, para afirmar la absoluta criminalidad de la desaparición, negar la eventual militancia, incluso en la guerrilla, de las víctimas.
2. Se comprenda que aun una persona que mató merecía un juicio justo y, por supuesto, no debía ser torturado.
3. Tengamos un listado exhaustivo de las víctimas.
4. Podamos debatir libremente sobre el pasado sin la impugnación de favorecer a la derecha o al enemigo”.

Por último, una razón práctica: averiguar qué pasó con cada uno de los desaparecidos o, al menos, dónde están sus restos mitigará el dolor de sus seres queridos, que no tienen ni un lugar donde llevar una flor. Y eso resulta imposible de lograr sin un listado lo más riguroso posible de las víctimas.

En lo que sí están de acuerdo los últimos dos registros públicos —de 2006 y 2015— y los organismos de derechos humanos es que ya no incluyen solo a las víctimas de la dictadura, como establecían los decretos de Alfonsín que en diciembre de 1983 crearon la Conadep y ordenaron los

juicios de los comandantes de las tres primeras juntas militares y de los jefes de Montoneros y el ERP.

Ya no es así: en silencio, sutilmente pero con un expresivo consenso multipartidario, el concepto de víctimas del terrorismo de Estado ha sido estirado para abarcar también a todos los caídos en la lucha por la liberación o la Revolución —a los “combatientes”—; no importa cuándo, cómo ni dónde murieron.

La leyenda del monumento del Parque de la Memoria expresa ese cambio: “La nómina comprende a las víctimas del terrorismo de Estado, detenidos-desaparecidos y asesinados, y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”.

Son apenas unos pocos renglones, pero necesitaron de una intensa tarea de lobby de los dirigentes de los derechos humanos, que duró siete años, desde que se colocó la piedra fundamental.

El monumento fue aprobado el 21 de julio de 1998, cuando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley número 46, que destinó un espacio en la franja costera para homenajear a “los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante los años 70 e inicios de los 80, hasta la recuperación del Estado de Derecho”.

La lista de homenajeados fue confeccionada por la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, integrada por legisladores, funcionarios y representantes de la Universidad de Buenos Aires y de los organismos de derechos humanos.

Las actas de esas reuniones revelan el protagonismo que fueron adquiriendo los liderazgos de los derechos humanos, según el relevamiento del profesor e investigador Hugo Vezzetti. En esa tarea militante, lograron ampliar el alcance original de la ley 46 al incluir los “nombres de las víctimas de los asesinados y de los caídos en combate”, según el discurso

de la Comisión leído en la inauguración del monumento, el 7 de noviembre de 2007, en un acto encabezado por el presidente Néstor Kirchner, con la asistencia de la presidenta electa Cristina Kirchner.

El resultado de tanto esfuerzo de lobby me sigue impresionando a pesar de que vengo escribiendo sobre el tema desde hace una década, cuando publiqué *Operación Primicia*. Por un lado, el texto eleva a las víctimas a la categoría de héroes —portaban los “ideales de justicia y equidad”—. Por el otro, queda claro que esos dirigentes simpatizan con la lucha armada, con los que “murieron combatiendo”.

¿Organismos de derechos humanos que defienden la muerte en emboscadas o atentados con bombas; los robos a bancos y empresas, y los secuestros de personas? “Era otro contexto”, justifican algunos. ¿Pero el contexto puede relativizar los valores de la vida y de la libertad en la defensa cabal de los derechos humanos?

En el plano nacional, la militancia de los organismos en favor de los “combatientes” amplió el concepto de víctimas del terrorismo del Estado hacia el pasado como si fuera un ente metafísico que se desplaza por los años anteriores sin distinguir entre gobiernos militares y democráticos. ¿Por qué circunscribir tanto heroísmo a la última dictadura? ¿Y los que murieron antes “por los mismos ideales de justicia y equidad”?

La conclusión obvia fue impulsar sucesivas leyes que ampliaron en forma progresiva la cantidad de víctimas, primero hasta 1969 abarcando también los cuatro gobiernos peronistas de 1973 a 1976; luego, a 1966, y por último al 16 de junio de 1955 para incluir a los más de trescientos muertos de un intento golpista contra el presidente Juan Perón. No siguieron porque al peronismo le resultó una herejía incluir también a las víctimas de los dos primeros gobiernos de Perón. Sin ese prurito, habrían llegado hasta los miembros de los pueblos originarios muertos por el

general Julio Argentino Roca en la llamada Conquista del Desierto aunque tal vez no se habrían animado con los indios liquidados en la Campaña al Desierto de don Juan Manuel de Rosas cuarenta y cinco años antes.

Además, la inclusión de las víctimas de 1955 no castiga ya la violación de los derechos humanos de un gobierno —Perón, de hecho, reprimió el alzamiento— sino a una escuadra rebelde de treinta y cuatro aviones de la Marina que mató a ciudadanos que caminaban tranquilamente por la Plaza de Mayo y sus alrededores. Un terrorismo de Estado bastante acotado, aunque asesino.

Fueron los legisladores peronistas —en especial, los kirchneristas— quienes canalizaron ese entusiasmo militante, limpiando con esas leyes la decisión orgánica del peronismo de impedir entre 1983 y 1987 que se investigara y se juzgara la represión ilegal de la dictadura. Mucho menos habían aceptado poner bajo la lupa los crímenes políticos durante los gobiernos peronistas anteriores al golpe de Estado.

El impulso fue del kirchnerismo, pero el consenso resultó casi unánime: las leyes que grabaron en el bronce de la historia a tantos nombres y hechos polémicos salieron con el aporte de todos los partidos, incluido el PRO.

El gran paso fue dado en abril de 2006, durante la Feria del Libro, cuando el gobierno de Néstor Kirchner presentó la versión “actualizada” del *Nunca Más*, que incorporó el Anexo II, con una lista de 1169 personas que figuraban como “desaparecidos” o víctimas de “ejecución sumaria” entre el 1° de enero de 1969 y el 24 de marzo de 1976.

De esa manera, el total de nombres pasó a 8327: 7158 de la dictadura, registradas en el Anexo I, y 1169 previas al golpe.

La Conadep había sido creada por el presidente Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 para investigar la desaparición de personas solo durante la dictadura. Por lo tanto, el Anexo II excedió el objetivo original de aquella comisión.

Para integrar la Conadep, Alfonsín designó a diez personalidades; una de ella fue la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien recordó que en la página 16 de la edición original del *Nunca Más* quedó claro que también recibieron denuncias “acerca de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe”, de las cuales no pudieron ocuparse porque estaban fuera de su alcance.

La Conadep, que fue encabezada por el escritor Ernesto Sabato, sugirió la creación del Archivo Nacional de la Memoria. Una de sus tareas debía ser analizar el listado de víctimas para corregir los errores y las omisiones debidos al poco tiempo que tuvieron. Kirchner creó esa repartición en diciembre de 2003, que, sobre la marcha, estiró el objetivo original.

El kirchnerismo hizo otras dos modificaciones. Por un lado, sumó un nuevo prólogo en el que rechazó en forma explícita la “teoría de los dos demonios”; es decir, la justificación del “terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificadora en la acción de particulares, frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables”.

¿Por qué? Porque el kirchnerismo sostenía que el prólogo original del *Nunca Más* planteaba la teoría de los dos demonios al señalar que “durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países”. Y agregaba: “A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo

infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.

No es un texto ciertamente complaciente con las guerrillas y no identifica a los combatientes como defensores de “los ideales de justicia y equidad”; por el contrario, afirma que cometieron delitos e hicieron terrorismo. Pero no iguala ambos “terrorismos”; afirma que la respuesta de las Fuerzas Armadas fue “infinitamente peor”. ¿Hay una defensa de la teoría de los dos demonios? No me parece, salvo que la mera crítica —fuerte, en este caso— a las guerrillas signifique igualarla al terrorismo de la dictadura.

La tercera modificación en el nuevo *Nunca Más* —también en silencio, como un hecho consumado— fue el agregado de dos conceptos nuevos, que se sumaron al de desaparición y sirvieron para calificar dos tipos de delitos que tampoco estaban previstos en el decreto de Alfonsín:

1. Desaparición forzada: cuando el cuerpo de la víctima no ha sido identificado ni entregado a sus familiares. La categoría “desaparición”, a secas, quedó para los casos en los que los parientes ya recuperaron los restos de la persona que estuvo desaparecida.
2. Ejecución sumaria: En un e-mail enviado el 9 de junio de 2010, la dirección de Gestión de Políticas Reparadoras de la Secretaría de Derechos Humanos me informó que esa categoría fue “decidida por las autoridades de la Secretaría en el momento de la actualización del anexo del *Nunca Más*”, y me detalló los quince casos en los que fue aplicada, que transcribo en forma textual:
 - Asesinato de detenidos desaparecidos/Inhumación clandestina.
 - Enfrentamiento.
 - Ejecución/Asesinato.

- Ejecución/Asesinato/Inhumación administrativa.
- Enfrentamiento fraguado/Asesinato de cautivos.
- Enfrentamiento fraguado/Asesinato de cautivos/Inhumación clandestina.
- Fallecimiento durante detención.
- Homicidio en el “Cordobazo”.
- Muerte por secuelas de tortura.
- Secuestro y asesinato.
- Asesinato de detenidos desaparecidos.
- Excesos en eventual defensa/Ejecución sumaria.
- Supuesto enfrentamiento.
- Tormento seguido de muerte.
- Víctima accidental en el marco del terrorismo de Estado.

Todos los casos imaginables cabían en esta categoría, desde guerrilleros ejecutados por sus propios compañeros o camaradas por traidores y delatores hasta muertos en combate mientras atacaban cuarteles o comisarías o cuando preparaban, transportaban o usaban una bomba.

De los 1169 nombres del Anexo II del *Nunca Más*, 526 correspondían a “Ejecución sumaria”. Un ejemplo de la laxitud del Anexo II fue la inclusión de Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, que, por el abecedario, encabeza la escueta nómina de 1970.

No se trata, claramente, de una víctima de “ejecución sumaria”: fue abatido a los 23 años en un tiroteo con la policía bonaerense en la pizzería La Rueda, en William Morris, el 7 de septiembre de 1970, apenas tres meses después de haber ejecutado al general Pedro Aramburu con una pistola 9 milímetros. Junto con él murió su amigo Carlos Gustavo Ramus

cuando quiso lanzar una granada contra los policías que le estalló en la mano; también Ramus figura en esa nómina.

Hay libros y hasta películas que cuentan cómo murieron. Vezzetti critica esas inclusiones porque “difícilmente pueda igualarse a Abal Medina o Ramus, muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, cuyos restos mortales fueron entregados y pueden ser honrados por familiares y compañeros, con la figura trágica de los desaparecidos, exterminados en una empresa sistemática que agregaba una segunda muerte, simbólica, al aniquilar los cuerpos y las huellas”.

Uno de los parientes de Abal Medina me aseguró que ellos se sorprendieron mucho cuando se enteraron de la inclusión en el *Nunca Más* de uno de los fundadores de Montoneros. “Nunca nos avisaron nada de eso, ni tampoco que figuraba en el monumento de la Costanera. Fernando no se reivindicaría jamás como una víctima de ejecución sumaria sino como un combatiente, que murió en un tiroteo”, me dijo la fuente, que pidió permanecer en el anonimato. “Iniciamos gestiones con Duhalde, a quien conocemos mucho, para retirar a Fernando, si bien de manera discreta; no lo pudimos conseguir”, agregó.

Los organismos vinculados a la guerrilla peronista no estaban dispuestos a renunciar a un “bronce” —un héroe— como Abal Medina. Claro que su inclusión provocó una pelea interna porque el inicio de la nueva lista de víctimas estaba fijado en 1970 y partía de un nombre demasiado asociado con Montoneros. Los organismos ligados a la izquierda protestaron y al final la nómina comenzó un año antes, en 1969.

En esa lista hay de todo: desde víctimas de bandas paraestatales como la Triple A hasta guerrilleros muertos en el asalto al cuartel de Formosa y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo caídos en combates en el monte tucumano —donde habían abierto un frente de lucha en marzo de

1974, durante la tercera presidencia de Perón— y en los ataques a las instalaciones militares de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo; todos ellos en 1974 y 1975, en el gobierno de Isabel Perón.

Como señalé en *¡Viva la sangre!*, también otros guerrilleros caídos en Córdoba en tiroteos con policías y militares figuraron en el nuevo *Nunca Más*, entre ellos:

- Liliana Raquel Gelín, muerta a los 21 años en un asalto al Banco de la Provincia de Córdoba, en 1970. La primera guerrillera fallecida en acción.
- José Sabino Navarro, el único jefe de Montoneros que provenía una familia pobre y peronista; sucedió a Abal Medina hasta que fue “despromovido” y enviado a Córdoba como castigo porque tenía una amante. Murió el 9 de agosto de 1971, luego de una espectacular persecución policial por la sierra cerca de Alta Gracia.
- Carlos Olmedo, el primer jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y sus compañeros Juan Carlos Baffi, Raúl Peressini y Agustín Villagra, que fallecieron el 3 de noviembre de 1971 en el llamado “Combate de Ferreyra” o “Combate de la Fiat”, en las afueras de la ciudad de Córdoba, luego del intento de secuestro del directivo de FIAT Luchino Revelli-Beaumont.
- Hugo Baretta, muerto “en combate”, según la revista *Evita Montonera*, número 3, durante un tiroteo con la policía el 24 de febrero de 1975, cuando viajaba en un auto a secuestrar al cónsul estadounidense John Patrick Egan. A los pocos días, un comando con su nombre capturó y luego mató a Egan.
- Hugo Therisod, 26 años, casado, estudiante del último año de Arquitectura, muerto durante un tiroteo luego del ataque del ERP a la

jefatura de la policía cordobesa, el 20 de agosto de 1975.

También la lista del monumento del Parque de la Memoria —el más emblemático del país— parte de 1969 y su número varía levemente porque va siendo actualizada, siempre en silencio, sin informar a los ciudadanos. Incorporan nombres nuevos y cancelan otros pero solo cuando saltan irregularidades muy evidentes, como los nombres de dos de los diez soldados muertos por los guerrilleros en el ataque al cuartel de Formosa. José Mercedes Coronel y Dante Salvatierra figuraban entre las víctimas del monumento, como afirmé en *Operación Primicia* en 2010. Los parientes no sabían nada y negaron haber cobrado las indemnizaciones reservadas para esas víctimas. Al tiempo, las dos plaquitas fueron retiradas sin que ningún funcionario explicara por qué habían sido incluidas ni, mucho menos, quiénes cobraron ese dinero.

La cifra del monumento es similar a la de los registros de 2006 y 2015. En la última consulta que hice, llegaba a 8717 nombres:

- 7664 correspondían a la dictadura;
- 981, a los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976;
- 72, a los gobiernos militares que se sucedieron entre 1969 y el 25 de mayo de 1973, casi catorce veces menos que en las presidencias peronistas que los reemplazaron.

Por su lado, el RUVTE —un programa creado en 2013— incorporó las víctimas desde 1966, cuando el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Arturo Illia, con un total, para esos diecisiete años, de 8631 personas, pero que ya no fueron consideradas “víctimas del terrorismo de

Estado” sino “víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino en el marco de la aplicación progresiva del plan sistemático de exterminio de personas perseguidas por razones políticas, o en hechos vinculados causalmente con este accionar”.

Tantas palabras para conceptualizar varios cambios más bien drásticos en el propósito original de la Conadep. Por un lado, para justificar el salto de un régimen político a otro, sin tener en cuenta las diferencias entre ellos, en especial entre los gobiernos peronistas y los militares, pero también dentro de estos últimos ya que igualan la dictadura de Videla con la del general Alejandro Lanusse, que para el ministro del Interior del Proceso de Reorganización Nacional, el severo general Albano Harguindeguy, había sido apenas “una dictablanda”.

Todos esos gobiernos fueron iguales, estaban animados por el mismo espíritu de exterminar a los luchadores de la liberación nacional o de la revolución socialista o comunista. El mismo plan, sistemático.

Por otro lado, la larguísima calificación pretendía avalar —más bien, disimular— la inclusión de los nombres polémicos del nuevo *Nunca Más*, que habían trascendido por mis libros y, en especial, por las meticulosas investigaciones del periodista y militar retirado José D’Angelo, quien en su libro *Mentirás tus muertos* reveló decenas de irregularidades.

Veamos algunos cambios específicos. Las Palabras Preliminares del informe de 2015 indican que los guerrilleros muertos en Formosa pasaron a ser considerados casos de “ejecución de prisioneros en eventual defensa” porque tras el ataque y la resistencia de los soldados se realizaron “actuaciones judiciales irregulares” que impedían saber qué fue lo que realmente había ocurrido allí. Sin embargo, la tarea del juez federal de Formosa, Leandro Santos Costa, fue muy rigurosa y el combate fue relatado con todos los detalles por la revista *Evita Montonera* en su edición de

octubre de 1975. El objetivo era muy claro: forzar la inclusión como víctimas de estos montoneros caídos en un combate franco.

Para esos casos y tantos otros, el RUVTE dejó de lado la categoría de “víctimas de ejecución sumaria” y adoptó otra, más neta y amplia: “víctimas de asesinato”, que abarcó desde “los decesos en el transcurso de operativos sin orden de autoridad competente” a “los abatidos en represión a accionar armado insurgente”.

Claro que hubo casos tan manifiestamente irregulares del *Nunca Más* de 2006 que no pudieron ser defendidos ni siquiera por los especialistas del RUVTE. Tal vez el más notable fue —también una denuncia de D’Angelo— la inclusión de Hugo Irurzún, cuyo nombre de guerra era *Capitán Santiago*. Irurzún ya no militaba en el ERP cuando fue muerto, horas después de haber disparado la bazooka que aniquiló el Mercedes-Benz en el que viajaba el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Eso ocurrió el 17 de septiembre de 1980 fuera del país, en Asunción del Paraguay. El nombre de Irurzún ya no apareció en 2015, aunque el informe no explicó por qué había sido incluido ni qué medidas habían sido tomadas con los funcionarios que habían autorizado la indemnización ya cobrada, presuntamente por sus familiares.

También fue eliminado el nombre de Fernando Rubén Haymal, conocido por su nombre de guerra *Valdés*, que el 2 de septiembre de 1975 fue muerto por Montoneros en Córdoba acusado de traición y delación. Dos jóvenes lo bajaron de un colectivo en el centro de la ciudad y lo metieron en un coche. Recorrieron una treintena de cuadras. En el barrio de Alta Córdoba, cerca del estadio del club Instituto, le dispararon dos balazos en el pecho, ataron una cadena a sus pies, abrieron una de las puertas y lo arrastraron por la calle con el Peugeot 404 blanco en marcha hasta que la cadena se rompió. El cadáver quedó tirado en el pavimento, la cabeza destrozada, la ropa sucia

de sangre y de tierra. La historia de Haymal vertebró mi libro *¡Viva la sangre!*

La viuda de Haymal y su abogado lograron el pago de 224 mil pesos el 25 de abril de 2002 gracias a un informe favorable que había sido elaborado dos años atrás por la Subsecretaría de Derechos Humanos encabezada por Diana Conti, luego diputada. Y por eso su nombre figuraba en el nuevo *Nunca Más*. ¿Por qué ese pago había sido autorizado? ¿Sancionaron a los funcionarios que lo aprobaron? Los especialistas del RUVTE tampoco dieron ninguna explicación.

El próximo paso del RUVTE debería ser incluir a los muertos a partir del 16 de junio de 1955, como establece la ley 26.564, aprobada el 25 de noviembre de 2009.

Comencé a escribir sobre las irregularidades en las listas oficiales de víctimas del terrorismo de Estado cuando me enteré de lo que sucedía con los guerrilleros muertos en el ataque al cuartel de Formosa. Puedo recordar bastante bien aquella tarde del 1° de agosto de 2009 en un hall del Hotel Internacional de Turismo, en el centro de la ciudad de Formosa.

“Pero ¿usted no se da cuenta de lo que pasó? ¿Cómo puede ser que los familiares de los guerrilleros muertos hayan cobrado tanto dinero mientras nosotros, que defendimos el cuartel, y nuestros hijos tengamos que vivir así, tan pobres; sin nada, sin ninguna ayuda del gobierno?”

El desahogo del flaco parado detrás de todos, los brazos cruzados, la gorra gris hasta las cejas, se escuchó fuerte y sonó mal, fuera de lugar, en un ambiente donde, si bien éramos muchos, todo se decía en voz baja, con esa suave elegancia en el contar que tienen los formoseños.

Sus compañeros —todos ellos ex soldados que impidieron el copamiento, en 1975— lo hicieron callar de inmediato. A mí también me chocó, ocupado como estaba en registrar cada una de esas vivencias para mi libro *Operación Primicia*.

Menos mal que le pregunté a qué se estaba refiriendo. Porque fue gracias a lo que me dijo Rogelio Mazacotte que me enteré que los guerrilleros muertos en aquel combate figuraban como víctimas del terrorismo de Estado y, por lo tanto, sus familiares habían cobrado la indemnización prevista para esos casos.

No tenía ni idea de eso. Igual, me vine con la duda; no le creí del todo, si bien sus compañeros compartían lo que Mazacotte afirmaba tan seguro. Mazacotte también me dijo que era albañil y que a veces “sentía” las heridas que recibió en aquel combate, dos en el estómago y una en un muslo. Pero que tenía que trabajar mucho porque no había alcanzado el grado de invalidez que le hubiera permitido recibir una pensión. Como casi todos los dieciséis heridos de aquel día.

En Buenos Aires, pronto comprobé que Mazacotte tenía razón y fue así que, tirando de ese dato clave, encontré que, mientras los parientes de cada guerrillero cobraron, en promedio, unos 224 mil pesos/dólares, los familiares de los “colimbas” —por el corre, limpia y baila que les tocaba en los cuarteles— muertos cobraban una pensión mensual miserable.

La comparación entre ambos pagos mostraba una asimetría evidente: de acuerdo con la tasa de interés que se tomara, para el Estado la vida de un guerrillero valía entre seis y siete veces más que la de un soldado conscripto, que estaba aquel día de guardia, cumpliendo con la ley.

¿Cuál es la vinculación entre los nombres que figuran en los informes sucesivos de las víctimas y las indemnizaciones de la ley 24.411, promulgada por el presidente Carlos Menem en 1994? Directa: la principal

fuelle de la gran mayoría de casos es el REDEFA, el Registro de Fallecidos creado por esa norma, que estableció un “beneficio extraordinario equivalente a cien veces el sueldo mensual más elevado de la administración pública nacional” para los herederos de los desaparecidos y de “toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”.

Los fundamentos del proyecto de ley y los discursos de los diputados y senadores indican que el objetivo era reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, incluso antes del golpe militar, pero no a los muertos provocados por la represión a la guerrilla realizada en democracia y dentro de la ley.

Es lo que me dijo el senador Eduardo Menem, que presidió el Senado en la sesión en la que se debatió y aprobó la ley, el 7 de diciembre de 1994: “El sentido era muy claro: reparar a todas las víctimas de la represión ilegal de los militares, incluso antes del 24 de marzo de 1976. Por ejemplo, en el caso de la Masacre de Trelew, en 1972. Y también a las víctimas de los grupos paramilitares, como la Triple A. Pero para mí no se debe aplicar a los ataques a cuarteles como el de Formosa porque, ante el ataque a un regimiento, en democracia, ¿cómo no se iban a defender los militares? Es absurdo pensar que no deberían haberse defendido”.

Según el artículo quinto de esa ley, “en el caso de aparición” de una persona “no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya ha sido percibido”. Eso también vale para el caso de eventuales errores en la aprobación de ese pago.

Para seguir con el ejemplo, en una primera instancia los reclamos de los abogados que patrocinaban a los parientes de los guerrilleros muertos en

Formosa fueron rechazados, con el argumento de que el fallecimiento “no se produjo en situación justificada legalmente”.

Eso ocurría también con muchísimos otros casos. La demanda creó la oferta. Para incluirlos, en 1997 se sancionó y promulgó la ley 24.823, con un artículo salvador, el sexto. ¿Qué decía? Que “en caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por la ley 24.411, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario o a sus causahabientes o herederos, conforme al principio de buena fe”.

Fue decisivo para esa ley el lobby del puñado de estudios jurídicos que se habían especializado en estos reclamos, que cobraban hasta el 20 por ciento de cada pago a los parientes de los muertos, como honorarios.

La ley 24.823 terminó siendo el origen común de la mayoría de los casos que no deberían haber sido incorporados nunca como víctimas del terrorismo de Estado. Ni sus parientes indemnizados.

Obviamente, es mucho dinero público el que está en juego, pero la secretaría de Derechos Humanos de la Nación nunca informó sobre esos pagos de manera oficial con el argumento de que incluyen “datos personales de carácter sensible”, cuya divulgación vulnera “el derecho a la intimidad y al honor” de los beneficiados.

Ese argumento tiene su validez, pero no despeja las sospechas generadas por la inclusión de tantos casos irregulares tan pobremente disimulados.

En realidad, bastaría con que los funcionarios brindaran solo los números de las indemnizaciones y de manera general, preservando la identidad de quienes cobraron.

De todos modos, los números globales ya se conocen: José D’Angelo y Pedro Güiraldes investigaron el tema para un libro que podría ser publicado el próximo año y encontraron que entre el 2 de enero de 1994 y el 30 de noviembre de 2015, el Estado pagó un total de 7907 “beneficios

extraordinarios” a los parientes de desaparecidos y víctimas de “ejecución sumaria” o “asesinatos” por delitos que se cometieron entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983.

Hacia el 30 de noviembre de 2015, cuando terminaba el segundo mandato de Cristina Kirchner, había casi 800 demandas en estudio.

Esos números coinciden con los registros de víctimas elaborados por el Estado en distintos años, que ya hemos visto.

¿Cuánto dinero es eso? D’Angelo y Güiraldes actualizaron los pagos por inflación, año por año; el ejercicio reveló que —siempre al 30 de noviembre de 2015— el Estado pagó 20.375 millones de pesos. Al cambio oficial, equivalían a 2111 millones de dólares.

OceanofPDF.com

Anexo II

LAS LISTAS DE VIDELA Y COMPAÑÍA

*No hay listas con el destino final de todos los desaparecidos.
Podría haber listas parciales, pero desprolijas.*

Videla, en Campo de Mayo, 2012.

*Hubo mucha lucha por izquierda. Nos creímos
omnipotentes.*

El ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, en su casa,
bajo arresto domiciliario, en 2011.

—¿Cuántos nombres había en esa lista?
—Alrededor de 8000.

Harguindeguy, en el Hospital Militar, en 2010.

Los números de víctimas de la dictadura —brindados por el Estado— están dentro del rango que dio Jorge Rafael Videla en *Disposición Final*, cuando dijo: “Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”. También señaló

que “se podrá discutir cuántos son”, pero la clave “no está en el número; está en el hecho”.

Además, las cifras públicas se acercan bastante a los “alrededor de ocho mil” nombres de la lista elaborada por el general Albano Harguindeguy en 1979, cuando era ministro del Interior, según me comentó, también en ese libro.

Cuando le pregunté por aquella lista de Harguindeguy, Videla contestó que “al final de mi gobierno se planteó el famoso problema de las listas. La verdad es que hubo varios intercambios de ideas con la Junta Militar sobre este tema”.

En aquel año, la Junta Militar estaba formada por el general Roberto Viola, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti. “En un momento —agregó—, fui a una reunión con la lista de Harguindeguy, pero era una ensalada porque estaba hecha en base a las denuncias sobre gente que estaba desaparecida y cuyo paradero se buscaba determinar, entre ella terroristas desertores que habían cambiado su identidad; terroristas ajusticiados por las propias organizaciones mediante un juicio secreto de guerra; terroristas ejecutados por las fuerzas del orden y que no se ‘blanqueaba’ su situación para mantener incertidumbre sobre su suerte, por razones operacionales; el borracho que se cayó al río de la Plata en una noche de fuerte tormenta; etcétera. Eso nos provocaba muchas dudas sobre la conveniencia de dar a conocer esas listas y cada vez que analizamos el tema no logramos acuerdo”.

“Por otro lado —completó—, siempre llegábamos a la conclusión de que esas listas eran la puerta a un debate que conducía a la pregunta final: ‘¿Dónde están los restos de cada uno?’, y no teníamos respuestas para ese interrogante con lo que el problema al dilatarse en el tiempo se agravaba día a día, y aún persiste”.

A esa altura, entre 1979 y 1981, en la etapa final de la dictadura de Videla, los desaparecidos se habían convertido en el principal tema político junto con las luchas dentro de las Fuerzas Armadas para imponer al sucesor del Presidente.

En una entrevista en el primer piso del Hospital Militar, donde estaba internado, el 22 de abril de 2010 Harguindeguy admitió que los desaparecidos “fueron el gran tema” en aquellos años debido a los planteos de los políticos convocados por el gobierno a un diálogo con todos los sectores, que terminaron potenciando los reclamos de los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. En 1979, el gobierno decidió elaborar una lista de desaparecidos para “tener algo de apoyo para hablar de los desaparecidos” en ese “diálogo político”, cuyo título fue “Nómina de las personas cuya desaparición ha sido denunciada”.

“Claro —señaló Harguindeguy—, yo no podía decir que estaban desaparecidos. Es un problema jurídico. No lo puedo decir hoy. ¿Por qué? Porque si está desaparecido, yo tengo que decir: ‘Ahí está el cuerpo’. Se recopilaron todos los pedidos ya hechos por personas desaparecidas y se abrieron oficinas para recibir denuncias, sobre las cuales el ministerio pedía datos a quienes podían haber intervenido por razones de espacio, tiempo, actividad. Y con eso se hacían las fichas; todo estaba en el archivo. La compilación de todos esos datos era la lista que yo tenía en la caja fuerte del ministerio”.

Harguindeguy aseguró que le dejó la lista “al ministro siguiente”, el general Horacio Liendo, y que no se quedó con ninguna copia porque “me continuaba un ministro de la misma fuerza, de la misma posición”.

—¿Cuántos nombres había en esa lista? —le pregunté.

—Alrededor de ocho mil.

—¿Había desaparecidos y muertos?

—Es muy difícil determinar quién es desaparecido, quién es el emigrado y quién es la prostituta que se fue a trabajar; el marido que se divorcia y se va; la nena que está en desacuerdo con el papá que quiere que se duerma a las 21 del sábado y domingo y desaparece...

El ex ministro del Interior detalló que su lista contenía el nombre y el apellido de la persona denunciada como víctima, y el lugar donde había sido vista por última vez.

Al año siguiente, ya en su casa, en silla de ruedas y mientras cumplía la pena de arresto domiciliario por delitos de lesa humanidad, Harguindeguy afirmó que “mi problema, como ministro del Interior, eran los desaparecidos; eran el problema más grande que tenía; después, estaban las grandes obras energéticas, algunas peleías entre provincias...”

—¿Qué habrá pasado con su lista de personas denunciadas como desaparecidas?

—Todo eso fue quemado por orden de [Reynaldo] Bignone, por un decreto de Bignone. Todo se quemó...

Harguindeguy insistió en que los desaparecidos eran la principal preocupación para todos los políticos que fueron invitados al diálogo político propiciado por el gobierno de Videla, que incluía al Partido Comunista. Todas esas conversaciones fueron grabadas pero también esas cintas resultaron quemadas; por lo menos, no pueden ser encontradas: “El único diálogo del que tengo la versión, porque la hice pasar a máquina, es de la reunión con [Ricardo] Balbín”.

—¿Y cómo fue?

—Fueron como tres horas. Estaba más o menos en la línea de todos: hay que esclarecer el problema de los desaparecidos.

Balbín era un legendario líder del radicalismo, aquel que fue uno de los enemigos preferidos de Juan Perón en sus primeros gobiernos, quien lo hizo

encarcelar tres veces; luego, en 1972, se reconciliaron en un abrazo histórico. Su adversario interno era Raúl Alfonsín, un dirigente más joven y ubicado a su izquierda, inspirado en la socialdemocracia europea. Alfonsín y Harguindeguy habían sido compañeros en el Liceo Militar General San Martín, eran amigos y, según el militar, se veían seguido, antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976: “Venía todas las semanas [al Ministerio del Interior]. En lo único en que centraba sus cuestiones era en los presos, los que estaban a disposición del Poder Ejecutivo, los desaparecidos. Se preocupaba por esa gente”.

De todos los jefes militares que entrevisté, Harguindeguy —ya fallecido— fue el único que admitió que “cometimos un grave error, la fuerza cometió un grave error, al lanzar la guerra contra la subversión en términos militares sin tener elementos suficientes para combatirla. ¿Qué significa no tener los medios? No teníamos el instrumento jurídico para detener un individuo, interrogarlo, pasarlo a un campo de prisioneros o de más; no lo teníamos, y entonces, ¿qué quedaba? Y bueno, una de las cosas que quedaba era la Disposición Final. Si nosotros hubiésemos tenido claridad, clarividencia para ver las consecuencias que podían tener las operaciones como se venían realizando... Nadie pensó... Era un poco lo que los franceses predicaban”.

En una entrevista anterior, con la periodista francesa Marie-Monique Robin, Harguindeguy había sido muy claro sobre por qué pensaba que, mientras en nuestro país los secuestros, las torturas, los asesinatos y la desaparición de los cuerpos habían derivado en una larga serie de juicios por delitos de lesa humanidad, en Francia resultaron técnicas legitimadas y aprobadas por la dirigencia y la sociedad en general. Tanto que los militares

que las aplicaron por primera vez en Argelia fueron amnistiados en 1962 y varios de ellos se convirtieron en escritores y profesores, y algunos hasta fueron nombrados en altos cargos en Defensa y resultaron elegidos al Parlamento.

“Sin duda que los desaparecidos fueron un error porque, si usted los compara con los desaparecidos de Argelia, es muy diferente: ¡eran finalmente los desaparecidos de otra nación; los franceses volvieron a su país y pasaron a otra cosa! Mientras que aquí cada desaparecido tenía un padre, un hermano, un tío, un abuelo, que siguen teniendo resentimiento contra nosotros, y esto es natural”, señaló.

Harguindeguy me dijo que “hubo mucha lucha por izquierda y por eso estoy preso, por eso está condenado Videla”, y que los militares se dieron cuenta del “error” cometido y —lo más grave— que ya no podían hacer nada para solucionarlo cuando vieron que los reclamos se extendían por todo el mundo y que, en la Argentina, unificaban a todos los políticos convocados al diálogo, de la derecha a la izquierda.

—¿Por qué piensa que se equivocaron?

—Yo siempre tengo una contestación para eso: falta de formación jurídica.

—Ah...

—Se creyeron omnipotentes. Nos creímos omnipotentes.

“Este problema —agregó— no tiene solución. ¡No-tie-ne-so-lu-ción! Van a ir llenando las cárceles con viejos de 70 a 100 años y ahí va a quedar, y van a ir muriendo, muriendo, muriendo, muriendo... Se intentó que los comandantes asumieran la responsabilidad; la han asumido y la asumen. ¿Qué pueden hacer más que decir: ‘Soy responsable de todo lo actuado en mi jurisdicción’ o ‘Todas las órdenes impartidas de mi jurisdicción las

impartí yo, soy el responsable’? ¿Qué pueden hacer? ¿Proponer un holocausto de todos los oficiales a partir de la promoción 73?”.

Pensándolo bien, una de las cosas que los jefes militares podrían hacer es reconstruir una lista con los nombres de las personas asesinadas cuyos cuerpos fueron desaparecidos, indicando el lugar donde quedaron esos restos. No los traería de vuelta a la vida, pero sería un buen gesto hacia los parientes, amigos y colegas de esos miles de víctimas; los ayudaría a moderar su pena, a completar su duelo; les daría un lugar donde honrarlos.

Muchos, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, piensan que la lista con todos los nombres de las víctimas no fue incluida en la quema de archivos ordenada por Bignone, el último dictador, en 1983, seis meses antes de las elecciones. Y que existe y permanece oculta en el país o en el exterior.

Pero tanto Videla como Harguindeguy aseguraron que no había ni podía haber un registro de todos los desaparecidos a nivel nacional porque los jefes de las zonas en las que estaba dividido el país decidían el destino de cada uno de los detenidos y no tenían la obligación de informar al jefe del Ejército.

Una sola lista no; varias listas sí: “No hay listas con el destino final de todos los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, me dijo Videla.

En la primera de las entrevistas que le hice, en octubre de 2011, señaló que estaba conversando con otros jefes militares también presos por delitos de lesa humanidad, en Campo de Mayo y en otras cárceles, para elaborar un documento con toda la información que tenían sobre los desaparecidos.

“Es ‘el’ tema presente, actual, que nos pesa como resabio de la guerra contra la subversión; el tema que ha quedado como herencia de esa guerra y

el tema que compromete el futuro de la Argentina. Quiero decir: no hay futuro si no hay concordia, y no hay concordia si no se ‘blanquean’ los hechos ocurridos; asuntos que hieren y que justifican los reclamos, válidos muchos de ellos aunque también hay especulaciones políticas sobre ellos”, se entusiasmó.

Tanta grandilocuencia quedó en la nada: en marzo de 2012, cuando estaba cerrando la serie de entrevistas, le volví a preguntar sobre ese “blanqueo”. Me contestó que había desistido por la negativa de algunos de sus camaradas, como Luciano Benjamín Menéndez, ex “amo y señor” de Córdoba y alrededores.

Seguía hablando de la necesidad de “un blanqueo de los hechos ocurridos en un diálogo social con la información que cada uno disponga para cerrar, por consenso, un pasado traumático”.

—¿Qué pueden aportar ustedes a ese diálogo?

—En este momento, nada. Es un tema del que hemos hablado mucho entre nosotros y lo seguimos haciendo. Siempre se nos ha preguntado por las listas de desaparecidos; eso ya no es una novedad porque las listas son las conocidas; habrá que depurarlas de casos que no corresponden, pero las listas de hecho están. El problema es que, a partir de ellas, se nos lleva a un final que no tiene respuesta, al menos en la mayoría de los casos: la pregunta final, definitiva, es dónde están los restos de cada uno de los desaparecidos. No hay respuestas. Habrá casos en que sí hay respuestas, pero no en todos, por lo cual es preferible nada para no sembrar desconfianza a partir de contradicciones. Y no hay respuestas en todos los casos por la misma modalidad [de la represión]. Las respuestas dependen de muchas personas, algunas de las cuales ya están muertas.

En *Disposición Final* mencioné esas idas y vueltas entre los propios jefes militares presos con la esperanza de que el gobierno kirchnerista o las

organizaciones de derechos humanos encontraran la manera de acceder a esa información clave para los parientes y amigos de las víctimas.

Y lo escribí en el Epílogo: “Si el gobierno tuviera la voluntad de investigar qué pasó con cada una de las víctimas de la Disposición Final, las inéditas palabras de Videla y de otros militares y ex militares le brindan pistas ciertas sobre dónde debería buscar: en primer lugar, en el jefe de cada una de las zonas en las que fue dividido el país y en sus ‘brazos’ operativo y de Inteligencia; en segundo lugar, entre los integrantes de la Comunidad de Inteligencia o Comunidad Informativa del lugar, esa decena de personas, aproximadamente, que decidía el destino de cada uno de los detenidos”.

No pasó nada de eso. Por el contrario, la reacción del gobierno fue trasladar a Videla y a otros once presos al penal de Marcos Paz, a una cárcel común, de máxima seguridad y más alejada de la Capital Federal. La señal para los represores y sus entornos fue muy clara: no tenían que hablar con los periodistas, no debían ya referirse a esos temas.

Tal vez la entonces Presidenta y sus aliados en los derechos humanos entendieron que la única manera de que los jefes militares brindaran esa información era a cambio de ventajas como la prisión domiciliaria y no estaban dispuestos a beneficiar a los autores de delitos tan aberrantes.

O quizás se sentían demasiado cómodos en el relato que habían logrado instalar, que incluía a los militares presos y mudos, sometidos a una serie continuada e infinita de juicios de lesa humanidad. O una mezcla de ambas razones.

En todo caso, Videla ya no habló y murió al año siguiente, al igual que Harguindeguy. Menéndez también murió, en 2018, a los 90 años y con el récord de condenas a cadena perpetua: trece; nunca confesó nada y siempre impidió o trató de impedir que otros hablaran.

Los jefes militares se van muriendo y con ellos también todos sus secretos.

OceanofPDF.com

Anexo III

LOS MUERTOS MENORES

El número de víctimas de los guerrilleros entre la “población civil” fue de 1094 muertos, 2368 heridos y 758 secuestrados.

Entre 1969 y 1979 se registraron 4380 atentados con bombas.

Informe del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).

Una nena de 3 años, María Guillermina Cabrera Rojo, fue la primera víctima de la guerrilla en la Argentina, mientras dormía con su familia y una bomba destruyó su casa, el 12 de marzo de 1960 a la madrugada.

Diario *Democracia* del 13 de marzo de 1960.

Ni bronce ni oro; los muertos por los grupos guerrilleros no son recordados en ningún monumento público y sus nombres no aparecen en las listas de ningún organismo del Estado. Sus parientes no han recibido

ninguna indemnización o resarcimiento y cargan con el estigma de llorar a personas que cometieron el error de morir en el bando equivocado.

Son muertos que se han quedado sin derechos humanos en un país tan generoso en muchos otros casos. Nada que objetar con las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura y a los nietos recuperados; por el contrario, es justo que el Estado los indemnice por los delitos de lesa humanidad cometidos en otros tiempos a través de un uso tan nefasto del aparato estatal. Otra cosa son las distorsiones progresivas en el concepto original de víctimas del terrorismo de Estado, como ya vimos.

También son justos los pagos a los llamados “presos políticos” —los detenidos en la dictadura— aunque es muy discutible que se extiendan a guerrilleros apresados y condenados por la justicia antes del golpe de Estado, durante el peronismo, por ataques, secuestros, atentados y muertes. Es muy difícil de justificar, en cambio, que, además, se hayan hecho acreedores todos ellos a una pensión mensual graciable, sin aportes, por un valor entre tres y cinco veces mayor al de la jubilación mínima. Al igual que las indemnizaciones a los exiliados, que resultaron asimilados a los “presos políticos” durante la dictadura por la Corte Suprema de Justicia incluso en el monto completo del beneficio. Y ya es absurdo que el oro público bendiga también a los hijos de los exiliados a través de sentencias judiciales que se clonan con el argumento de que la dictadura les impidió nacer en la Argentina. El derecho a haber nacido en el país de sus padres. Si, por ejemplo, un sueco o un británico que apenas balbucea el castellano y nunca pensó en vivir en el país de sus padres obtuvo esa recompensa, se supone que sea cuestión de tiempo que la Corte la extienda a sus hijos, a los nietos de los exiliados.

Por el contrario, los muertos de los grupos guerrilleros son invisibles para los gobiernos, el Congreso y el Poder Judicial. Debido a que murieron a

manos de jóvenes que profesaban nobles ideales, no hay victimarios y, por lo tanto, tampoco víctimas. Son muertos menores, de segunda clase, según lo han entendido todos los gobiernos democráticos —de derecha, centro e izquierda— que se han sucedido desde el retorno a la democracia, en 1983, se presume con el respaldo de una porción predominante de la opinión pública.

Una muestra más de la supremacía moral que se otorga a las guerrillas y a sus simpatizantes, que los blindan de tal manera que nadie parece en grado de preguntarles libremente por qué los mataron. Y si alguien les pregunta o les reclama, se arriesga a que inmediatamente lo vinculen con la derecha o que lo acusen de estar a favor de la teoría de los dos demonios.

Sin embargo, todas aquellas muertes menores causaron mucho dolor a sus familiares, amigos y colegas. Y más dolor provoca aún tanto olvido público, según los escasos libros que se dedicaron a contar cómo soportan esas pérdidas, entre ellos *Los otros muertos*, de Carlos Manfroni y Victoria Villarruel, y *El otro demonio*, de Jorge Martínez y Agustín De Beitia.

A pesar de la proliferación en el Estado de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una Secretaría de Derechos Humanos y numerosas subsecretarías y direcciones nacionales y a secas vinculados con esa temática, no existe ninguna nómina oficial sobre los muertos de las guerrillas. A nadie se le ocurrió, o nadie quiso o pudo hacerlo.

Creo que esa lista oficial debería ser elaborada de una vez por todas para, al menos, informar sobre tantos ciudadanos cuya seguridad no pudo ser protegida por el Estado, como era —y es siempre— una de sus obligaciones primarias.

Mientras esperamos esa lista del Estado, contamos con algunos pocos registros privados. El más completo fue realizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) —su presidenta es

Villarruel, también escritora—, que durante más de tres años examinó información publicada por cuatro diarios nacionales y diversos libros así como revistas de los grupos guerrilleros.

El periodo analizado fue acotado a once años —del 1° de enero de 1969 al 31 de diciembre de 1979— porque sus autores consideraron que fue “la etapa más cruenta de los ataques terroristas y en la que presumiblemente se podían identificar con mayor facilidad a las organizaciones responsables de los crímenes”.

De esa manera, la investigación dejó afuera a las víctimas anteriores, que comenzaron el 12 de marzo de 1960 con una bomba que explotó en La Lucila en la casa del mayor David René Cabrera. El primer muerto de la guerrilla fue una nena de tres años, María Guillermina Cabrera Rojo, que estaba durmiendo junto a sus padres y tres de sus hermanitos. Uno de ellos, Gerónimo, de cinco años, resultó gravemente herido. El atentado fue reivindicado por los Uturuncos, una mezcla precoz de peronistas radicalizados y marxistas guevaristas.

El informe se refiere solo a la “población civil”, a las personas que, según los Convenios de Ginebra, “no participan directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención, o por cualquier otra causa”.

No están incluidos los militares y policías que cayeron en tiroteos en la calle o en el ataque a cuarteles y comisarías. Por ejemplo, no cuentan los muertos en la defensa del cuartel de Formosa, en 1975.

Sumergido en tanta afonía pública sobre esta cuestión, uno podría pensar que, con semejantes recortes metodológicos, los muertos debieron haber sido más bien escasos.

Salvo algunos pocos casos más o menos conocidos: el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci; el teniente general Pedro Aramburu; la estudiante Paula Lambruschini; el ex ministro Arturo Mor Roig; el capitán Humberto Viola y su hija, María Cristina, de tres años; los profesores Jordán Bruno Genta y Carlos Sacheri; el juez Jorge Quiroga; el coronel Argentino del Valle Larrabure y el coronel Jorge Ibarzábal.

Error: aun así, el número de víctimas de la “población civil” resulta apabullante: 1094 muertos, 2368 heridos y 758 secuestrados.

Para tener una dimensión de estas cifras, se puede recordar que la organización terrorista vasca ETA mató a 864 personas pero en cincuenta años, entre 1961 y 2011. En la cuarta parte de ese tiempo, Montoneros, el ERP y otros grupos menores liquidaron a 230 personas más.

En total, las víctimas por delitos cometidos por los grupos guerrilleros en aquellos once años fueron 17.382, desde amenazas y extorsiones hasta robos y daños colaterales.

Los datos más sustantivos son los siguientes:

- 29 niños murieron, 79 resultaron heridos y 34 fueron secuestrados; total: 142.
- 4380 atentados con bombas: 1600 contra personas físicas y 2780 contra personas jurídicas.
- 145 empresarios víctimas: 12 muertos, 5 heridos y 128 secuestrados. Nombres conocidos, como los hermanos Jorge y Juan Born, Gregorio Manoukian, Enrique Pescarmona, Oberdan Salustro, Carlos Pulenta, Raúl Minetti y Víctor Samuelson, y tantos dueños de pequeñas y medianas empresas.
- 1756 militares y policías víctimas, sin contar a quienes murieron o fueron heridos en combate: 653 muertos, 1069 heridos y 34

secuestrados. Los de mayor graduación entre los muertos: Aramburu y los generales Juan Carlos Sánchez y Cesáreo Cardozo.

- 215 sindicalistas con algún tipo de agresión grave. Uno de los grupos más atacados por los guerrilleros.
- 50 muertos en Tucumán, donde en marzo de 1974 el ERP instaló un frente rural: 31 militares y policías, y 19 civiles. Sin contar, claro, a los muertos en enfrentamientos.

Muchas víctimas para que sigan tan ocultas.

OceanofPDF.com

Epílogo

EL LEGADO

La historia carga con la responsabilidad de alimentar la memoria, pero su obligación es la verdad.

El desaparecido no es el “no muerto” sino el privado de la muerte.

El cortejo fúnebre no puede regresar del cementerio porque la fosa está vacía: no es posible el duelo, que exige enterrar un cuerpo; ni es posible la cólera, que requiere señalar a un responsable de asesinato.

Héctor Schmucler, en escritos recopilados en *La memoria, entre la política y la ética*, 2020.

Los otros mataban, pero los “nuestros” también mataban. Hay que denunciar con todas nuestras fuerzas el terrorismo de Estado, pero sin callar nuestro propio terrorismo. La verdad y la justicia deben ser para todos.

Oscar del Barco, en la revista *La Intemperie*, en 2004.

La Argentina emerge de los 70 como un país irrompible a pesar de tanto empeño en una violencia colosal, que se mide no solo por la cantidad de víctimas de todo tipo sino también por los medios utilizados, la desaparición de personas en primer lugar.

El ex dictador Jorge Rafael Videla no podía morir sin explicar en detalle el método de la Disposición Final, y lo hizo. Su confesión nos aclaró muchísimas cosas, aunque sigue siendo difícil de comprender por qué apelaron a tanta crueldad.

¿Cómo reflexionar sobre el propio dolor causado por un método como ése? El intelectual Héctor Schmucler lo hizo. “Pienso —escribió en 1988— que si pudiera registrar por ejemplo: ‘a mi hijo, Pablo, lo mataron el 28 de enero de 1977 y su cuerpo fue sepultado en un cementerio’, sería posible reconocer un camino hacia la calma. Cuando la muerte solo es sospecha, pierde grandeza; desdibuja la vida”.

Y todavía más: “El desaparecido no es el ‘no muerto’ sino el privado de la muerte. El cortejo fúnebre no puede regresar del cementerio porque la fosa está vacía: no es posible el duelo, que exige enterrar un cuerpo; ni es posible la cólera, que requiere señalar un responsable de asesinato”.

Las palabras de Schmucler son muy valiosas también porque mantuvo una posición crítica no solo sobre la violencia política —incluida la de Montoneros, donde peleaba su hijo— sino también acerca de la actitud de los principales dirigentes de los derechos humanos.

Por ejemplo, ya en 1979, en el exilio en México, criticó el uso de la cifra de los 30.000 desaparecidos: “No es necesario inflar las cifras para señalar el horror. Seguramente no es verdad que existen 30.000 desaparecidos en la Argentina, pero 6 o 7 mil es una cifra pavorosa”.

Destaco a Schmucler, fallecido en 2018, porque siempre defendió la preminencia de la verdad en la tarea intelectual; en la historia de los 70,

frente a su gran adversaria: la memoria, que sigue ganando ampliamente la batalla en la política y en los medios de comunicación; supongo que también en la sociedad.

“La historia carga con la responsabilidad de alimentar la memoria, pero su obligación es la verdad. La memoria siempre es selectiva”, escribió sobre un tema que parecía desvelarlo.

La verdad, sobre todo en los temas que la corrección política se empeña en tapar. Dos ejemplos de la prédica de Schmucler:

- “Negar la guerra interna que tuvo a la guerrilla como protagonista puede tener validez de alegato jurídico, pero clausura la posibilidad de ver el camino recorrido, de salir de la confusión”.
- “Todos saben que Rodolfo Walsh fue un militante montonero y que por su militancia fue secuestrado y asesinado. ¿Por qué resulta incómodo reconocerlo?”.

La memoria golea a la historia y ése no es un resultado trivial. No: esa supremacía tiene consecuencias en la política, en las relaciones de poder, porque vencen en el presente quienes muy gustosos se han designado herederos de los “ideales” de las víctimas de la dictadura, además de sus patrocinadores en los organismos de derechos humanos y en la política partidaria.

Obviamente, Schmucler fue atacado desde esas trincheras por “hacerle el juego a la derecha”. Como su gran amigo, el filósofo, poeta y ensayista Oscar del Barco, quien con una simple carta de lectores publicada en una revista cordobesa, *La Intemperie*, provocó en diciembre de 2004 un intenso debate en la izquierda.

“No existe —afirmó Del Barco— ningún ‘ideal’ que justifique la muerte de un hombre, ya sea del general Aramburu, de un militante o de un policía. El principio que funda toda comunidad es el *no matarás*. *No matarás* al hombre porque todo hombre es sagrado y cada hombre es todos los demás. Siempre los asesinos, tanto de un lado como del otro, se declaran justos”.

La carta de Del Barco hizo ruido porque metió el dedo en las llagas de unos y otros. Por un lado, señaló que “los otros mataban, pero los ‘nuestros’ también mataban. Hay que denunciar con todas nuestras fuerzas el terrorismo de Estado, pero sin callar nuestro propio terrorismo. La verdad y la justicia deben ser para todos”. Un palo para la izquierda, sector al que pertenece el filósofo; tanto que él también respaldó la lucha armada y por eso la carta es una autocrítica severa de sus posturas en los 70.

Y un palo para la derecha: “Al decir esto no pretendo justificar nada ni decir que todo es lo mismo. El asesinato, lo haga quien lo haga, es siempre lo mismo. Lo que no es lo mismo es la muerte ocasionada por la tortura, el dolor intencional, la sevicia. Estas son formas de maldad suprema e incomparable”.

Una reflexión en la línea del “mal radical” de Hannah Arendt, del “mal absoluto”, que, por más que se lo analice del derecho y del revés, permanece fuera de la comprensión humana.

Tanta violencia política provocó demasiados muertos y heridos, por citar las consecuencias de mayor gravedad. Y una gran asimetría en las decisiones de los gobiernos de la democracia porque las víctimas de los grupos guerrilleros ni siquiera han sido registradas por el Estado, que debía resguardarlas también a ellas. Ni, mucho menos, fueron indemnizados los parientes de esos muertos. El sufrimiento ha sido monopolizado por un solo sector.

De los 70, también hemos salido más pobres y más desiguales, lo cual es una verdadera paradoja: la revolución socialista sedujo a tantos precisamente cuando nuestro país atravesaba una época de intensa actividad productiva, sin desempleo y con una pobreza ínfima, que se calculaba en el 4 por ciento. En aquella distribución del ingreso, los trabajadores se quedaban con casi el 50 por ciento de la riqueza producida.

Sin embargo, a pesar de todo, no solo sobrevivimos sino que la tragedia de los 70 terminó fortaleciendo a la democracia liberal, que era tan despreciada por unos y otros. Tal vez por descarte o por hartazgo, pero emergió muy fuerte, al punto que permitió atravesar a fines de 2001 una de las crisis más dramáticas de la historia.

Junto con esa revalorización de la democracia y sus instituciones, los argentinos dejaron de considerar a la violencia como una opción política; la muerte ya no es aceptada como un recurso para dirimir las cuestiones de poder; de allí, el novedoso aprecio por los derechos humanos, la vida en primer lugar.

La democracia liberal y los derechos humanos han sido dos instrumentos muy potentes para lograr progreso y felicidad en tantos países. Los medios ya los tenemos; ahora falta que logremos también esos fines. Para eso, un requisito clave: conocer toda la historia reciente con el objetivo de evitar la vuelta a los 70. Ese pasado no debería ser nuestro futuro.

FUENTES

INTRODUCCIÓN

Tzvetan Todorov en *El País*, de España, el 7 de diciembre de 2010. Mario Paoletti en *Antes del Diluvio*, página 169. Héctor Schmucler en una carta a la revista *La Intemperie* recopilada en Belzagui, Pablo René (comp.): *No matar. Sobre la responsabilidad*, página 82. Jon Lee Anderson en *Página 12* del 25 de noviembre de 2009.

CAPÍTULO 1

El ataque de Montoneros al cuartel de Formosa y la vida de Roberto Mayol en mi libro *Operación Primicia*. El homenaje en la UNL en *Operación Primicia*, páginas 199 y 200. Jorge Pedraza en *Operación Primicia*, página 200. David Cabrera Rojo en *Operación Primicia*, páginas 196 y 197. Luis Mattini en *¡Viva la sangre!*, página 45. Ciro Bustos en su libro *El Che quiere verte*, páginas 314 y 463. Agustín Tosco en un acto el 8 de julio de 1973. El Cordobazo en *¡Viva la sangre!*, capítulo 14. Mario Firmenich en Felipe Pigna: *Lo pasado pensado*, páginas 251 y 285. Carlos Yanicelli en *¡Viva la sangre!*, página 272. Luis Mattini en *¡Viva la sangre!*, página 273. Los montoneros cordobeses en *¡Viva la sangre!*, capítulo 12. El rol de la Iglesia Católica en la formación de la guerrilla peronista en *¡Viva la sangre!*, capítulo 13. Ignacio Vélez en *Lucha Armada en la Argentina*, número 2, páginas 4 a 25, y el diario *Miradas al Sur* del 4 de julio de 2010.

José Gaido en *¡Viva la sangre!*, páginas 298 a 303. La dictadura de Juan Carlos Onganía en *¡Viva la sangre!*, páginas 300 a 303.

CAPÍTULO 2

La cambiante relación entre Juan Perón y Montoneros en *Operación Traviata*, capítulos 13 al 17; *¡Viva la sangre!*, capítulos 15 y 16, y *Operación Primicia*, capítulo 12. Perón y su rol en su libro *Manual de Conducción Política*, páginas 379 a 382. Roberto Perdía en entrevista con el autor y en su libro *La otra historia*, páginas 135, 139, 143 y 144. Alejandro Peyrou en entrevista con el autor.

CAPÍTULO 3

El asesinato de José Rucci en *Operación Traviata*. La pelea de Perón con Montoneros en *Operación Traviata*, Prólogo y capítulos 15 al 17; *¡Viva la sangre!*, capítulos 15 y 16, y *Operación Primicia*, capítulo 12. Perón en su libro *Manual de Conducción Política*, página 36. Carlos Leyba en su libro *Economía y política en el tercer gobierno de Perón* y entrevista con el autor. Antonio Cafiero, Osvaldo Papaleo y Ramón Canalis en entrevistas con el autor. Carlos Seara en su libro con Pedro Ramón Cossio: *Perón: testimonios médicos y vivencias (1973-1974)*, página 67 y entrevista con el autor.

CAPÍTULO 4

La situación en 1975 en *Operación Primicia*, capítulos 11, 14, 15 y 16, y *Disposición Final*, capítulos 5 a 8. Robert Cox en entrevista con el autor. Andrew Graham-Yooll en su libro *Tiempo de tragedias y esperanzas, cronología histórica 1955-2005, de Perón a Kirchner*, páginas 769 a 805. Héctor Fautario en entrevista con el autor. El curso de Montoneros en

Lucha Armada en la Argentina, número 10, páginas 143 y 144. Juan Gasparini en su libro *Montoneros, final de cuentas*, páginas 83 y 89 a 92.

CAPÍTULO 5

Cómo se gestó el golpe de 1976 en *Disposición Final*, capítulos 7 y 8, y *Operación Primicia*, capítulos 14 a 16. Roberto Perdía, Julio Bárbaro y Antonio Cafiero, en entrevistas con el autor. Julio González, en su libro *Isabel Perón. Intimidades de un gobierno*, páginas 306 a 313 y 431 a 437, y entrevista con el autor. Héctor Fautario y Albano Harguindeguy en entrevistas con el autor.

CAPÍTULO 6

La represión durante la dictadura en *Disposición Final*, Introducción y capítulos 1, 2, 3, 4, 9 y 11. Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy en entrevistas con el autor. Emilio Massera en el libro de María Seoane y Vicente Muleiro: *El dictador*, páginas 254 y 255.

ANEXO I

Los números de las víctimas de la dictadura y de los gobiernos anteriores, *Disposición Final*, Introducción; *Operación Primicia*, capítulo 9, y *¡Viva la sangre!*, capítulo 7. El RUVTE, en <https://www.argentina.gob.ar/sitiosdememoria/ruvte/informe>. Estela de Carlotto en la Agencia Paco Urondo, el 8 de noviembre de 2016. Graciela Fernández Meijide en *La historia íntima de los derechos humanos*, páginas 121 a 125, y en entrevista con el autor. Albano Harguindeguy y Héctor Schmucler en entrevistas con el autor. La tarea de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Hugo Vezzetti: *Sobre la violencia revolucionaria*, páginas 207 a 215. Magdalena Ruiz

Guiñazú en *Operación Primicia*, página 204. Rogelio Mazacotte y Eduardo Menem en entrevistas del autor. Las irregularidades en los listados de las víctimas del terrorismo de Estado en José D'Angelo: *Mentirás tus muertos*; Hugo Irurzún en las páginas 275 a 293. Las indemnizaciones en José D'Angelo y Pedro Güiraldes en un libro de próxima publicación.

ANEXO II

Las listas de los jefes militares en *Disposición Final*, capítulo 4. Albano Harguindeguy en entrevistas con el autor.

ANEXO III

El informe del CELTIV en Carlos Manfroni y Victoria Villarruel: *Los otros muertos*. Las leyes y resoluciones que benefician a víctimas de la dictadura, nietos recuperados, “presos políticos” y exiliados en el sitio www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/leyesreparatorias. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el monto de los beneficios a los exiliados y la extensión a sus hijos en *Clarín* del 8 de octubre de 2019 y *La Nación* del 16 de septiembre de 2014.

EPÍLOGO

Héctor Schmucler en *La memoria, entre la política y la ética*, páginas 56, 89, 96, 143, 175 y 501. Oscar del Barco en su carta de lectores a *La Intemperie*, de diciembre de 2004.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuña, Carlos Manuel: *Los traidores*, Liber Liberat, Buenos Aires, 2012.
- Andersen, Martín: *Dossier secreto*, Planeta, Buenos Aires, 1993.
- Anguita, Eduardo, y Caparrós, Martín: *La Voluntad*. Tomos 3 / 1973-1974 y 4 / 1974-1976, Booket, Buenos Aires, 2006.
- Bárbaro, Julio: *1973, el regreso del General*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 2013.
- Baschetti, Roberto: *Documentos*, volúmenes I y II, De la Campana, La Plata, 1997.
- Baschetti, Roberto: *La memoria de los de abajo*, volúmenes 1 y 2, De la Campana, La Plata, 2007.
- Belzagui, Pablo René (comp.): *No matar. Sobre la responsabilidad*, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2008,
- Bonasso, Miguel: *Diario de un clandestino*, Planeta, Buenos Aires, 2000.
- Bufano, Sergio, y Lotersztain, Israel: *Evita Montonera*, Ejercitar la memoria editores, Buenos Aires, 2010.
- Bustos, Ciro: *El Che quiere verte*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 2011.
- Cafiero, Antonio: *Desde que grité: ¡Viva Perón!*, Pequén Ediciones, Buenos Aires, 1983.
- Calveiro, Pilar: *Política y/o violencia*, Norma, Buenos Aires, 2005.
- Celesia, Felipe, y Waisberg, Pablo: *Firmenich*, Aguilar, Buenos Aires, 2010.

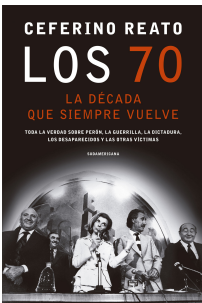
- Conadep: *Nunca Más*, Eudeba, Buenos Aires, 1992.
- Conadep: *Nunca Más y sus anexos I y II*, Eudeba, Buenos Aires, 2006.
- Cossio, Pedro Ramón, y Seara, Carlos: *Perón, testimonios médicos y vivencias (1973-1976)*, Lumen, Buenos Aires, 2006.
- D'Angelo, José: *Mentirás tus muertos*, El Tatú Ediciones, Bella Vista, 2015.
- Daverio de Cox, Maud, y Wilde, Eduardo, G.: *Salvados del infierno*, Gofica Editora, Salta, 2001.
- Di Stéfano, Roberto, y Zanatta, Loris: *Historia de la Iglesia argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 2009.
- Di Tella, Guido: *Perón-Perón*, Sudamericana, Buenos Aires, 1983.
- Fernández Meijide, Graciela: *La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 2009.
- Ejército Argentino: *Código de Justicia Militar*, Instituto Geográfico Militar, Buenos Aires, 1992, y *Régimen Funcional de Logística*, Instituto Geográfico Militar, Buenos Aires, 1995.
- Fraga, Rosendo: *Ejército: del escarnio al poder (1973-1976)*, Sudamericana/Planeta, Buenos Aires, 1988.
- Gasparini, Juan: *Montoneros, final de cuentas*, De la Campana, La Plata, 2005.
- Gillespie, Richard: *Soldados de Perón*, Sudamericana, Buenos Aires, 2008.
- González, Julio: *Isabel Perón, intimidaciones de un gobierno*, El Ateneo, Buenos Aires, 2007.
- Gorriarán Merlo, Enrique: *Memorias, de los Setenta a La Tablada*, Planeta/Catálogos, Buenos Aires, 2003.
- Graham-Yooll, Andrew: *Tiempo de tragedias y esperanzas*, Ediciones Lumiere, Buenos Aires, 2006.
- Gramsci, Antonio: *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984.

- Grassi, Ricardo: *Periodismo sin aliento*, Sudamericana, Buenos Aires, 2015.
- Gutman, Daniel: *Somos derechos y humanos*, Sudamericana, Buenos Aires, 2015.
- Kvaternik, Eugenio: *El péndulo cívico militar*, Instituto Torcuato Di Tella/Editorial Tesis, Buenos Aires, 1990.
- Lanusse, Lucas: *Cristo revolucionario, la Iglesia militante*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 2007.
- Lanusse, Lucas: *Montoneros, el mito de sus 12 fundadores*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 2007.
- Lewinger, Jorge, y Chaves, Gonzalo: *Los del 73*, De la Campana, La Plata, 1998.
- Linz, Juan José: *La quiebra de las democracias*, Alianza Universidad, Madrid, 1987.
- Lucha armada en la Argentina*, año 1, número 2, marzo/mayo 2005; año 2, número 6, mayo/julio 2006, y año 3, número 8, 2007, Buenos Aires.
- Manfroni, Carlos: *Montoneros, soldados de Massera*, Sudamericana, Buenos Aires, 2012.
- Manfroni, Carlos, y Villarruel, Victoria: *Los otros muertos*, Sudamericana, Buenos Aires, 2014.
- Mattini, Luis: *Hombres y mujeres del PRT-ERP*, De la Campana, La Plata, 2007.
- Mattini, Luis: *Los Perros*, Peña Lillo y Ediciones Continente, Buenos Aires, 2006.
- Massot, Vicente: *Matar y morir*, Emecé, Buenos Aires, 2003.
- Méndez, Eugenio: *Confesiones de un Montonero*, Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1985.

- Morello, Gustavo: *Cristianismo y revolución*, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 2003.
- Muleiro, Vicente: *El golpe civil*, Planeta, Buenos Aires, 2011.
- Novaro, Marcos: *Cables secretos*, Edhasa, Buenos Aires, 2011.
- Novaro, Marcos, y Palermo, Vicente: *La dictadura militar 1976/1983*, Paidós, Buenos Aires, 2011.
- Martínez, Jorge, y De Beitia, Agustín: *El otro demonio*, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2016.
- Paoletti, Mario: *Antes del Diluvio*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1997.
- Perdía, Roberto: *La otra historia, testimonio de un jefe montonero*, Grupo Agora, Buenos Aires, 1997.
- Perón, Juan: *Manual de Conducción Política*, CS Ediciones, Buenos Aires, 2005.
- Pigna, Felipe: *Lo pasado pensado*, Planeta, Buenos Aires, 2005.
- Poder Ejecutivo Nacional: *El terrorismo en la Argentina*, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1979.
- Quiroga, Hugo, y Tcach, César (comps.): *Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia*, Homo Sapiens, Rosario, 2009.
- Reato, Ceferino: *Disposición Final*, edición definitiva, Sudamericana, Buenos Aires, 2016.
- Reato, Ceferino: *Operación Primicia*, Sudamericana, Buenos Aires, 2010.
- Reato, Ceferino: *Operación Traviata* (Edición ampliada y corregida), Sudamericana, Buenos Aires, 2009.
- Reato, Ceferino: *¡Viva la sangre!*, Sudamericana, Buenos Aires, 2013.
- Robin, Marie-Monique: *Escuadrones de la muerte. La escuela francesa*, Sudamericana, Buenos Aires, 2005.

- Roseman, Mark: *La villa, el lago, la reunión. La Conferencia de Wannsee y la solución final*, RBA, Barcelona, 2002.
- Rouquié, Alain: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Tomos I y II, Emecé, Buenos Aires, 1981 y 1982.
- Rubín, Sergio: *Secreto de confesión*, Vergara, Buenos Aires, 2011.
- Sáenz Quesada, María: *La primera presidente*, Sudamericana, Buenos Aires, 2016.
- Schmucler, Héctor: *La memoria, entre la política y la ética* (Edición de Vanina Papalini), Clacso, Buenos Aires, 2020.
- Schoklender, Sergio: *Sueños postergados, coimas y corrupción en la patria de los desvíos*, Planeta, Buenos Aires, 2011.
- Seisdedos, Gabriel: *El honor de Dios*, Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2011.
- Seisdedos, Gabriel: *Hasta los oídos de Dios*, San Pablo, Buenos Aires, 1999,
- Seoane, María: *Todo o nada*, Planeta, Buenos Aires, 1992.
- Seoane, María, y Muleiro, Vicente: *El dictador*, Sudamericana, Buenos Aires, 2006.
- Servetto, Alicia: *Córdoba en los prolegómenos de la dictadura*, Revista Estudios Número 15, CEA-UNC, 2004.
- Stepan, Alfred: *Brasil: los militares y la política*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974.
- Taibo II, Paco Ignacio: *Ernesto Guevara, también conocido como el Che*, Planeta, Buenos Aires, 2010.
- Tcach, César: *De la Revolución Libertadora al Cordobazo*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012.
- Uriarte, Claudio: *Almirante Cero*, Planeta, Buenos Aires, 1992.
- Vaca Narvaja, Gustavo, y Frugoni, Fernando: *Fernando Vaca Narvaja, con igual ánimo*, Colihue, Buenos Aires, 2002.

- Vega, Juan Carlos (director) y Sommer, Christian (coordinador): *Derechos Humanos, legalidad y jurisdicción supranacional*, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2007.
- Verbistky, Horacio: *El vuelo*, Planeta, Buenos Aires, 1995.
- Verbitsky, Horacio: *La mano izquierda de Dios*, Sudamericana, Buenos Aires, 2010.
- Vezzetti, Hugo: *Sobre la violencia revolucionaria*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2009.
- Villarruel Victoria: *Los llaman... “jóvenes idealistas”*, CELTYV, Buenos Aires, 2009.
- Vignollés, Alejandra: *Doble condena, la verdadera historia de Roberto Quieto*, Sudamericana, Buenos Aires, 2011.
- Vigo Leguizamón, Javier: *Amar al enemigo*, Ediciones Pasco, Buenos Aires, 2001.
- Weber, Max: *El político y el científico*, Alianza Editorial, Madrid, 1988.
- Wornat, Olga: *Nuestra Santa Madre*, Ediciones B, Buenos Aires, 2002.
- Yofre, Juan Bautista: *“Fuimos todos”*, Sudamericana, Buenos Aires, 2009.
- Yofre, Juan Bautista: *“Nadie fue”*, Sudamericana, Buenos Aires, 2008.
- Yofre, Juan Bautista: *Volver a matar*, Sudamericana, Buenos Aires, 2009.



Pronto habrá pasado medio siglo y los argentinos seguiremos discutiendo una y otra vez sobre los 70. En efecto, los 70 siguen vivos, siempre vuelven. O nunca terminan de pasar. Esos años, verdadera orgía de sueños, ideales, sangre y muerte, vieron desfilar tres “patrias” por una misma nación: la socialista, que nunca llegó a nacer; la peronista, que se hizo añicos en poco tiempo; y la militar, cuyos horrores aún estremecen. No hay tragedia griega que se haya atrevido a tanto y, tal vez por eso, esa década —en la que la violencia política da la impresión de haber sido naturalizada— nos sigue interesando y atrayendo. Sin embargo, buena parte de lo dicho y escrito sobre ella lleva impresa la marca de la simplificación maniquea que presenta al pasado como una sucesión de episodios en el que batallan buenos y malos. En búsqueda de consuelo o justificación, unos y otros construyen su relato y, de ese modo, le hacen flaco favor a la historia. Y a la sociedad, porque ¿puede alguien arrogarse el monopolio del sufrimiento? Este libro sostiene que no. En él, Ceferino Reato renuncia a la interpretación y brinda a sus lectores los elementos para que hagan la propia. Logra así lo que parecía una empresa imposible: reunir todo el conocimiento objetivo sobre los 70 del que disponemos los argentinos hasta la fecha en una obra única, que conjuga la información rigurosa que hace justo su contenido con el pulso narrativo que hace apasionante su lectura.



CEFERINO REATO

(1961, Crespo, Entre Ríos) es periodista y licenciado en Ciencia Política. Fue redactor en la sección Política Nacional del diario *Clarín*; editor jefe en *Perfil*; corresponsal de la agencia internacional de noticias ANSA en San Pablo, Brasil, y consejero de prensa de la Embajada argentina ante el Vaticano. Actualmente, es editor ejecutivo de la revista *Fortuna*; conduce el programa *Retweet* en FM Cultura y participa del ciclo *Intratables*, de América TV . En 2008 publicó *Operación Traviata*, que relanzó los libros de investigación periodística y reabrió la causa judicial sobre el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci. En 2010, *Operación Primicia* —acerca del debut del Ejército Montonero— reveló las controvertidas y millonarias indemnizaciones a los familiares de guerrilleros muertos en el ataque a un cuartel en Formosa durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. En 2012, la versión original de *Disposición Final* —la confesión del ex dictador Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos— se convirtió en un documento histórico. En 2013, *¡Viva la sangre!* conmocionó con su retrato despiadado de la Córdoba del 75, entre la “patria socialista” y la constitución del ADN de la dictadura. En 2015 publicó *Doce noches*, sobre la gran crisis de 2001, una bisagra en la que se sucedieron cinco presidentes en apenas doce jornadas, y en 2017 “*Salvo que me muera antes*”, sobre la muerte de Néstor Kirchner y el nacimiento del “cristinismo”. Todos sus

libros se volvieron rápidamente best sellers y siguen renovando sus lectores. En 2017 fue distinguido por la Fundación Konex como uno de los cinco mejores periodistas de la última década en el rubro Investigación.

Foto: © Alejandra López

OceanofPDF.com

CEFERINO REATO "SALVO QUE ME MUERA ANTES"

EL DÍA QUE MURIÓ KIRCHNER
LA NOCHE QUE NACIÓ EL CRISTINISMO

SUDAMERICANA

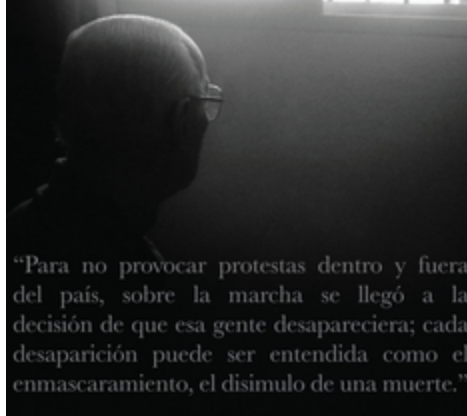


CEFERINO REATO

Autor de *Operación Traviata* y *Operación Primicia*

DISPOSICIÓN FINAL

La confesión de Videla sobre los desaparecidos



"Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte."

CEFERINO REATO

AUTOR DE "OPERACIÓN TRAVIATA",
"OPERACIÓN PRIMICIA" Y "DISPOSICIÓN FINAL"

¡VIVA LA SANGRE!



CÓRDOBA ANTES DEL GOLPE
CAPITAL DE LA REVOLUCIÓN,
FOCO DE LAS GUERRILLAS
Y LABORATORIO DE LA DICTADURA

SUDAMERICANA

CEFERINO REATO

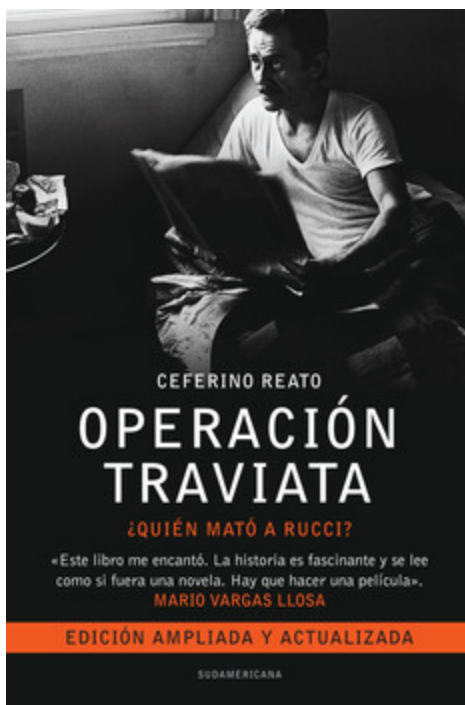
DOCE NOCHES

2001

EL FRACASO DE LA ALIANZA,
EL GOLPE PERONISTA Y
EL ORIGEN DEL KIRCHNERISMO

SUDAMERICANA





Otros títulos del autor en megustaleer.com.ar

Reato, Ceferino

Los 70, la década que siempre vuelve / Ceferino Reato. -
1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sudamericana,
2020.

(Investigación Periodística)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-07-6483-4

1. Investigación Periodística. I. Título.

CDD 070.4

Foto de cubierta: La presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, con Lorenzo Miguel, titular de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas (a su derecha); Casildo Herreras, secretario general de la Confederación General del Trabajo, y Emilio Mondelli, ministro de Economía (a su izquierda), en la sede de la CGT, en la calle Azopardo de la Ciudad de Buenos Aires, el 10 de marzo de 1976, dos semanas antes del golpe de Estado. Archivo Agencia Télam

Diseño de cubierta: Penguin Random House Grupo Editorial

Edición en formato digital: octubre de 2020

© 2020, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A.

Humberto I 555, Buenos Aires

www.megustaleer.com.ar

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del *copyright*.

El *copyright* estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del *copyright* al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.

ISBN 978-950-07-6483-4

Conversión a formato digital: Libresque

Penguin
Random House
Grupo Editorial

OceanofPDF.com

megustaleer

Descubrí tu próxima lectura

Suscribite y recibí
recomendaciones
personalizadas.

SUSCRIBIRSE

Índice

Los 70, la década que siempre vuelve

Introducción. Años vivos

Capítulo 1. Matar y morir

Capítulo 2. El péndulo del General

Capítulo 3. Dos patrias en pugna

Capítulo 4. Una tragedia griega

Capítulo 5. Paso a paso

Capítulo 6. El precio de la victoria

Anexo I. Cuántos fueron

Anexo II. Las listas de Videla y compañía

Anexo III. Los muertos menores

Epílogo. El legado

Fuentes

Bibliografía

Sobre este libro

Sobre el autor

Otros títulos del autor

Créditos

